

***DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA
PROVINCIA DE RIO NEGRO***

XI INFORME ANUAL

PERIODO 2005 - 2006



**Defensora del Pueblo
Dra. Ana Piccinini**

**Defensor Adjunto
Dr. Ignacio Gandolfi**

INDICE GENERAL

- **NOTA DE ELEVACION**
- **INTRODUCCION**
- **INFORME DE GESTION ACTUAL**
 - 1.- **Acciones concretas desarrolladas
(intervenciones más destacadas)**
 - 2.- **Anexo I (Resoluciones)**
 - 3.- **Propuesta de trabajo**
- **GESTION ANTERIOR**
- **INFORME CONTABLE (Anexo II)**
- **INFORME AREA DE PRENSA**
 - 1.- **Anexo III**
 - 2.- **Cuadros estadísticos.**
 - 3.- **Fotos y Recortes Periodísticos**



Provincia de Río Negro



Viedma, 27 de Diciembre de 2006.-

SR. PTE. LEGISLATURA DE RIO NEGRO
ING. MARIO DE REGE
SU DESPACHO

Señor Presidente, Señores Legisladores:

En cumplimiento del mandato constitucional (art. 168 de la Constitución Provincial) vengo a rendir el informe anual de la Defensoría del Pueblo de Río Negro.

Corresponde destacar que fui investida en el cargo de Defensora del Pueblo en la sesión legislativa de fecha 05 de Setiembre de 2006, sin que la Defensora del Pueblo saliente haya informado de la gestión cumplida hasta esa fecha.

Esta circunstancia me lleva a desdoblar el presente informe en dos partes: una pormenorizada, comprensiva de las acciones desarrolladas a partir de mi designación, y otra, de carácter general correspondiente a la gestión anterior.

Hago hincapié en el desarrollo del informe de las acciones consideradas prioritarias, enmarcadas fundamentalmente en la defensa de los derechos e intereses de incidencia colectiva, así como de las medidas adoptadas y a adoptar tendientes a la mayor optimización y eficacia del Organismo.

El informe en cuestión consta de una breve introducción, de un Anexo I donde se transcriben las Resoluciones y presentaciones judiciales más destacadas de estos meses de gestión, de



Provincia de Río Negro



un Anexo II relativo a la ejecución presupuestaria (informe contable), y de un Anexo III del área de Prensa y Difusión.

El trabajo es presentado en formato de papel a la Presidencia de la Legislatura, con copia del mismo en un CD para cada Presidente de los Bloques Legislativos.

Quedando a disposición de esta Honorable Legislatura para brindar toda explicación o ampliación pertinente con relación al presente informe anual, hago propicia la oportunidad para saludar a Ud. y por su intermedio al resto de los legisladores, haciendo llegar mis sinceros deseos de paz y felicidad en estas Fiestas de Fin de Año.

NOTA Nº 11121/06. DPRN.-

Se agregan copias certificadas de las doce (12) Resoluciones del Tribunal de Cuentas que aprueban las rendiciones mensuales, las cuales forman parte del Anexo II (fdo.) Dra. Ana Piccinini. Defensora del Pueblo de Río Negro.

INTRODUCCION. -

El presente informe refleja la finalización de una etapa y el comienzo de una nueva.

Esta nueva gestión al frente de la Defensoría del Pueblo de Río Negro se ha propuesto jerarquizar el rol del Organismo a través de un accionar más eficiente y certero que contribuya a acercar la gente a las instituciones, a achicar la brecha entre las necesidades de la sociedad y el cumplimiento de los fines del estado, a abrir puertas, construir puentes y trazar nuevos caminos.

Por supuesto que constituye un desafío.

Ya sabemos que el Defensor del Pueblo se inviste como sistema de control del accionar de la administración pública, tendiente a recomendar algún mecanismo corrector para la resolución de casos puntuales, ante la afectación de algún derecho.

Hablamos estrictamente de la relación entre los particulares y la administración.

Sin embargo, la tarea del Defensor del Pueblo es mucho más amplia que la de un simple controlador.

Tal como oportunamente expuse en la presentación de la propuesta de trabajo, se trata más de defender y sostener las instituciones democráticas - herramientas indispensables para el sostén de los derechos de los ciudadanos -, que de la confrontación de los quejosos con los responsables del accionar deficiente. Esto lo convierte en un colaborador crítico y no en un opositor del gobierno de turno.

Una mención especial merece la reforma de la Ley 3.635 (modificatoria de la Ley 2.756), a través de la cual se otorga al Defensor del Pueblo la defensa en juicio de los derechos difusos o colectivos, esto es la defensa y protección, entre otros, del Medio Ambiente y la investigación de hechos que lesionen la libertad de expresión e información.

A partir de ello, esta Defensoría del Pueblo se ha propuesto asumir con convicción la defensa de aquellos derechos que no se pueden localizar en un individuo en particular - ni siquiera a veces están representados por grupos formales - sino que están como su nombre lo indica esparcidos en toda la sociedad (difusos). Se trata del interés colectivo concebido como la suma de los intereses individuales.

Esta temática definirá seguramente la nueva impronta de la Defensoría del Pueblo.

En función de ello se piensa priorizar la calidad de las actuaciones que se tramiten, por sobre la cantidad, aun a riesgo de empobrecer algún dato meramente estadístico.

Es que resulta necesario evaluar en términos de costo - beneficio la circunstancia de caratular y tramitar un gran número de expedientes, en muchos de los cuales (diagnóstico a priori de por medio) no podrá satisfacerse el requerimiento o no podrá resolverse el tema, ya sea por cuestiones de incompetencia, por tratarse de asuntos entre particulares o por falta de conductas reprochables hacia la administración pública.

Ello normalmente importa una sobrecarga de trabajo que no siempre se corresponde con la máxima optimización de los recursos material y humano.

Existen otras formas de atender esas necesidades a través de alguna gestión personalizada. Se podrá entonces evacuar alguna consulta, asesorar convenientemente, derivar el tema al organismo correspondiente, hacer las gestiones oportunas, desestimando en su caso algún reclamo si correspondiera, sin que ello importe la tramitación de un expediente ocioso, aunque dejando debida constancia de los esfuerzos realizados.

A este respecto quiero destacar que se está avanzando hacia un esquema de trabajo diferente, en función de un estilo de trabajo diferente que ha de caracterizar esta nueva gestión. El mismo se propone un accionar más ágil, menos burocrático, más eficiente y certero en la respuesta a los interesados.

A tal efecto se han ido estableciendo pautas y reglas claras de trabajo y de funcionamiento interno, producto de criterios compartidos y decisiones consensuadas con los Asesores del Organismo que han aportado su experiencia.

Es que en la búsqueda de una gestión exitosa, el Defensor del Pueblo, en este caso "la" Defensora del Pueblo, debe actuar como agente de la realidad, conciente de sus propias limitaciones y de que ella sola no podrá transformar la sociedad. De ahí la necesidad de actuar con empatía, tratando de comprender la actitud del reclamante pero también el accionar supuestamente deficiente de la administración.

Su gestión ha de ser acertada y oportuna. Deberá en todos los casos actuar con sabiduría, juzgar con prudencia y resolver con imparcialidad.

Así como el número, categoría y periodicidad de los reclamos funcionan en la práctica como indicadores de insatisfacción social, las intervenciones e investigaciones encaradas por la Defensora del Pueblo en procura de satisfacer los intereses afectados, tengan o no resultado

positivo, han de constituir una fuente de datos muy valiosa para detectar los problemas objetivos del funcionamiento de la administración pública, y para prevenirlos.

Justamente en la búsqueda de estas soluciones, esta Defensora del Pueblo se ha propuesto colaborar en la construcción de políticas públicas de promoción y protección de los derechos y garantías consagrados en la Constitución, así como colaborar en todo accionar oficial tendiente al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Este es el desafío.

Por último, y a propósito del informe anual, debo destacar que el accionar de la Defensoría del Pueblo constituye una valiosa fuente de información parlamentaria, ya que en base a sus informes (anuales o especiales), los legisladores tendrán idea sobre qué está fallando en la administración pública y podrán proponer las modificaciones pertinentes.

De cualquier forma, este accionar constituye también una importante fuente de información para el cambio legislativo, que esta Defensora del Pueblo ha de utilizar como herramienta para proponer modificaciones a las leyes.

INFORME DE GESTION ACTUAL

De acuerdo al esquema propuesto, a continuación se detalla las intervenciones más destacadas de esta Defensora del Pueblo, discriminadas por TEMAS O PROBLEMATICAS, a partir de haber asumido el cargo el día 5 de Setiembre de 2006.

*** INSTALACIÓN DE ANTENA DE CELULAR EN LA LOCALIDAD DE CATRIEL (AUDIENCIA PUBLICA).**

Con motivo de la la **audiencia pública desarrollada en la localidad de Catriel** el día 1 del mes de noviembre del corriente año 2006; se formaron las actuaciones Nº 9386/06 "DPRN", **a los efectos de ponderar las consecuencias de las radiaciones NO ionizantes**, radiofrecuencias y micro ondas con frecuencias entre 100 Khz y 300 Ghz en el marco del estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, todo ello dentro del procedimiento legalmente previsto para la emisión de la resolución ambiental.

En dicho marco **destaqué la ausencia en el régimen legal, de una especialista en la problemática que haga las veces del "Defensor del Ambiente"**, para la efectiva protección de los derechos, considero limita sobremanera la riqueza de las audiencias, toda vez que él es quien cargaría con el estudio, evaluación y conclusión sobre la propuesta presentada por la empresa. Su ausencia menoscaba sensiblemente a los vecinos y/o ONGs locales, que ajenos a estructuras de poder e información, quedan a merced de los especialistas contratados por las grandes empresas. Recomendamos en tal sentido su revisión.-

Asimismo **anticipé mi opinión como Defensora del Pueblo en relación a la existencia de dudas científicas suficientes, para afirmar, que la radiación indiscriminada de microondas que genera la red de telefonía móvil sobre la población**, tiene efectos biológicos indeseables e introduce un riesgo para la salud pública.

Por último puse de manifiesto que tenemos normativas que datan de once años; tales como la resolución 202/95 citada precedentemente, que generan en la población constantes dudas sobre su efectividad; así partimos en nuestro análisis que quizás su cumplimiento es insuficiente

para mitigar posibles daños provocados por las radiaciones NO ionizantes en la salud.

Para corregir dicha circunstancia traje a colación lo recientemente manifestado por el presidente de nuestro mas alto tribunal provincial; Dr. Luis Lutz con motivo del congreso recientemente desarrollado en S. C. de Bariloche; *"El estado debe prevenir la contaminación del Aire el agua y el suelo, manteniendo el equilibrio ecológico, conservar la flora la fauna y el valor paisajístico"*; así el factor preventivo o precautorio se destaca como un principio ambiental fundante, circunstancia expresamente reconocida en fallos dictados en consecuencia.-

No obstante ello y en un ejercicio responsable de la función administrativa del estado; solicitamos al ente encargado de evaluar la problemática; tenga presente el principio precautorio analizado a los salvar las omisiones legislativas indicadas.-

El informe detallado del resultado de la audiencia pública celebrada se acompaña como parte integrante del Anexo.

*** COBRO DIFERENCIADO A AFILIADOS AL I.PRO.S.S.**

Nos encontramos actualmente abocados a la tarea de acumular información, evaluando las acciones a seguir respecto de la situación referida a los afiliados al IPROSS residentes en las ciudades de Viedma, C. de Patagones; Guardia Mitre, Boca de la Travesía, San Javier, General Conesa, San Antonio Oeste, Sierra Grande y El Bolsón, quines pagan para la atención primaria la suma de pesos que discrecionalmente determinada el médico tratante, que oscila entre pesos treinta (\$ 30) y pesos cincuenta (\$ 50), tramitando luego un reintegro fijo de pesos diez (\$10) ante el I.Pro.S.S.; cuando los mismos afiliados cuya consulta la realizan en otros lugares de la Provincia, en idénticas condiciones que los citados, abonan la suma de pesos dos con 50/100 (\$ 2,50) en concepto de coseguro.-

Sobre el particular entendemos existe un trato discriminatorio y/o desigualitario en referencia al acceso al servicio de salud en el primer nivel de atención –consulta médica- en relación a los del resto de la Provincia.

Ello es así, por considerarlo violatorio de principios superiores del derecho vigente; entre ellos la igualdad de trato ante situaciones idénticas (art. 16 de la C.N., Artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y artículo 24 de la Convención

Americana sobre Derechos humanos –conf. 75 inc. 22, C.N.-), no discriminación (Artículo 2 de la declaración Universal de los Derechos del Hombre -72 inc. 22 C.N.-); razonabilidad (28, 31 y 33 C.N.); Acceso a la Salud como bien social básico (art. 59 C. Prov.).-

En este sentido en autos “Cabral, Armando Orlando S/ Mandamus” expte. 21161/06, el Superior Tribunal de Justicia sentenció *“...surge con nitidez y claridad que los afiliados se encuentren discriminados y sujetos a la voluntad individual de cada médico tratante, como si estuviéramos transitando la era más cruda de individualismo o dicho de manera más sencilla, como si los contratos de prestación del servicio de salud pública o privado pudieran quedar sujetos al estado de notoria desigualdad médico-paciente, sin atender al resultado que este “modus operando” finalmente tendrá sobre la ecuación económica de la Obra Social que todos los afiliados deben sostener”*.

* Otro de los temas bajo análisis es el cobro de un plus por parte de algunos médicos en toda la provincia, además de la orden de consulta que entregan los afiliados de la obra social provincial.

En ambos sentidos ya se encuentran semiterminados los borradores para la presentación de un Amparo Colectivo.-

*** PRESENCIA DE PCB’S EN MINERA SIERRA GRANDE S.A. E HI.PA.R.S.A. (AUDIENCIA PUBLICA)**

A partir de los sucesos que son de público conocimiento, como lo es la existencia de transformadores que utilizan el líquido refrigerante PCB’s en las empresas Minera Sierra Grande SA e HiPa.R.S.A.; solicité con fecha 2/11/2006 un informe de manera URGENTE al Co.DE.MA. atento el fracaso de las medidas de seguridad tomadas sobre el depósito denominado “Los polvorines”, sumado a ello. Me constituí en la localidad de Sierra Grande (14/11/ 2006), manteniendo reuniones con el Sr. Intendente y luego en las oficinas de la Empresa Minera Sierra Grande S.A. con personal dependiente de la misma que nos comunicó las medidas tomadas para la contingencia.

En dicho marco, **convoque urgentemente a los actores involucrados, a una reunión en la sede de la Defensoría del Pueblo**, para el día 15/11/2006; participaron el Intendente local, Sr. Nelson Iribarren; el Presidente del Co.DE.M.A. Sr. Oscar Echeverría; y representantes de la Secretaría de Estado de Trabajo y del Ministerio de Salud. En la misma y a instancias de esta Defensora del Pueblo, se

convino la realización de una auditoria externa en el complejo minero buscando para ello profesionales de excelencia en la materia.

En un accionar conjunto entre todos los participantes de la reunión **se acordó tomar acciones en referencia a la problemática.** Con ese objeto **se dispuso la realización de una audiencia pública.-**

Según consta en las actuaciones pertinentes destaque la necesidad de extremar las medidas de prevención para asegurar la salud de la población; las condiciones de trabajo en el complejo, el medio ambiente y su articulación con un desarrollo económico sustentable de la zona, adelantando su intervención a tal efecto, particularmente respecto del tratamiento, remoción y disposición de los PCB's contenidos en los transformadores que permanecen en el complejo minero.

Con fecha 22/12/2006 y partir de los análisis realizados por esta Defensora del Pueblo de los informes presentados por las empresas HiParSA y Minera Sierra Grande S.A. en la Audiencia convocada por el CoDEMA y el Municipio local; sobre el depósito, utilización y disposición final de los bifenilos policlorados (PCBs) en ellas, destaque en primer término la presentación extemporánea del mismo por parte de la empresa Minera Sierra Grande S.A, al ser entregado escasos días antes de la audiencia lo que repercutió en la posibilidad de una intervención más profunda.

Sin perjuicio de ello mencioné como **circunstancias relevantes:**

- 1) Fallas en los correspondientes aislamientos, tomas a tierra y disyuntores de los transformadores.-
- 2) Falta de distancias suficientes, obstáculos y ausencia de vallado perimetral.
- 3) Deficiencias en los accesos al depósito, su señalización, desmalezamiento.-
- 4) Falta de identificación de alguno de los transformadores y de todos los capacitores.-
- 5) Se constató también, la falta de cubas y/o recipientes de contención para los eventuales derrames y/o filtraciones.
- 6) Falta el sistema de contención para el caso de derrame de fluidos.
- 7) En casi la totalidad de los transformadores se evidenciaron medidas de seguridad pendientes de cumplimiento
- 8) No describen medidas previas de mitigación de riesgos e impactos de cada transformador.

- 9) Ausencia de un responsable legal idóneo en la materia.
- 10) Falta de capacitación del personal que opera los transformadores con la sustancia

Así, la empresa estima como período razonable para reemplazar los equipos contaminados, el que va desde enero del año 2007 a diciembre del año 2008, plazo que calificué como excesivamente permisivo y que debía ser revisado por la autoridad de control.-

En referencia al informe presentado por la empresa Hiparsa no dudé en afirmar, que a pesar de la escueta información suministrada, el espacio no es suficiente para contener todos los equipos y material con pcbs y, por otra parte, está asentado en arena y sólo rodeado por una pared interna de 30 cms, sin pasillos debidamente aislados para circulación y monitoreo.

Sobre las responsabilidades de la empresa Hipasam; Hiparsa; Minera Sierra Grande s.a., sus sucesores, o bien los organismos de la administración comprometidos en el control de la disposición de los pcbs, destaqué que todos ellos debieron ser mas cuidadosos, en función de la solidaridad ambiental .

A modo de síntesis cerré mi exposición mencionando que ha quedado acreditado a partir de su informe lo siguiente:

- 1) La uniformidad de criterios en referencia a la afectación a la salud provocada por la exposición crónica a la sustancia.
- 2) La prioridad absoluta otorgada por legislación de variado rango - incluso constitucional- (art. 59 C. Prov.) que establece el derecho a la salud de los ciudadanos y a un medio ambiente sano, mediante un desarrollo sustentable.
- 3) El vencimiento de los plazos legales para erradicación del PCBs sin haber aún alcanzado la erradicación total de transformadores contaminados.
- 4) El incumplimiento de la normativa referida a la seguridad e higiene en el trabajo; disposición de residuos peligrosos, e incluso de uso y manipulación de PCB's.
- 5) La importancia para la economía local de un funcionamiento serio y responsable de la unidad económica cuestionada, que no desatienda los derechos colectivos afectados.

EN DEFINITIVA SOLICITÉ, se proceda al retiro inmediato de los transformadores existentes en la empresa minera sierra grande sa e hiparsa.

Asimismo se insistió en la necesidad de realizar un censo estadístico sanitario, serio y bajo parámetros científicos, que brinde información clara y veraz a la población.

Se acompaña en anexo exposición de esta Defensora del Pueblo.

También en materia de PCB **el día Martes 28 de noviembre de 2006, esta Defensora del Pueblo contestó un pedido de informe solicitado por el STJ en el marco de una acción de amparo,** poniendo en conocimiento del Alto Tribunal sobre las acciones en curso en materia de transformadores con PCBs, particularmente sobre la situación en el complejo minero de Sierra Grande.

A tal efecto se remitió copia de distintas actuaciones administrativas en trámite, expedientes ya finalizados tramitados a partir del año 2001, elaborando una síntesis de las acciones que la Defensoría del Pueblo viene desarrollando con relación a la presencia del líquido contaminante denominado PCB en territorio provincial.-

Particularmente se informó que, a través de la Resolución N° 452/06 "DPRN", se tomó intervención poniendo de manifiesto la violación de la normativa vigente, a partir del tratamiento y disposición de PCBs dentro de la Mina de Hierro ubicada en Sierra Grande, donde se encuentran en uso transformadores de energía que utilizan dicho líquido como refrigerante.

Asimismo se requirió al Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CoDEMA), en su calidad de autoridad de aplicación de la Ley 3660, informe sobre los hechos denunciados, actuaciones referidas a la problemática planteada, medidas adoptadas, etc.; solicitando copia de las resoluciones 006/02 y 008/02 emitidas por ese organismo.

También se requirió a la Empresa Minera Sierra Grande SA, informe sobre las acciones desarrolladas con relación al retiro, reemplazo y/o descontaminación de transformadores y otros componentes que contienen PCBs en el complejo minero.

Con relación al reciente derrame de líquido contaminante en Sierra Grande, y con motivo del fracaso de las medidas de seguridad adoptadas, se intensificaron las acciones desde la Defensoría del Pueblo, manteniendo reuniones con el Intendente Nelson Iribarren, luego con el Representante Legal de la Empresa Minera Sierra Grande S.A., y finalmente otra en la sede de la Defensoría en Viedma con la presencia

de autoridades de Salud Pública, CO.DE.M.A. y Secretaría de Trabajo, a efectos de evaluar las acciones a seguir.

Esta Defensora del Pueblo advirtió la necesidad de extremar las medidas de prevención para garantizar las condiciones de trabajo en el complejo, la salud de la población y el medio ambiente. Así se convino la realización en el complejo minero de una auditoría externa de excelencia en materia de seguridad e higiene, a cargo del CODEMA y la Secretaría de Trabajo. Se resolvió además la convocatoria (a cargo del CODEMA) de una Audiencia Pública en la localidad de Sierra Grande, fijada para el día 22 de diciembre a las 9 horas en el salón municipal.

Por último, sin perjuicio de las medidas adoptadas, informé al Superior Tribunal de Justicia que estoy evaluando la oportunidad y procedencia de accionar colectivamente en demanda de una protección de los derechos afectados, ejerciendo la legitimación activa que le otorga la legislación vigente, aguardando para ello el resultado y las conclusiones de la audiencia pública a realizarse.

*** TEMAS VARIOS MEDIO AMBIENTE S. C. DE BARILOCHE.**

A partir de un requerimiento expreso de grupos de vecinos de la localidad de S. C. de Bariloche, nos constituimos en el lugar visitando los lugares específicos donde se planteaban cuestiones ambientales varias; entre ellas:

- a) Bº Parque Lago Moreno –El Redil -. Expte. 9334/06, Paterno Juan José;
- b) Melipal III – cota 900;
- c) Barda del Nireco;
- d) Mallin Km. 12 – Playa Bahía Serena;

Nos constituimos “in situ” en los lugares indicados; charlamos con los vecinos sobre la problemática en particular y su afectación al medio ambiente, se recabó información y documentación varia, sobre expedientes tramitados, fotografías, etc.

Actualmente nos encontramos con las primeras medidas de prueba tomadas a partir de la visita, y analizando los pasos a seguir a los efectos de lograr en cada uno y de acuerdo a las competencias específicas de la Institución.-

*** RECLAMO JUDICIAL POR REINTEGRO DE SUMAS A USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ESTADO DEL MISMO.**

Con fecha 3 del mes de octubre del corriente año se dicta la sentencia interlocutoria judicial en Autos **"PROCONSUMER c/ TURBINE POWER SA Y OTROS S/ CONTENCIOSO ADMINIS."** Tema: cobro en exceso del tope MEM (Mercado Eléctrico Mayorista), art. 41º, inc. c) ley 2902, a los usuarios rionegrinos del servicio de energía eléctrica; por la cual se reconoce expresamente la legitimación para intervenir en la misma como terceros interesados en un proceso colectivo.

En las citadas actuaciones se solicita el reintegro de las sumas cobradas en exceso del tope citado, y por la cual, la empresa distribuidora EdERSA solo puede trasladar hasta el límite establecido en el mismo a los usuarios por ella abastecidos; circunstancia reiteradamente incumplida a partir de la celebración del contrato entre EdERSA y Turbine Power Co. (TPC) de fecha 05/07/1996 aplicado hasta diciembre del año 2001; y suspendido a partir de una medida cautelar presentada en dicha fecha.

Dicho precedente de singular importancia nos permite ser auspiciosos en la concreción judicial de la intervención de esta Defensoría del Pueblo en cuestiones colectivas como la que me encuentro avocada.

*** LA MOVILIDAD DEL RÉGIMEN JUBILATORIO DOCENTE**

El dictado del decreto N° 137/2005 del Poder Ejecutivo Nacional que aplica desde su vigencia (mayo de 2005) la ley 24.016 del Régimen Especial Docente, generó diversas confusiones entre los ciudadanos involucrados.

Las dudas apuntaban a los requisitos de edad y servicios que deben reunir los docentes para acogerse al beneficio especial; a si el suplemento instituido en el decreto generaba derecho al cobro del mismo para los docentes jubilados por la legislación rionegrina, y la duda principal: si la ANSeS reconocía o no el "82 % móvil" instituido en el artículo 4º de la ley citada.

Cabe citar que el caso "Gemelli" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la plena validez íntegra de la ley especial docente N°

24.016, entre cuyos artículos se encuentra la aplicación del 82 % móvil de la jubilación.

Al observar que la ANSeS, basándose en argumentos jurídicos equivocados, no reconoce el criterio de "movilidad" de la ley especial citada, sino que remite a las pautas impuestas por la ley 24.463 de "solidaridad previsional", se dicta con fecha 26 de octubre la Resolución N° 1385/06 por la que se **exhortó al organismo previsional al reconocimiento del 82 % móvil** para todos los docentes rionegrinos jubilados o próximos a ello. Además se comunicó al titular del organismo nacional, la reserva de iniciar una acción colectiva en defensa de los derechos de los docentes rionegrinos.

Con posterioridad se brindó asesoramiento personalizado a todos los docentes que solicitaron información sobre sus derechos y forma de ejercerlos.

Debido a que la Resolución en cuestión, despliega sólidos argumentos jurídicos para cuestionar el criterio de la ANSeS, se transcribe el texto completo de la misma en Anexo.

*** DIFUSIÓN DE LA "MORATORIA PREVISIONAL" (jubilación anticipada y sin aportes)**

Las leyes 25.994 y 24.476 implementaron moratorias previsionales para posibilitar el acceso a su jubilación para aquellos ciudadanos que han trabajado sin tener aportes previsionales. Se debe efectuar un convenio de pagos en la AFIP, que puede consistir en el pago de cuotas mensuales. Se paga la primer cuota, y la segunda y consecutivas se descuentan de la jubilación.

La moratoria de la ley 25.994 tiene vencimiento en abril de 2007. Esta circunstancia agregada a que la Provincia se comprometió a realizar el trámite en forma gratuita y a pagar la primera cuota a los ciudadanos que acrediten no tener ingresos, hizo necesario divulgar en forma masiva los beneficios de la moratoria previsional.

Por ello se trabajó en conjunto con el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Legislatura Provincial, y se diseñó un folleto informativo redactado en modo interrogativo, de fácil comprensión para que cumpla

su finalidad de llegar a todos los ciudadanos rionegrinos con posibilidades de acceder a su beneficio previsional.

El programa de divulgación abarca en una primera etapa la distribución de los folletos a través: del Obispado de Río Negro comprendiendo las tres Diócesis; del Ministerio de Salud de la provincia formando parte de una campaña que implementará el respectivo Ministerio, Hospitales y Centros de Salud Públicos; y de la Casa del Jubilado Rionegrino (CaDeJuR).

En una segunda etapa que se ejecutará luego del receso administrativo, se piensa implementar la distribución a través de los Ministerios de la Familia; de Educación; de Gobierno, y Poder Judicial.

Agradecemos la colaboración brindada por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Legislatura Provincial, y los distintos organismos e instituciones provinciales.

- ***SEGURIDAD***

El desempeño en esta temática responde a los lineamientos expuestos por esta Defensora del Pueblo en la **REUNION MANTENIDA CON EL MINISTRO DE GOBIERNO, EL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y LA PLANA MAYOR DE LA POLICIA DE RIO NEGRO, con fecha 27 de Septiembre de 2006.**

En dicha reunión expuse la postura clara y contundente de esta nueva gestión de la Defensoría del Pueblo, en el sentido de no tolerar los abusos por parte de la Fuerza y de exigir las medidas autocorrectivas pertinentes, a efectos de velar por la seguridad de los ciudadanos rionegrinos con el debido respeto por los derechos humanos.

A partir de los exptes. Administrativos nº 9359/06 y 9378/06 caratulados: "... s/ Presunto maltrato y abuso de autoridad" y "... s/ Denuncia por agresiones físicas", respectivamente, y de distintas denuncias efectuadas en esta Defensoría del Pueblo que involucran a personal de la Policía de Río Negro, **finalmente se dictó la Resolución Nº 1386/06.**

A través de ella, se cursaron sendos pedidos de informe al Sr. Jefe de la Policía, con copia al Sr. Secretario de Seguridad, sobre los hechos denunciados en las citadas actuaciones, en su caso medidas adoptadas y/o actuaciones sustanciadas, sean preventivas o correctivas, con relación a los agentes involucrados en cada uno de los hechos en cuestión, Fiscalía o Juzgado interviniente en su caso, así como todo otro dato de interés.

Se recepcionaron respuestas por parte de la Jefatura de Policía, una de las cuales no resulta satisfactoria por lo que se evalúa reiterar el pedido de informe en términos más duros.

El texto completo de la Resolución se incorpora en el anexo.

*** Independientemente de ello, y a solicitud de los familiares del joven fallecido en la localidad de Valcheta,** ... (quienes han expresado su desacuerdo con la actuación policial), con fecha 18-12-06, esta Defensora del Pueblo solicitó al Sr. Secretario de Seguridad un informe sobre las medidas adoptadas respecto del personal policial de la Comisaría de Valcheta involucrado en la muerte de Pablo Huenteleo.

En la misiva se destaca la repercusión del hecho en cuestión y la sensibilidad que el mismo provoca en toda la sociedad rionegrina, en especial para la familia ...

A través de dicha solicitud se requiere también haga saber si el principal imputado en el caso se encuentra aún en la localidad de Valcheta y en libertad, como lo han señalado con preocupación y malestar los familiares y allegados al joven fallecido.

* En el expte. "... s/ PERSECUCION LABORAL" (Expte. Nº 9531/06 "DPRN"). Se cursó nota al Sr. Subjefe de la Policía corriendo traslado de una presentación efectuada que podría importar persecución laboral y/o abuso de autoridad en contra de un efectivo policial, a partir de hechos irregulares oportunamente denunciados por éste, que involucran el accionar de personal superior de la Subcomisaría 58 del Balneario El Cóndor.

Se solicitó informe sobre el resultado de las investigaciones promovidas con motivo de los hechos denunciados ("Actuaciones Preliminares internas"), así como todo otro dato de interés que guarde relación con el

tema bajo análisis, a efectos de despejar toda duda acerca de posibles represalias en contra del reclamante, que tornarían arbitraria la medida dispuesta. Respuesta pendiente.

* En el expte. Caratulado "... s/ DENUNCIA POR ARBITRARIEDAD" (Expte. Nº 9516/06 "DPRN") se cursó nota al Sr. Secretario de Seguridad transmitiendo gran preocupación por una situación que requería de una especial consideración. Se trata del traslado a la localidad de Choele Choel del Subcomisario ..., quien prestaba servicio en la Unidad Penal Nº 1 de Viedma, decisión cuestionada por arbitraria. Dado que la denunciante se encontraba con un embarazo de alto riesgo, el matrimonio tiene dos hijas menores en edad escolar que verían perjudicado su proceso de aprendizaje, y lo traumático que resultaba el abandono de la vivienda que ocupa con su grupo familiar (en este caso se trata de una vivienda oficial), con la consiguiente mudanza, además del desarraigo y del proceso de adaptación que importa establecer nuevos vínculos sociales.

Se solicitó informe sobre el estado de los trámites, medidas adoptadas de no innovar por la presunta arbitrariedad del acto administrativo, así como sobre las posibilidades concretas de atender a la situación familiar "especial" y permitir que el grupo familiar permanezca en la vivienda oficial que ocupa por unos meses más. Finalmente se resolvió dejar sin efecto el traslado y el efectivo en cuestión pudo quedarse en Viedma.

* Por otra parte se tramita el expte. N 9484/06 cuyo promotor denuncia que un familiar suyo, ... quien presta servicios en la Unidad Penal Nº 1 de esta ciudad de Viedma habría sido *"..objeto de persecución y tratos inhumanos, por parte de los Jefes: ..."*(sic).

En este caso puntual se dictó resolución de avocamiento respectiva, cursando nota al Sr. Secretario de Seguridad a los efectos de que se sirva informar si tuvo conocimiento de los hechos denunciados, y sobre las **medidas adoptadas en consecuencia, particularmente aquellas que resulten necesarias para prevenir y evitar situaciones similares.** Respuesta pendiente.

Otras intervenciones en materia de seguridad:

- De oficio s/ presunto incremento del índice de delitos en la provincia. Resolución Nº 917/06
- Reparación de daños causados por personal policial en vivienda.

- Presunto abuso de autoridad policial

Exptes. N° 9012/06, 9.235/06 y 9250/06, respectivamente.

*** *ALCAIDÍAS***

- Situación educativa en Alcaidía de General Roca (Observatorio de DDHH) Exptes. 7902/05, 7903/05, 7907/05,
- Expte n° 7766/06 S/ Visita a la Alcaidía de Viedma. Resoluciones 1538/05 y 1185/06.
- Detenido alcaidía traslado a hospital 7938/05 y 7984/06 (solucionado)
- VISITA A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE GENERAL ROCA

*** VISITA A INTERNOS DE LA UNIDAD PENAL N° 1 DE VIEDMA** (Expte. N° 9588/06 "DPRN").-

Con fecha 6 de diciembre del 2006 la Defensora del Pueblo y el Defensor Adjunto visitaron en horas de la mañana la Unidad Penal n° 1 de Viedma. La acción de oficio por parte de la Defensoría del Pueblo fue constatar el estado en que se encontraban tres de los internos que habían iniciado una huelga de hambre.

Además de recorrer todas las instalaciones esta Defensora del Pueblo, mantuvo una reunión privada con el interno ... que hacía nueve días realizaba una huelga de hambre. En la oportunidad se observó el buen estado de salud del interno y se escuchó su solicitud de traslado a la Alcaidía de General Roca por encontrarse en esa ciudad toda su familia. Se realizaron las gestiones pertinentes. Las autoridades penitenciarias se comprometieron a enviar los resultados del análisis de la situación del interno que se encuentran haciendo los integrantes del Gabinete Criminalístico.

Por su parte, otro de los internos que había iniciado la huelga de hambre ya había desistido de la medida. En cuanto al tercer interno... , a través de la información recibida por el Director de la Unidad Penal, se supo que el pedido de traslado a la Alcaidía de General Roca era muy dificultoso que se concrete.

Luego de constatar el estado de salud de los internos que iniciaron la huelga de hambre, esta Defensora del Pueblo y el Adjunto recorrieron las

instalaciones de la unidad carcelaria y conversaron con el resto de los internos. Pudieron observar que todos sus espacios están en buenas condiciones edilicias, que hay un buen abastecimiento de comida y que la asistencia médica a los internos funciona en forma normal.

Se solicitó por escrito (tal lo oportunamente comprometido), los resultados de la evaluación de la situación del interno ..., sin perjuicio del conocimiento informal del resultado favorable de la petición de traslado por acercamiento familiar a realizarse en vísperas de las Fiestas de fin de año, circunstancia que fue puesta en conocimiento del interno.

*** *TURISMO ESTUDIANTIL***

(Expte. Nº 9.449/06. Resolución 1461/06)

Iniciamos **DE OFICIO** una investigación ante la falta de controles en los contingentes estudiantiles que ingresan en nuestra Provincia, especialmente los que visitan la localidad de San Carlos de Bariloche.

Advertimos a las autoridades públicas sobre el incumplimiento de las normas legales sobre protección de los menores en el consumo de alcohol y otras sustancias peligrosas. Instamos a que se ejerza mayor fiscalización sobre los contingentes, en punto a los coordinadores responsables de los grupos y su calificación para tal tarea.

Contando con herramientas legales suficientes, entendemos que es imperioso enfatizar las acciones destinadas a proteger la salud e integridad física de los menores durante su estadía, garantizar la seguridad de los mismos y de la comunidad de San Carlos de Bariloche, así como el respeto por la propiedad pública y privada, el medio ambiente y las debidas reglas de convivencia social.

Los amplios informes solicitados se dirigieron al Municipio de San Carlos de Bariloche, Ministerio de Salud, Policía de Río Negro y Ministerio de Turismo, encontrándose en trámite el expediente con respuestas pendientes de incorporación.

Se transcribe texto completo de la Resolución aludida en Anexo correspondiente.

*** TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS**

A partir de un relevamiento efectuado, plan de verificación de la calidad del servicio de transporte publico de pasajeros en nuestra provincia, con

2800 kilómetros de recorrido aproximadamente, cubriendo las distintas regiones de la geografía provincial, línea sur, comarca andina, valle medio, alto valle este, alto valle centro ,alto valle oeste, resulta destacable el dictado de la Resolución N 1449/06, cuyo texto completo se transcribe en anexo.

A través de ella se exhortó a distintas Empresas de Transporte al estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad e higiene, por las graves irregularidades constatadas en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros.

A través de dicha resolución, también se recomendó a la Dirección Provincial de Transporte y Aeronáutica extremar las medidas preventivas y correctivas necesarias, tendientes a revertir la prestación irregular y deficiente del servicio de transporte público de pasajeros en la provincia de Río Negro. Recomendación que a la fecha no ha sido respondida.

*** PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

El tratamiento de la temática incorporó la realización de Primera Jornada Interpoderes sobre los Derechos de las personas con Discapacidad en la que organismos de lo poderes ejecutivo, legislativo, judicial, instituciones y municipios intercambiaron información, reflexiones y sugerencias.

La misma contó con la participación como disertante del Dr. Pablo Rosales, reconocido abogado especialista en la materia, quien realizó un recorrido sobre la legislación, las políticas públicas y las responsabilidades del Estado vinculadas al colectivo de las personas con discapacidad.

El objetivo general consistió en fortalecer el ámbito institucional creado por la Ley Nº 2.055 y trabajar con referentes de distintas áreas gubernamentales, legislativas, judiciales, instituciones y autoridades municipales sobre la problemática de las personas con discapacidad.

Específicamente, se intentó comprometer personal de las distintas áreas mencionadas en las acciones propias del Estado y generar un espacio de discusión sobre las distintas problemáticas que afectan al colectivo de las personas con discapacidad, dejando abierta la posibilidad de proponer acciones concretas para el trabajo interinstitucional.

Estuvieron presentes referentes del Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad, del Ministerio de Salud, del Consejo Local de Villa Regina, Cipolletti y Río Colorado, de la Comisión Nacional de Pensiones,

Asesoría Legislativa del PPR, Municipio de General Roca, Secretaria de Trabajo, Promoción Familiar, Ministerio de Educación, Asociación taller protegido Viedma, Biblioteca de la Legislatura Provincial, Profesionales de la salud, de la Agencia de Deportes de Río Negro, Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado de Valcheta, Poder Judicial, Legisladores Provinciales.

El debate de la Jornada develó gran preocupación ante el incumplimiento con lo previsto por la ley provincial 2.055 que ofrece suficiente marco legal para garantizar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y promover las políticas públicas para la resolución, en conjunto, de las problemáticas planteadas. El Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad requiere de todas las áreas gubernamentales comprometidas por la propia ley para funcionar. La no participación de los mismos atenta contra el cumplimiento de los objetivos propuestos por la norma.

Además se destacó la importancia de la difusión para el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

Por ello se acordó realizar una nueva convocatoria a los integrantes del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad para el mes de febrero del 2007 y solicitar reuniones con las áreas cuya actuación se vincula con otras necesidades de las personas con discapacidad, aún cuando no formen parte del Consejo, para que se incorporen las personas con discapacidad, no solo como sujetos de derechos, sino también como destinatarios de políticas públicas que apunte a mejorar su calidad de vida y su posición en la sociedad.

TRANSPORTE.-

Una mención aparte también merece el tratamiento dado a las denuncias por incumplimiento de la legislación vigente respecto al acceso gratuito del servicio de transporte colectivo terrestre. Se tomó contacto con autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación, Comisión Nacional de Regulación del Transporte Y el Consejo provincial para las Personas con Discapacidad.

Sobre el tema se iniciaron actuaciones de oficio en la que se dictó la Resolución Nº 1383/06 que se transcribe en el anexo.

*** GUARDAS DE HECHO**

Una mención especial merece la situación de los ***niños bajo Guardas de Hecho***. Estos niños, niñas y adolescentes conviven con parientes, en su mayoría abuelos, que acompañan la manutención de los mismos ya que sus padres se encuentran en situación de desempleo, se desempeñan en el trabajo no formal haciendo changas o son beneficiarios de plan asistencial. Habiendo finalizado el trámite ante el correspondiente Juzgado de Familia que otorga la Guarda de Hecho a estos parientes, ANSeS no reconoce dicho trámite y por ende no abona el beneficio de la Asignación Familiar por Hijo. Siendo así esta Defensoría entiende que se está dando un trato diferencia a la infancia, y en este entendimiento remitió nota al Señor Secretario de Políticas de la Seguridad Social y al Señor Secretario Ejecutivo de la ANSeS, exhortando a que cumpla con la Ley 24.714, a fin de evitar que se prive a estos niños en guarda del beneficio de la asignación familiar. La respuesta de estos organismos ratificó la negativa al pago del beneficio.

Actualmente se están recepcionando presentaciones de los ciudadanos para dar inicio a Amparo colectivo en defensa de estos chicos, como así también denuncia penal por incumplimiento de órdenes emanadas de los Juzgados de Familia.

Res. 1387/06 DPRN.-

Exptes. 8007/05; 8128/06; 8204/06; 8407/06; 8730/06; 8864/06; 9145/06; Expíes. N° 9398/06; 9409/06; 9405/06

MANDAMUS CUOTAS ALIMENTARIAS

En lo atinente a la falta de cumplimiento de Cuotas Alimentarias por parte de progenitor alimentante, y ante la falta de reglamentación de la ley que establece la implementación del Registro de Deudores Alimentarios se presentó ante el STJ, Mandamus para propiciar el cumplimiento de la ley. **3475, modificada por la ley nº 4094.**

Se transcribe la presentación judicial en el anexo pertinente.

*** DERECHO A LA IDENTIDAD**

Es de destacar un expediente derivado por una de las Asesoras de Menores de Gral. Roca a este organismo, en el que se trabajó conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos para dar con la hija de una ciudadana que habría sido dada en adopción cuando ésta tenía 16 años. Luego de varias averiguaciones se logró dar con la familia adoptante y a la fecha se está brindando desde aquel organismo apoyo terapéutico para buscar las herramientas que hagan que estos expresen la realidad biológica a la joven y propiciar así un futuro reencuentro con su madre.

Expte. 8108/06.

*** MALTRATO INFANTIL**

Se recepcionaron presentaciones de vecinos y parientes que daban cuenta de situaciones de maltrato infantil. De las mismas, y según el caso, se corrió traslado al Ministerio de la Familia, se solicitó informes a la Policía, se derivó a Asesoría de Menores o a magistrado Judicial, a fin de propiciar la intervención necesaria para la asistencia de los niños en riesgo.

Exptes. 8014/05; 7988/05; 8257/06; 8306/06; 9139/06; 7904.05; 7924.05; 8281/06.

*** CENTROS ASISTENCIALES DE NIÑ@S**

Al cierre de este período, y a partir de situaciones de riesgo de niñ@s y adolescentes alojados en Hogares de Contención, se solicitaron pedidos de informes al Ministerio de Familia en relación a la situación de los CAINA (Centro de Asistencia Integral al Niño y Adolescente). Asimismo se mantuvo encuentro con el Ministro de la Familia a fin de poner en su conocimiento la presentación de familias comprendidas en el Programa Familia Solidaria, dependiente de Fortalecimiento Familiar de ese Ministerio, que expresaban situaciones específicas de los niños bajo su cuidado. (Exptes. 9540/06; 9526/06).

• RELEVAMIENTO EN OFICINAS PUBLICAS

Se llevó adelante por personal especialmente encomendado al efecto, un relevamiento de verificación de calidad del servicio e infraestructura de oficinas publicas en la provincia, en particular en esta primera etapa

respecto del Ipross, en las delegaciones del Alto Valle, Villa Regina, General Roca, Allen, Fernández Oro, Cipolletti y Cinco Saltos.

Por otra parte se realizó una verificación de iguales características en la delegación Viedma del Instituto. Puntos de verificación más destacados: Aspecto exterior de cada delegación, identificación del organismo, acceso para personas discapacitadas, horario de atención, calidad de infraestructura, etc.

Quedan pendientes las medidas a adoptar a partir del relevamiento, encontrándonos a la fecha en estado de evaluación de los pasos a seguir.

*** INFORME DEL AREA DE PRENSA Y DIFUSION**

Las consideraciones generales y datos estadísticos han sido incorporadas al presente informe como Anexo III.

ATENTAMENTE, ANA PICCININI.

ANEXO I

RESOLUCIONES MAS DESTACADAS DE LA NUEVA GESTION.

VIEDMA, 26 de octubre de 2006

VISTO: El expediente número 9246/06 “DPRN” caratulado: “DEFENSORA DEL PUEBLO DE RÍO NEGRO s/ acceso al beneficio del Decreto 137/05 para docentes de Río Negro”, y

CONSIDERANDO:

I

Que se iniciaron las presentes actuaciones de oficio ante reiteradas consultas de docentes en condiciones de jubilarse que manifestaban que no se les reconocía integralmente los beneficios del régimen especial de la ley 24.016.

Que la cuestión en análisis reviste una considerable importancia social, pues involucra aspectos relacionados con la protección previsional que debe garantizar el Estado a los ciudadanos.

Que es necesario realizar un pormenorizado estudio de la problemática descripta, con el objeto de clarificar sus alcances y correcta interpretación legal.

II

La movilidad del régimen general de jubilaciones

Que en el año 1957 se introduce en nuestra Carta Magna el artículo 14 bis que consagra el “constitucionalismo social” en nuestro ordenamiento jurídico. En el tercer párrafo se expresa “*El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social... En especial, la ley establecerá: ... jubilaciones y pensiones móviles...*” De esta manera se concibe a la seguridad social como un derecho inherente a las personas.

Que se debe determinar que es lo que se concibe por “movilidad de las jubilaciones”. Para ello debemos seguir al prestigioso constitucionalista Germán Bidart Campos, quien nos enseña: “*Cuando se otorga un beneficio, su monto originario responde al propósito de asegurar un ingreso generalmente vitalicio que deriva del “status” del beneficiario; ese ingreso es una proyección que sustituye a la remuneración que el agente percibía cuando estaba en actividad; por ello, el monto originario debe guardar una cierta proporción razonable con esa remuneración;*”

“*Cuando ya posteriormente el beneficio está en curso de goce por su titular, la adecuada relación entre el monto del beneficio y la remuneración que percibía en actividad no solo debe mantenerse, sino que debe ser objeto de movilidad, lo que presupone que ese monto “puede” aumentar con respecto a la antigua remuneración, y no solo puede sino que*

“debe”. Así lo prescribe el art. 14 bis, aunque sin descender al detalle del mecanismo de ajuste en esa movilidad periódica; esto último es arbitrio del legislador.”

“No obstante, más allá de la circunstancia histórica de la época –acentuada en mucho posteriormente- hemos de entender ahora que la movilidad no presupone únicamente una necesaria actualización monetaria frente al deterioro que produce un proceso inflacionario, sino un ajuste periódico que, sin congelamiento del haber, y aunque no haya inflación, mantenga al jubilado en una situación de permanente relación proporcionalmente razonable entre pasividad y actividad.” (Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada Tomo II- Ediar 1997 pág.241 y sig.).

Los beneficios previsionales ostentan carácter alimentario, integral e irrenunciable. Entender que es “alimentario” es enfatizar que el haber tiende a brindar cobertura a los riesgos de subsistencia y de ancianidad. Al reconocer la naturaleza sustitutiva de la jubilación, se considera que es la prolongación de la remuneración, *“... después del cese regular y definitivo en la actividad social laboral del individuo como débito de la comunidad por el servicio prestado...”* (CSJN del voto del Dr. Maqueda en autos “Sánchez c/ ANSeS” – Sentencia del 17/05/05).

Que existe movilidad previsional cuando a través de su haber actualizado el jubilado conserva una situación patrimonial similar a la que le correspondería de haber continuado en actividad. (conf. CSJN Fallos: 255:306)

Correspondiendo al Poder Legislativo reglamentar el sistema de movilidad previsional, en el año 1958 se dispuso por ley que la movilidad sería el equivalente al 82 % de la remuneración percibida. En 1969 se sancionan las leyes 18.037 (trabajador dependiente) y 18.038 (trabajador autónomo) que sustituyen el 82 % de la remuneración por un reajuste anual basado en coeficientes. En efecto el artículo 51º de la ley 18.037 determinó que la movilidad jubilatoria se efectuaría en función de las variaciones del nivel general de las remuneraciones.

La ley de Convertibilidad del Austral 23.928 (1991) en su artículo 7º prohibió todo mecanismo de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos, etc. a partir del 1 de abril de 1.991 y prescribió una derogación general de toda norma que fije mecanismos de actualización.

En julio de 1994 entra en vigencia la ley 24.241 que instituye el “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones – SIJP”. Este sistema previsional es “integrado” porque abarca dos subsistemas o regímenes: uno basado en la solidaridad intergeneracional, denominado de “Reparto” administrado por la ANSeS, y otro consistente en la capitalización individual, a cargo de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), llamado de “Capitalización.”

Además integra los regímenes de trabajadores en relación de dependencia y autónomos. Por fuera del SIJP quedaron los regímenes especiales.

Con relación a la movilidad previsional, la ley 24.241 previó en su original artículo 32º que estaría determinada en función de las variaciones entre dos estimaciones consecutivas del AMPO (Aporte Medio Previsional Obligatorio) (posteriormente sustituido por el MOPRE), no pudiendo ello importar la disminución en términos nominales del haber respectivo.

El artículo 160° estableció que a las jubilaciones otorgadas o a otorgarse en base a leyes anteriores a la presente (caso de la ley 18.037) se les aplicarían los parámetros de movilidad de dichas normas.

Finalmente el artículo 168 dispuso la derogación de las leyes 18.037 y 18.038, sus complementarias y modificatorias, con excepción de algunos artículos. No obstante la derogación comentada, el artículo 156° prescribió que las disposiciones de las leyes 18.037 y 18.038 y sus complementarias, que no se opongan ni sean incompatibles con las de esa ley, continuarán aplicándose supletoriamente en los supuestos no previstos por la misma, de acuerdo con las normas que sobre el particular dicte la autoridad de aplicación.

Que en marzo de 1995 se sanciona la **ley 24.463 llamada de “Solidaridad Previsional” que modificó el sistema de movilidad de la ley 24.241** ya que a partir de su vigencia (30/03/95) las prestaciones del Régimen Previsional Público tienen la **movilidad que anualmente determine la ley de presupuesto**, conforme el cálculo de recursos respectivo. (conf. Artículo 5° que modifica el art. 32° de la ley 24.241).

Y agrega el art.7° que en ningún caso la movilidad puede consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y los sueldos de los activos. Sin embargo, desde la sanción de esta ley se han aprobado sucesivas leyes de presupuesto que **no contienen disposición alguna relativa a la movilidad** de los haberes.

Que además se deroga el artículo 160° de la ley 24.241.

Debido a la proliferación de leyes, decretos y resoluciones referidas a la movilidad previsional, los tribunales se pronunciaron contradictoriamente entre si, hasta que el 27 de diciembre de 1996 la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en el caso “Chocobar” afirmando que la ley de convertibilidad 23.928 había derogado la movilidad de la ley 18.037, por ello no se podían aplicar más mecanismos de actualización. Tal afirmación no “afectaba derechos adquiridos”. Es decir se consideraba a la movilidad de las jubilaciones un mecanismo de actualización prohibido por la ley de convertibilidad.

En el decisorio se cuestionaba el artículo 7° apartado 1 inciso b) de la ley 24.463, que ordenaba al Ministerio de Trabajo a dictar índices de movilidad para el período transitorio entre la vigencia de las leyes de Convertibilidad (01/04/1991) y de solidaridad previsional (30/03/1995) para no afectar la garantía de “movilidad” de la Constitución Nacional. Como se había producido una omisión de la Autoridad de Aplicación, las jubilaciones comprendidas se habían mantenido “congeladas”; por ello se declaró la inconstitucionalidad de la norma citada aplicando un criterio de movilidad transitorio entre las fechas indicadas, de acuerdo a lo resuelto por la alzada.

Finalmente se clarificó que desde el 1 de abril de 1995 comenzó a regir el nuevo sistema de movilidad de la ley 24.463 que remite a la ley de presupuesto.

Este precedente, obligatorio para los tribunales inferiores en virtud de lo dispuesto por el hoy derogado artículo 19° de la ley 24.463, fue fuertemente criticado por la doctrina especializada.

Así por ejemplo los doctrinarios Taddei, Mongiardino y Naccarato en su “Manual de la Seguridad Social” (Ed. Ábaco de R. Depalma – 1998 – pág. 702) expresan que

“...el caso denominado “Chocobar” ha recortado mediante el voto de la mayoría el perfil de la nueva caracterización de la seguridad social, estableciendo en síntesis: a) la “medida” de la garantía constitucional (art. 14 bis, Const. Nac.) de la movilidad de los haberes previsionales está dada “por los recursos disponibles” del sistema (consid. 11); b) el principio de “proporcionalidad” del haber previsional y su carácter “sustitutivo” no constituyen principios “cardinales” o “axiomáticos” ensamblados a la referida cláusula constitucional de la movilidad, en tanto solo sirvieron, en su momento, para resolver un conflicto interpretativo meramente “infraconstitucional” (consid. 24); c) las relaciones jurídicas provenientes de leyes jubilatorias tiene naturaleza asistencial, no contributiva (consid. 41); d) el principio de “irretroactividad” de la ley no se aplica a las leyes de previsión social, sino exclusivamente a las que contemplan los derechos y obligaciones que rigen las relaciones de las personas en el derecho privado (consid. 13, del voto concurrente del Dr. Boggiano).”

La doctrina sentada en el precedente que vengo comentando, abandona la interpretación tradicional del Máximo Tribunal al considerar que los haberes previsionales no poseen naturaleza sustitutiva de la remuneración, y que las leyes jubilatorias al ser de derecho público, son de naturaleza “asistencial” y no contributiva.

Con su nueva integración la Corte sentencia en los autos “Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS” con fecha 17 de mayo de 2005, dejando de lado la doctrina de “Chocobar”, y reconoció ajustes en los haberes jubilatorios de la demandante, y la movilidad hasta el 30 de marzo de 1995 (fecha de entrada en vigencia de la ley 24.463) según las variaciones registradas en el índice del nivel general de remuneraciones a que remitía el artículo 53º de la ley 18.037.

Es decir el Tribunal entendió que la ley 23.928 no derogó el artículo 53 de la ley 18037. Remitiéndose a los argumentos de la minoría en el precedente “Chocobar” consideró que el artículo 160º de la ley 24.241 reconocía derechos adquiridos y mantenía a los jubilados por leyes anteriores en el goce de la movilidad de dichas normas, hasta el 30 de marzo de 1995, fecha en que por ley 24.463 se derogó el mencionado artículo, aplicando un criterio distinto de movilidad.

Se ratifican los principios tradicionales sobre la necesaria proporcionalidad y naturaleza sustitutiva de las jubilaciones: es decir la jubilación sustituye a la remuneración que el beneficiario percibía durante su actividad laboral, en una proporción justa y razonable.

Dijo la Corte: *“...el principio básico que sustenta el sistema previsional argentino es el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, entendiendo dicha relación como parámetro razonable para conjugar la naturaleza del haber previsional, los fines que persigue su reconocimiento y el establecimiento de una razonable reglamentación de la materia.”* (CSJN del voto del Dr. Maqueda).

Recientemente el Máximo Tribunal se pronunció en la causa “Badaro” en donde ordenó comunicar al P.E.N. y al Congreso de la Nación el presente decisorio a fin de que en un plazo razonable resuelvan la movilidad de las jubilaciones, adaptándolas al salario que percibe el sector activo de los trabajadores, de conformidad a lo exigido por la ley de solidaridad previsional.

III

Los regímenes especiales de jubilación. La ley 24.016 de jubilación docente

Que como ya se adelantara ut supra el artículo 168° de la ley 24.241 reza: *“Deróganse las Leyes 18.037 y 18.038, sus complementarias y modificatorias, con excepción del Art. 82 y los Arts. 80 y 81 que se sustituyen por el siguiente texto...”*

Por Decreto Reglamentario N° 78/94 del 19 de enero de 1994 se derogaron varios regímenes especiales, entre ellos el del personal docente de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no universitario, comprendido en la ley 24.016.

Esta norma fue declarada inconstitucional por la CSJN en los autos “Craviotto” del 19 de mayo de 1999 al considerar que hubo un exceso en las facultades reglamentarias, pues un decreto de carácter reglamentario no podía derogar una ley.

Con posterioridad por ley 25.668 y decreto 2322/2002 se derogó el régimen especial de funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación.

Que la ley 24.016 (B.O. 17/12/91) aprueba el “régimen especial de jubilaciones y pensiones del personal docente” aplicable para el personal docente de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no universitario de establecimientos públicos y privados.

Que dicha ley exige menores requisitos de edad y servicios que el régimen general. A saber: 60 años de edad los hombres y 57 años las mujeres; siempre que acrediten 25 años de servicios, de los cuales 10 como mínimo deben ser al frente de alumnos. Si no se reúnen los 10 años de servicios al frente de curso, tienen derecho a jubilación si acreditan 30 años de servicios.

“Los servicios en escuelas de ubicación muy desfavorable o de educación especial se computarán a razón de cuatro (4) años por cada tres (3) des servicios efectivos” (art. 3° último párrafo ley citada).

Determina el artículo 4° que: *“El haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente será equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) móvil de la remuneración mensual del cargo u horas que tuviera asignado al momento del cese. En caso de supresión o modificación de cargos, el Ministerio de Cultura y Educación determinará el lugar equivalente que el jubilado docente tendría en el escalafón con sueldos actualizados El Estado asegurará, con los fondos que concurran al pago, cualquiera fuese su origen, que los jubilados perciban efectivamente el ochenta y dos por ciento (82 %) móvil.”*

Que a su turno el artículo 8° expresa que *“El porcentaje de aportes del personal mencionado en el artículo 1, con destino al régimen nacional de jubilaciones y pensiones, será el vigente con carácter general incrementado en dos (2) puntos...”*.

Por Decreto N° 538/1975 se determinó que en el caso del personal docente que desempeñe tareas en zona de frontera y en educación diferenciada, el acceso a la jubilación no tiene límites de edad.

Que a partir de la entrada en vigencia del Libro I de la ley 24.241 (15/07/94) se dejaron de efectuar cotizaciones al régimen de la ley 24.016; y consecuentemente se dejaron de otorgar prestaciones previsionales por ese mismo régimen especial.

Que en febrero de 2005 por Decreto N° 137/2005 se prescribe que los docentes comprendidos en la ley 24.016 *“de conformidad con lo dispuesto en su artículo 8°, deberán aportar una alícuota diferencial del DOS POR CIENTO (2%) por sobre el porcentaje vigente de acuerdo al SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES - Ley N° 24.241 y sus modificatorias.”*

“Este aporte se aplicará a partir de las remuneraciones que se devenguen por el mes de mayo de 2005.”

A continuación el artículo 2° crea el suplemento “régimen especial para docentes”, a fin de abonar a sus beneficiarios la diferencia entre el monto del haber otorgado por la ley 24.241 y el porcentaje del artículo 4° de la ley 24.016 (82%).

Que por Resolución N° 33/2005 de la Secretaría de Seguridad Social (S.S.S.) se reglamenta el decreto narrado. En efecto se consideran servicios docentes a los prestados en el ámbito nacional, provincial (de cajas transferidas a la nación) y a los del régimen docente del personal civil de las fuerzas armadas.

Que el artículo 2, modificado por la Resolución N° 98/2006 S.S.S. (del 21 de septiembre del corriente año) establece que los docentes de provincias que hubieran solicitado u obtenido el beneficio previsional con anterioridad al traspaso del régimen previsional provincial al Estado Nacional tendrán derecho al suplemento “régimen especial para docentes” creado por el decreto 137/2005, si cumplen con los requisitos de su respectiva norma.

Que por Resolución N° 58/2006 S.S.S. modificatoria de la Resolución N° 33/2005, se incorpora el derecho al suplemento especial para los docentes jubilados por las leyes 18.037, 22.955, 23.895, y 24.016.

Que el suplemento docente se percibe previa acreditación a la fecha de la solicitud, del cumplimiento de los requisitos de edad y servicios de la ley especial.

Que el artículo 7º regla que, el porcentaje se calcula sobre la sumatoria de las remuneraciones correspondientes a los cargos y horas que el docente tuviera asignados “al momento del cese.”

Que por Resolución N° 405/2005 de la ANSeS se habilita el registro del régimen especial de docentes. Además se invita a las Secretarías de Educación u organismos competentes de las provincias a firmar un convenio con dicha Administración para la puesta en funcionamiento de UDAT (Unidades de Atención Transitoria), dependencias encargadas de tramitar el beneficio especial para docentes. Se aclara que en las jurisdicciones en donde no se hayan implementado las unidades señaladas se efectuarán en las UDAI (Unidades de Atención Integral).

Finalmente por Resolución N° 873/2006 de septiembre del corriente año el Ministerio de Trabajo Nacional declara que los trabajadores docentes comprendidos en la ley 24.016 carecen de la opción prevista en el artículo 30 de la ley 24.241, debiendo incorporar sus aportes obligatoriamente en el Régimen Público de Reparto administrado por la ANSeS.

Que en resumen, se debe clarificar que:

- Por decreto 137/2005 se “reimplanta” la vigencia de la ley 24.016, determinado el aporte adicional de los activos del 2 % por sobre el aporte ordinario del régimen general;

- Además se establece el pago del suplemento “régimen especial docente” para abonar la diferencia entre el porcentaje del 82 y los beneficios otorgados por:

- 1- Leyes anteriores a la ley 24.241;**
- 2- Leyes provinciales previas a la transferencia de las cajas previsionales a la Nación;**
- 3- La propia ley 24.241.**

- los docentes en condiciones de tramitar su jubilación por la ley especial (24.016 – decreto 137/05) pueden solicitar y acceder al beneficio de la ley referida.

- los trabajadores aportan e ingresan obligatoriamente al Régimen Público de Reparto de ANSeS.

Que con fecha 4 de mayo de 2005 por gacetilla informativa la ANSeS comunica las disposiciones del decreto 137/2005. Se expresa que *“El monto que percibirán los docente será el 82 % del último sueldo percibido. Los docentes en actividad abonarán una alícuota diferencial del 2 % por sobre el porcentaje vigente.”* Citando declaraciones del titular del organismo previsional Sergio Massa se incorpora *“A partir de ahora, vuelve a regir lo que se conoció como el régimen docente de la 24.016, que era la vieja ley de jubilación docente que estableció el 82 por ciento del salario al momento de jubilarse, como jubilación. Esta es la diferencia central.”*

Que posteriormente, con fecha 12 de septiembre de 2006, el organismo previsional informa en su web site que *“El Director Ejecutivo de ANSES, Sergio Massa, anunció ayer que 11 provincias, que recibieron las transferencias de los regímenes jubilatorios de los docentes, ingresarán al beneficio de retirarse con el 82% de sus actuales haberes, equiparándose con el resto del país. Este beneficio de poder jubilarse con el 82% de los ingresos actuales de los docentes fue firmado el año pasado por el presidente Néstor Kirchner a través del decreto 137/05. Las provincias que ingresarán al sistema son: Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Río Negro y Tucumán y la ex caja municipal de la ciudad de Buenos Aires.”*

IV

La “movilidad” de los haberes previsionales del régimen especial docente

Que se infiere de las consideraciones expuestas, que existe un grado de confusión en torno a los alcances del reconocimiento del régimen especial docente de la ley 24.016.

En particular, si la ANSeS reconoce o no la **“movilidad”** de los haberes previsionales del personal docente. Adelanto que no.

Que con fecha 28 de julio de 2005 el Máximo Tribunal se expidió en los autos "Gemelli, Esther Noemí c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad" reconociendo la plena vigencia del 82 % móvil de la ley 24.016 en el reclamo incoado por la docente nombrada.

Que en el decisorio la ANSeS para no reconocer la pauta de movilidad se sustenta en las siguientes premisas:

- Los artículos 129º y 168º de la ley 24.241 derogaron, entre otras, a la ley 24.016, tanto en lo referente a su régimen jubilatorio como a su sistema de movilidad, que sólo continuó practicándose por aplicación del art. 160 de la ley 24.241. Ello se aclaró con la reglamentación del citado art. 168 mediante el decreto 78/94;

- No obstante lo anterior, el artículo 11º de la ley 24.463 derogó el aludido artículo 160º;

En los razonamientos desplegados en el caso “Gemelli”, la Administración expresa que *“la ley de solidaridad previsional tuvo como objeto establecer un sistema único de movilidad para todas las prestaciones financiadas por el régimen público y que sentó un principio de realidad económica al ordenar que los incrementos en los haberes debían ser fijados anualmente en la ley de presupuesto, de acuerdo con el cálculo de recursos respectivo, aparte de que también dispuso que en ningún caso la movilidad podría consistir en el mantenimiento de una determinada proporción entre el haber de retiro y la remuneración de los activos, para lo cual derogó toda otra norma que se opusiera a sus disposiciones (conf. arts. 5, 7 y 11 del cuerpo normativo citado).”* *“No existe un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones ni al contenido económico de los beneficios previsionales.”*

Que la Corte rechazó dichas alegaciones ponderando que la *“ley 24.241 no contiene cláusula alguna que modifique o extinga a la ley 24.016, sin que resulte apropiada la invocación de los arts. 129 y 168 de aquella ley. El primero de ellos establece el tiempo y modo de la entrada en vigor del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, en tanto que el segundo se refiere a la pérdida de vigencia de las leyes 18.037 y 18.038, sus modificatorias y complementarias, entre las que no cabe incluir a la ley 24.016 por tratarse de un estatuto especial y autónomo para los docentes, que sólo remite a las disposiciones del régimen general en las cuestiones no regladas por su texto (art. 2º).”*

Que tampoco puede alegarse que la derogación se haya producido tácitamente; y menos aún fundada en el decreto 78/94 declarado inconstitucional por el mismo Tribunal.

Que además se interpreta que la ley 24.463 no derogó expresamente el régimen docente, pues es una norma que reforma a la ley 24.241 abarcadora del SIJP, pero sin entidad para afectar a otros regímenes especiales y autónomos, *“los cuales se mantienen plenamente vigentes...”* una elucidación distinta *“contraría el principio según el cual la ley general no deroga a la ley especial anterior salvo expresa abrogación o manifiesta incompatibilidad.”*

Finalmente el Máximo Tribunal considera que *“el régimen jubilatorio de la ley 24.016 ha quedado sustraído de las disposiciones que integran el sistema general reglamentado por las leyes 24.241 y 24.463, con el que coexiste, manteniéndose vigente con todas sus características, entre las que se encuentra su pauta de movilidad.”*

Que como dato ilustrativo, es bueno citar la Circular GP N° 19/05 de la ANSeS que contiene normas instructivas para tramitar el suplemento docente que vengo comentando. En efecto en el punto XIII “pago del suplemento - Situaciones Diversas”, se expresa que en caso de beneficiarios de leyes anteriores (caso de la ley 18.037) al haber original se le adicionará la diferencia hasta cubrir el 82 % de la remuneración vigente al 30/03/95, del cargo docente desempeñado al cese.

Que en el supuesto de beneficiarios de la ley 24.241, (con cese acreditado), se diferencia si el cese es posterior o no al 31/03/95. En el primer caso, al haber resultante de la aplicación de la ley general se le adiciona la diferencia del 82 % de las remuneraciones vigentes al cese del cargo. En la hipótesis del cese anterior al 31/03/95 se computa la diferencia en base a las remuneraciones vigentes al 30/03/95.

En resumen, **no es posible invocar disposiciones de regímenes jubilatorios generales para sustentar la restricción del beneficio de “movilidad” docente, que se mantiene vigente en su totalidad, atento no haber sido derogado por ninguna norma expresa.**

La construcción argumental del Tribunal es acabada, al **reconocer** válidamente **la vigencia de los estatutos especiales** sustrayéndolos del régimen general de jubilaciones.

La situación de los docentes rionegrinos

Que por ley provincial 2.988 (BO Río Negro 10/06/96) se aprueba el Convenio de Transferencia del Sistema Previsional Social de la Provincia al Estado Nacional firmado con fecha 31 de mayo de 1996, y con vigencia a partir del 2 de mayo del mismo año. Se dispuso la creación de la Unidad de Control Previsional (UCP) como organismo administrativo encargado de resolver los beneficios pendientes, y como control del cumplimiento por el Estado Nacional de las obligaciones asumidas en el Convenio.

La Cláusula SEGUNDA obliga a la Provincia como condición esencial de validez del Convenio a *“mantener libre de afectaciones los recursos de coparticipación federal”*.

A su turno la disposición DUODÉCIMA establece que la Provincia autoriza al Estado Nacional *“... a retener e ingresar al Sistema Único de Seguridad Social hasta el cien por cien (100 %) diario de los recursos que le corresponden a la PROVINCIA...”* en virtud de la ley de Coparticipación Federal de Impuestos.

Esto es, la Provincia de Río Negro transfiere la obligación de pago de beneficios al Estado Nacional -ANSeS, y esta última ingresa al sistema de Seguridad Social Nacional los aportes y contribuciones de los activos provinciales. Además la Provincia garantiza con sus fondos coparticipables el cumplimiento de las cláusulas del Convenio.

En este sentido el Convenio dispone que el Estado Nacional toma a su cargo el pago *“a los beneficiarios de las jubilaciones y pensiones otorgadas y reconocidas en las condiciones fijadas por la normativa descriptiva en la cláusula primera comprometiéndose a respetar los derechos respectivos. Los montos de cada una de las prestaciones cuyo pago asume el ESTADO NACIONAL serán respetados, con el límite fijado en materia de topes por las leyes nacionales N. 24.241 y N. 24.463. El Estado Nacional asume las prestaciones en estas condiciones y sus montos, desligadas de la causa que les dio origen. La garantía del Estado Nacional a este respecto se extiende hasta el límite admitido por la legislación previsional nacional vigente o la que la sustituyera en un futuro, sin que puedan invocarse derechos irrevocablemente adquiridos en contra de sus disposiciones.”* Es decir que los haberes jubilatorios se encuentran sujetos a topes fijados por la legislación previsional nacional.

Que así los docentes activos rionegrinos ingresaron obligatoriamente al SIJP de la ley 24.241, que comprende la afiliación al régimen de Reparto o Capitalización. Por su parte los que obtienen su beneficio con posterioridad a la transferencia, lo hicieron bajo las disposiciones jubilatorias generales (vg. leyes 24.241 y 24.463). Y desde mayo de 2005 bajo las normas del Decreto PEN 137/05.

Que de la consulta efectuada al Ministerio de Educación Provincial surge que desde la Transferencia de la Caja, un total de 99 docentes han adquirido su beneficio previsional en el marco de las disposiciones de la ley 24.241. Además se informa que 50

agentes han adquirido su beneficio de acuerdo a lo normado por el Decreto N° 137/2005 (ley 24.016).

Que en el supuesto de los beneficiarios de la ley 24.241, deben solicitar el pago del suplemento “régimen especial para docentes” para compensar la diferencia de porcentaje del régimen general y el 82 de la ley 24.016. Por su parte los jubilados conforme las previsiones del Decreto de 2005 adquieren su derecho en base al 82 del haber al momento del cese pero sin la pauta de movilidad de la ley 24.016.

Que además el organismo requerido informa que existen 3746 docentes afiliados al régimen de reparto y 11.941 al régimen de capitalización individual a cargo de AFJP. El monto mensual de aportes personales con destino al régimen de reparto oscila en la suma de \$ 566.517,74, y por su parte los aportes para el sistema de capitalización son de \$ 1.481.517,70. En conjunto los activos docentes aportan el adicional del 2 % que configura un importe total mensual de \$ 367.050,61.

Que ahora, aportarán obligatoriamente para el régimen de Reparto administrado por la ANSeS, en un porcentaje del 13 sobre el haber remunerativo (11 % del régimen general y 2 % en concepto de adicional “régimen especial para docentes”).

VI

Conclusiones

Que se deben extraer las siguientes conclusiones:

1- La ley 24.016 crea en el año 1991 un régimen especial de jubilación para el personal docente, con menores exigencias de edad y de aportes con servicios que el régimen general.

2- El artículo 4 de la ley citada recepta sin márgenes de duda la aplicación del 82 % móvil para el haber de jubilación. Además se impone la obligación para el Estado de asegurarlo.

3- Las leyes 24.241 y 24.463, **no derogaron la ley especial de jubilación docente 24.016.**

4- El Decreto 78/94 pretendió derogar la ley 24.016, pero no pudo hacerlo válidamente, pues fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Craviotto”, por considerarlo un exceso en las facultades reglamentarias.

5- La vigencia de la ley 24.016 incluyendo la pauta de movilidad, es confirmada por el Máximo Tribunal en el caso “Gemelli”.

6- El Decreto del PEN 137/2005 dispone la aplicación del aporte adicional del 2 % y el pago del suplemento “régimen especial docente” a partir del mes de mayo de 2005.

7- El suplemento “régimen especial docente” se abona a los docentes jubilados, siempre que así lo soliciten a la ANSeS.

8- Para los docentes jubilados o que se jubilen con posterioridad al mes de mayo de 2005, se aplicará el 82 % del último sueldo **al momento del cese**, que **no es el 82 % móvil** reconocido por la ley 24.016.

9- El suplemento “régimen especial docente” cubre la diferencia existente entre el monto que resulta de las leyes generales anteriores y el 82 % de la remuneración correspondiente al cargo que tuviera asignado al momento del cese, pero sin la aplicación móvil.

10- Por ello, la ANSeS no está incorporando el reconocimiento de la pauta de “movilidad”, a la que alude expresamente el artículo 4º de la ley 24.016.

11- La movilidad de la jubilación docente debería ser aplicada sin necesidad de iniciar juicio contra el Estado. Pues de lo contrario la administración se verá sujeta al riesgo de afrontar condenas masivas que implican mayor onerosidad en razón de las costas y gastos judiciales.

12- El régimen de los docentes de educación especial y de frontera, se encuentra regulado en el Decreto N° 538/75 determinándose que acceden a su jubilación sin límite de edad, con un haber equivalente al 82 % de las remuneraciones del cargo al momento del cese. Para el cálculo de los servicios, se aplica un computo especial (3 años de servicios efectivos equivalen a 4), que ya estaba reconocido por la ley 24.016.

VII

Que en virtud de las consideraciones expuestas corresponde **EXHORTAR** al Sr. Director Ejecutivo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) Sergio Tomás Massa a que disponga la aplicación de la **pauta de movilidad** reconocida por el artículo 4º de la Ley 24.016 para:

1- los docentes de la provincia de Río Negro jubilados por la Ley 24.241; y los que hubieran obtenido su beneficio previsional con anterioridad al traspaso del régimen previsional provincial al Estado Nacional;

2- los docentes que obtuvieron u obtengan su beneficio previsional de conformidad con el Decreto 137/2005, Ley 24.016, y Decreto 538/75 (de educación especial o de frontera).

Que sin perjuicio de ello, esta Defensoría del Pueblo en uso de sus facultades legales hace reserva expresa de ejercer la defensa judicial del derecho colectivo de los docentes rionegrinos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 inciso b) de la ley 2756, modificado por la ley 3635 de la provincia de Río Negro.

Por ello,

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Exhortar al Sr. Director Ejecutivo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) Sergio Tomás Massa a que disponga la aplicación de la **pauta de movilidad** reconocida por el artículo 4º de la Ley 24.016 para: 1- los docentes de la provincia de Río Negro jubilados por la Ley 24.241; y los que hubieran solicitado u obtenido su beneficio previsional con anterioridad al traspaso del régimen previsional provincial al Estado Nacional; 2- los docentes que obtuvieron u obtengan su beneficio previsional de conformidad con el Decreto 137/2005, Ley 24.016, y Decreto 538/75 (de educación especial o de frontera).-

ARTÍCULO 2º: Comunicar al Sr. Director Ejecutivo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) Sergio Tomás Massa, que esta Defensoría del Pueblo en uso de sus facultades legales hace reserva expresa de ejercer la defensa judicial del derecho colectivo de los docentes rionegrinos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 inciso b) de la ley 2756, modificado por la ley 3635 de la provincia de Río Negro.-

ARTÍCULO 3º: Poner en conocimiento de los ciudadanos rionegrinos la presente Resolución.-

ARTÍCULO 4º: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

RESOLUCIÓN N° 1385 /06 “DPRN”

Viedma, 26 de octubre de 2006

Visto. Los exptes. Administrativos n° 9359/06 y 9378/06 caratulados: “... s/ Presunto maltrato y abuso de autoridad” y “... s/ Denuncia por agresiones físicas”, respectivamente, y

Considerando:

Que los expedientes de la referencia son promovidos por ciudadanos de Cinco Saltos y Viedma quienes formulan denuncias que involucran a personal de la Policía de Río Negro.

Que por otra parte, en los últimos días se toma conocimiento a través de publicaciones periodísticas de otros hechos en los que aparecen implicados agentes de la Policía de Río Negro. Nos referimos, precisamente, al caso del joven ... de la localidad de Valcheta, muerto a manos de dos efectivos policiales en un grave episodio, al brutal ataque recibido por el joven Carlos Platero en un local bailable de Villa Regina, presuntamente por dos agentes que se encontraban de civil, hecho que casi le costó la vida y el caso del reportero gráfico José Delloro, detenido por personal policial en las cabinas de peaje de Cipolletti y alojado en un calabozo de la comisaría IV de esa ciudad, tras un confuso accionar (ver Diario Río Negro, ediciones de los días 27-09-2006, 28-09-2006, 04-10-2006, 10-10-2006, 11-10-2006, 12-10-2006; Noticias de la Costa, ediciones de los días 09-10-2006, 24-10-2006 y La Mañana de Cipolletti, edición del día 10-10-2006)

Que con fecha 27 de Septiembre de 2006 esta Defensora del Pueblo de la Provincia de Río Negro mantuvo una reunión con el Sr. Ministro de Gobierno Iván Lázzari, con el Secretario de Seguridad Dr. Miguel Bermejo y con la Plana Mayor de la Policía de Río Negro, en la que se abordaron aspectos vinculados con la seguridad, materia prioritaria en la agenda de esta Defensoría. En la misma ocasión, dimos formal traslado de dos denuncias correspondientes a los Exptes. N° 9.234/06 y N° 9.250/06, que a la fecha se encuentran pendientes de respuesta.

Que en de dicha reunión se expuso la postura clara y contundente de la nueva gestión de la Defensoría del Pueblo, en el sentido de no tolerar los abusos por parte de la Fuerza Policial y de exigir las medidas autocorrectivas pertinentes.

Que ello así, se concluyó en el firme compromiso de interactuar y trabajar mancomunadamente, velando por la seguridad de los ciudadanos rionegrinos con el respeto debido de los derechos humanos.

Que en aquella oportunidad enfatizamos en la importancia de que el accionar policial sea contundente en la prevención del delito sin que se cometan abusos.

Que ante la innumerable cantidad de hechos denunciados tanto ante esta Defensoría del Pueblo, como en los medios regionales de prensa, y que resultan de notorio y público conocimiento, dejamos expresa nuestra honda preocupación y demandamos una accionar efectivo concreto en la adopción de medidas por la propia Fuerza Policial que den una señal clara a la ciudadanía de autocorrección ante los abusos en el accionar de sus miembros.

Que a tal fin, resulta necesario mantener una comunicación más fluida entre este Órgano de Control y los organismos involucrados en la temática, así como maximizar la colaboración y trabajo compartido comprometidos en la citada reunión.

Que en consecuencia, sin perjuicio del correspondiente avocamiento a las cuestiones planteadas en los expedientes de referencia y traslado pertinente (art. 17 ley 2756), se estima oportuno cursar un pedido de informe al Sr. Jefe de las Policía de Río Negro, con copia al Sr. Secretario de Seguridad, a los efectos de que se sirva informar las acciones concretas llevadas adelante a partir de los hechos acaecidos (art. 11, inc. a) ley 2756).

Que la información que se requiere comprende el detalle de las medidas adoptadas y/o actuaciones sustanciadas, sean preventivas o correctivas, con relación a los agentes involucrados en cada uno de los hechos descriptos en los considerandos que anteceden y que trascendieran en los medios regionales de prensa, Fiscalía o Juzgado interviniente en su caso, así como todo otro dato de interés relacionado con el tema.

Que sin perjuicio de los plazos legales para la contestación de los pedidos de informes, se considera oportuno que la respuesta del requerimiento en cuestión sea remitida a la mayor brevedad, a efectos de posibilitar la continuidad a las actuaciones en trámite y brindar pronta respuesta a los interesados.

Por ello:

**LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º.- Avocarse al conocimiento de las cuestiones planteadas en los expedientes citados en el Visto de la presente, corriendo formal traslado de las presentaciones efectuadas al Sr. Jefe de la Policía de Río Negro.

ARTICULO 2º.- Solicitar informe al Sr. Jefe de la Policía de Río Negro, con copia al Sr. Secretario de Seguridad, respecto de las medidas adoptadas y/o actuaciones sustanciadas, sean preventivas o correctivas, con relación a los agentes involucrados en cada uno de los hechos descriptos en los considerandos que anteceden y que trascendieran en los medios regionales de prensa – cuyas copias se adjuntarán-, Fiscalía o Juzgado interviniente en su caso, así como todo otro dato de interés relacionado con el tema.

ARTICULO 3º.- Solicitar las respuestas pendientes a los traslados conferidos en los Exptes. N° 9.234/06 y N° 9.250/06.

ARTICULO 4º.- Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese

Viedma,

VISTO: El Expediente N° 9401/06 “DPRN”, caratulado “Defensoría del Pueblo de Río Negro s/ Prestación Irregular del Servicio Público de Pasajeros”, y

CONSIDERANDO:

Que el transporte público de pasajeros constituye un servicio público esencial, y como tal debe ser prestado de manera adecuada y eficiente.

Que a partir del día 04 de Octubre de 2006 y durante los días subsiguientes, personal de la Defensoría del Pueblo de Río Negro efectuó un relevamiento relativo a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en territorio provincial.

Que se recorrieron los tramos Viedma - Villa Regina, Villa Regina - Chichinales (ida y vuelta), Villa Regina - Valle Azul (ida y vuelta), Villa Regina - Cipolletti (ida y vuelta), Villa Regina - Choele Choel (ida y vuelta), Villa Regina - Gral. Roca, Gral. Roca - Maquinchao, Maquinchao - Bariloche, Bariloche - El Bolsón (ida y vuelta), y por último el tramo Bariloche - San Antonio Oeste - Viedma (en tren de SE.FE.PA.).

Que los recorridos en cuestión (salvo el último tramo) se hicieron en ómnibus de las distintas empresas de transporte que prestan sus servicios en la región.

Que como resultado del relevamiento efectuado, es posible advertir graves irregularidades en la prestación del servicio, según consta en el acta informativa que se encuentra incorporada a las presentes actuaciones, y cuyas partes pertinentes se transcribe a continuación.

Que, en general se observa que los choferes no hacen uso del cinturón de seguridad, mientras que en los primeros cuatro asientos, si bien las unidades están dotadas de los cinturones correspondientes, nadie los usa y ningún chofer recomienda hacerlo.

Que particularmente se ha verificado "...Ruidos molestos a bordo, ventanillas flojas... por momentos EXCESO de pasajeros PARADOS en la unidad, mas del 20 % autorizado... Los asientos de plástico ... muy chicos e incómodos para el transporte interurbano de pasajeros... Unidad EXTREMADAMENTE SUCIA, asientos traseros (últimos 5) nadie los usa por la cantidad de tierra acumulada, vidrios FISURADOS, filtraciones de aire por la puerta trasera, que provocan un descenso de la temperatura importante...Algunos asientos están ROTOS Y MUY SUCIOS, los caños pasamano también están MUY SUCIOS, no funciona el LIMITADOR DE VELOCIDAD, NO FUNCIONA EL VELOCÍMETRO, NO FUNCIONA EL CUENTAVUELTAS, de forma tal que no hay manera de saber aunque sea aproximadamente la velocidad de desplazamiento de la unidad...". Corresponde al tramo Villa Regina - Chichinales de la Empresa Ko-Ko.

Que asimismo se pudo constatar que: "...La unidad en cuestión presentaba un aspecto deprimente; TAPIZADOS ROTOS... los cinturones están literalmente tirados en el piso , todos pisoteados. Las últimas butacas son un colchón de tierra... Funciona UNA SOLA ESCOBILLA DEL LIMPIA PARABRISA, Y SU BARRIDO ES DEFECTUOSO, RUIDOS MOLESTOS DENTRO DE LA UNIDAD, polvo en suspensión como resultado de la falta de HIGIENE INTERNA... El piso estaba muy sucio, HABIA UN VOMITO... ESCUPITAJOS

... La unidad tenía GOTERAS... No funcionaba, NI EL LIMITADOR DE VELOCIDAD, NI EL VELOCÍMETRO, NI EL CUENTA VUELTAS, POR LO TANTO NO HUBO FORMA DE CALCULAR LA VELOCIDAD... En la localidad de Chichinales no existe máquina expendedora de boleto, y ni hablar de Valle Azul... en Chichinales en la agencia, se expenden los boletos desde una boletera de colectivo, sin destino y sin importe, en el caso de Valle Azul, lo extiende el chofer, cuando da vuelta en una tranquera y emprende el regreso a Villa Regina... otro dato para destacar, el boleto Regina-Valle Azul, cuesta en la boletería de la primera \$2, pero el que se saca para regresar y como va hasta la mencionada tranquera, cuesta \$ 2,80 es de boletera y no tiene importe ni destino...”. Corresponde al tramo Villa Regina—Valle Azul de la Empresa Ko-Ko.

Que por otra parte se pudo constatar que “... La higiene interna de la unidad es **REGULAR**, las bocas de ventilación y las luces de lecturas muy deterioradas... aspecto general de la unidad **REGULAR, SANITARIO CON MUY MAL OLOR**.”. Corresponde al tramo Villa Regina—Choele-Choel de la Empresa Centenario (Unidad N° 95, circuito Cinco Saltos Viedma).

Que asimismo se verificó que “...No anda el limitador de velocidad... por momentos el número de pasajeros parados rebasa el número permitido, unidad bastante ruidosa... los comentarios de los pasajeros, que sostienen que el servicio es cada vez peor, que viajan parados, que parecen animales, que la empresa pone los peores coches a la mañana temprano, cuando menos se los nota, que a medida que avanza la mañana, los van reemplazando por los mejores, que los coches que no cumplen servicio por ruta son una calamidad, que los chóferes no usan cinturón de seguridad y que solo lo hacen cuando ven un operativo policial en ruta, que se cargan en horas picos las unidades hasta que no entra más ni un alfiler, que exceden la velocidad, etc, etc.”. Corresponde al tramo Villa Regina—General Roca- Cipolletti de la Empresa Ko -Ko.

Que a su turno surge del relevamiento “... Sanitario NO TIENE, sistema de climatización deficiente, MUCHO CALOR O MUCHO FRIO, no hay términos medios, lo que ocasiona no pocas molestias... Sanitarios: es verdaderamente problemático que estas unidades no posean sanitarios, las largas etapas de recorrido, hacen que el pasaje este sujeto a solucionar sus necesidades en medio del campo, lo que para una dama, una mamá embarazada o una señora mayor, es humillante...”. Corresponde al tramo Maquinchao—San Carlos de Bariloche de la Empresa 3 de Mayo.

Asimismo pudo constatar (Unidad N° 42 de la empresa Vía Bariloche, color verde y blanco) que “NO SE UTILIZAN LOS CINTURONES DE SEGURIDAD, NI EL CHOFER NI LOS PRIMEROS CUATRO PASAJEROS... Sanitario, NO POSEE...”. Corresponde al tramo San Carlos de Bariloche—El Bolsón de la Empresa El Valle-Vía Bariloche.

Que las peores condiciones de higiene y seguridad corresponden a unidades de la Empresa Ko Ko, particularmente las que recorren los tramos Villa Regina-General Roca-

Cipolletti (servicio común que va por las chacras), y el tramo Villa Regina – Chichinales - Valle Azul, ida y vuelta.

Que también puede advertirse irregularidades en el recorrido Villa Regina – Choele Choel (circuito Viedma – Cinco Saltos) de la Empresa Centenario, como así también en el tramo Maquinchao—San Carlos de Bariloche de la Empresa 3 de Mayo, y el tramo San Carlos de Bariloche—El Bolsón de la Empresa El Valle-Vía Bariloche.

Que es responsabilidad del Estado garantizar la prestación del servicio en condiciones adecuadas a todos los usuarios rionegrinos.

Que las irregularidades constatadas constituyen incumplimientos a la normativa vigente, en particular a la Ley provincial N° 651 y su Reglamentación

Que además de las facultades y responsabilidades a cargo de la autoridad de aplicación en la materia, Dirección Provincial de Transporte y Aeronáutica, resulta urgente y necesario accionar desde esta Defensoría del Pueblo de Río Negro en demanda del estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Que en tal sentido, resulta procedente EXHORTAR a las empresas de transporte cuyas graves irregularidades han sido constatadas y son denunciadas a diario por los usuarios del servicio, al cese inmediato de las transgresiones flagrantes a la normativa vigente.

Que asimismo corresponde RECOMENDAR a la Dirección Provincial de Transporte para que exteme las medidas conducentes tendientes a revertir la prestación irregular del servicio que padecen los usuarios dentro del territorio de la provincia de Río Negro.

Que sin perjuicio de las medidas urgentes dispuestas a través de la presente resolución, esta Defensoría del Pueblo procurará generar un ámbito adecuado de debate, con los distintos actores sociales involucrados en el tema del transporte público de pasajeros, tanto institucionales como empresariales, a fin de que todos ellos tomen conciencia del peligro que conlleva la prestación deficiente del servicio, de las graves consecuencias que resulta imperioso prevenir y evitar, y de la necesidad de unificar esfuerzos en procura de un servicio más seguro, placentero, eficiente, económico y de calidad que cumpla con los mandatos constitucionales, sin que ello constituya obstáculo para la rentabilidad de la actividad.

Cabe destacar que mediante Resolución N° 071/05 “DPRN” (febrero de 2005) se formuló recomendación a la Dirección Provincial de Transporte y Aeronáutica a efectos de que investigara una serie de hechos constatados por personal de esta Defensoría del Pueblo, aplicando en su caso las sanciones correspondientes. Dicha recomendación se tuvo luego por

incumplida (Resolución N° 1432/05 “DPRN”), notificándose de ello a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia de Río Negro, a los efectos correspondientes.

Por ello,

**LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E :**

Artículo 1°: EXHORTAR a la Empresa de Transportes Ko Ko S.R.L. al estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad e higiene, por las graves irregularidades constatadas en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, particularmente en el servicio común correspondiente a los tramos Villa Regina-General Roca - Cipolletti, y Villa Regina- Chichinales -Valle Azul , ida y vuelta.

Artículo 2°: EXHORTAR en idéntico sentido a la Empresa de Transportes Centenario respecto del tramo Villa Regina – Choele Choel (circuito Viedma-Cinco Saltos), a la Empresa 3 de Mayo respecto del tramo Maquinchao—San Carlos de Bariloche, y a la Empresa El Valle-Vía Bariloche respecto del tramo San Carlos de Bariloche—El Bolsón..

Artículo 3°: RECOMENDAR a la Dirección Provincial de Transporte y Aeronáutica se extremen las medidas preventivas y correctivas necesarias, tendientes a revertir la prestación irregular y deficiente del servicio de transporte público de pasajeros en la provincia de Río Negro.

Artículo 4°: Todo ello con fundamento en los considerandos expuestos en la presente resolución, todos y cada uno conformes a Derecho.

Artículo 5°: Notifíquese, regístrese, hágase saber.

Viedma, 26 de octubre de 2006

VISTO: el expediente N° 9387/06 caratulado “Defensora del Pueblo S/ situación del transporte y las personas con discapacidad”, y

CONSIDERANDO:

I

Que del registro de la Defensoría del Pueblo de Río Negro existen numerosas actuaciones en las que se denuncian o exponen incumplimientos de la normativa vigente que contempla las situaciones de las personas con discapacidad que requieran utilizar los distintos tipos de transporte terrestre

Que la Defensora del Pueblo comisionó a personal de este organismo para asistir el pasado día 19 de septiembre a una audiencia llevada a cabo en el Salón Negro del Ministerio de Economía y Producción de Nación, convocada por Secretaria de Transporte Automotor de Nación para el tratamiento de las distintas problemáticas que se suscitan en torno al cumplimiento al Decreto n° 38/04 que otorga el Pase Gratuito en el transporte terrestre de corta, media y larga distancia para las personas con discapacidad.

Que dicha reunión, tuvo como objeto avanzar en una reglamentación clara y accesible para el cumplimiento del Decreto 38/04 y en esa oportunidad se encontraban presentes autoridades de la Coordinación de Políticas de Transporte Automotor de Pasajeros de la Subsecretaría de Transporte, de la Gerencia de Control de Calidad del Servicio de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (C.N.R.T.), de la Dirección del Servicio Nacional de Rehabilitación, el Asesor legal de la Cámara Nacional de Empresarios de Transporte (C.E.L.A.DI.), y representantes de las Defensorías del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de Neuquen y de la Provincia de Río Negro.-

II

Que la Ley N° 22.431, y su modificatoria Ley n° 24.314, establece el Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, que contempla entre otros aspectos la superación de las barreras existentes en los transportes (Artículo 22°).-

Que se entiende por barreras en los transportes a aquellas existentes en el acceso y utilización de los medios de transporte público terrestre, aéreo y acuático de corta, media y larga distancia. La supresión de las mismas se regirá por los siguientes criterios:

- Los vehículos de transporte público tendrán dos asientos reservados señalizados y cercanos a la puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida. Dichas personas estarán autorizadas para descender por cualquiera de las puertas.
- Los coches contarán con piso antideslizante y espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de ruedas y otros elementos de utilización por tales personas.
- Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social.
- La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las características de los pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada.
- Las empresas de transportes deberán incorporar gradualmente en los plazas y proporciones que establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas con movilidad reducida.
- A efectos de promover y garantizar el uso de estas unidades especialmente adaptadas por parte de las personas con movilidad reducida, se establecerá un régimen de frecuencias diarias mínimas fijas.

Que por su parte, el Decreto 38/04, establece que el certificado de discapacidad previsto por la Ley N° 22.431 y su modificatoria será documento válido para acceder al derecho de gratuidad

para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la autoridad nacional.

Que en sus Considerandos menciona que es responsabilidad del Gobierno Nacional asumir las prioridades contenidas en el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas, que enfatizan el derecho de esas personas a participar en igualdad de condiciones y con equiparación de oportunidades junto al resto de la población en pro del desarrollo social y económico del país.

Que además cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que recepta el principio de igualdad entre los hombres, no como nivelación absoluta, sino como igualdad relativa, propiciada por una legislación tendiente a compensar las desigualdades naturales.

Que continúa diciendo: "...la primigenia redacción acordada a la Ley N° 22.431 en el Capítulo IV, dispuso que las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional debían transportar gratuitamente a las personas discapacitadas en el trayecto que mediere entre el domicilio del discapacitado y el establecimiento educacional y/o de rehabilitación al que debían concurrir...las razones que actualmente posibilitan el ejercicio de tal derecho, por conducto de la nueva normativa, comprenden necesidades familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier índole que permitan su plena integración social".-

Que el mencionado decreto reconoce que: "...el espíritu y la amplitud de criterio que ha guiado al legislador, en la sanción de la Ley N° 25.635 requiere que su instrumentación permita la obtención de un documento que facilite a las personas con discapacidad el ejercicio del derecho a viajar en condiciones de gratuidad por lo que constituye un documento válido y suficiente, la portación y exhibición del Certificado de Discapacidad que se expida por la autoridad competente en discapacidad de cada jurisdicción, conforme las previsiones del artículo 3° de la Ley N° 22.431, según el texto del artículo 1° de la Ley N° 25.504".-

Que además aclara: "...para el uso gratuito de servicios de transporte de larga distancia, la persona con discapacidad o su representante legal deberá solicitar ante la boletería de la prestataria su pasaje y el de un acompañante en caso de necesidad documentada, indicando la fecha de ida y regreso, horario, origen, destino y causa del viaje. La solicitud descripta en el párrafo anterior deberá ser formulada con un plazo de antelación mayor a cuarenta y ocho (48) horas a la realización del servicio, estando obligada la transportista a entregar un comprobante de recibo de dicho pedido, indicando fecha y hora en que se lo formula. Deberá constar también la firma y aclaración del empleado interviniente. Para recibir el pasaje solicitado, el requirente deberá entregar el comprobante de recibo del pedido antes mencionado".

Que el Decreto 38/04 establece que. "... los trámites para la obtención de la orden de pasaje y el pasaje respectivo, serán gratuitos y se consideran causas de integración social, aquellas que permitan a la persona con discapacidad compartir situaciones familiares o comunitarias en un lugar distinto al de su domicilio".

Que además resalta que: "...la inobservancia de las prescripciones establecidas en la presente reglamentación será sancionada de conformidad con el Régimen de Penalidades por Infracciones a las Disposiciones Legales y Reglamentarias en Materia de Transporte por

Automotor de Jurisdicción Nacional, aprobado por el Decreto N° 253 del 3 de agosto de 1995 y su modificatorio N° 1395/98, o el que lo reemplace en el futuro”.

Que la Secretaría de Transporte de la Nación, a través de la Resolución 31/2004 establece que en virtud del Decreto N° 38/2004 se han simplificado los mecanismos de acceso gratuito al medio de transporte colectivo a fin de alcanzar el objetivo propuesto por las normas Nacionales e Internacionales que propician la igualdad e integración social del discapacitado en este sentido.

Que como Autoridad de Aplicación establece que la fotocopia autenticada por autoridad competente del certificado de discapacidad y del documento que acredite la identidad del discapacitado, serán documentos válidos para acceder al derecho de gratuidad a los distintos tipos de transporte colectivo de pasajeros terrestre.

Que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través del Decreto 118/2006 en su Artículo 4º, inc. b) establece que el derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo de pasajeros sometidos a contralor de la autoridad nacional dispuesto por el Artículo 1º del Decreto N° 38 de fecha 9 de enero de 2004, para cada servicio, la obligación de transporte se limitará a UNA (1) plaza para discapacitado y UNA (1) para su acompañante, si el servicio cuenta con hasta CINCUENTA Y CUATRO (54) asientos y de DOS (2) plazas para discapacitados y su acompañante si la capacidad fuera mayor.

Que en el inciso c) explicita que independientemente de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 1º del Decreto N° 38/2004, la inobservancia de lo normado en dicho artículo habilitará a la Secretaria de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a reducir el beneficio del Gasoil a precio diferencial, de acuerdo con la reglamentación que establezca dicha Secretaría.

Que a nivel provincial, la Ley N° 3871, modifica el artículo 46 de la Ley Provincial N° 2055 en los términos de la ley nacional n° 25.635, modificatoria de la ley n° 22.431 que establece el “Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad”, en cuanto establece el transporte gratuito terrestre de las personas con discapacidad y quedando redactado de la siguiente manera:

“Artículo 46.- Las empresas de transporte colectivo terrestre y/o ferroviario sometidas al contralor de las autoridades provinciales o municipales deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad que por razones de educación, rehabilitación, trabajo familiares, asistenciales, recreación o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social, deban utilizar los servicios públicos que aquellas brindan...El beneficio se extenderá a un acompañante del discapacitado cuando su concurrencia sea indispensable a los efectos de proporcionarle la asistencia necesaria para su desplazamiento. La reglamentación establecerá las comodidades a otorgar a los discapacitados transportados, características y vigencia de los pases, certificaciones o credenciales que deberán exhibir los beneficiarios de esta medida y las sanciones aplicables a los transportistas por el órgano de contralor de sus actividades, en caso de inobservancia de esta norma”.

Que el Decreto Reglamentario, en su Artículo 1º establece que las Empresas de Transporte terrestre colectivo y ferroviario sometidas a la jurisdicción Provincial y Municipal deberán con carácter obligatorio transportar gratuitamente a las personas con discapacidad amparadas por la Ley Provincial N° 2.055, por cualquier motivo, índole o razón que tiendan a favorecer

su plena integración social. El domicilio del beneficiario no será considerado dato vinculante para el traslado.

Que en el Artículo 2° menciona que el Certificado de discapacidad previsto por la Ley N° 2055, será documento válido para acceder al derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la autoridad Provincial, de corta, media y larga distancia, según lo establece la Ley N° 3871.

Que para el uso gratuito de servicios de transporte de larga distancia, la persona con discapacidad o su representante legal deberá solicitar ante la boletería de la prestataria su pasaje y el de un acompañante en caso de necesidad documentada, indicando la fecha de ida y regreso, horario, origen, destino y causa del viaje (Artículo 3°).

Que en el Artículo 5° queda expresamente establecido que cuando la persona con discapacidad sea de otra Provincia y se encontrare transitoriamente dentro de la jurisdicción rionegrina por cualquier índole o razón, las Empresas de transporte terrestre de colectivo y ferroviario de corta, media y larga distancia, estarán obligadas a emitir el pasaje rigiéndose por la Ley Nacional N° 25.635 y su Decreto Reglamentario N° 38/04, para ello el particular deberá presentar en la ventanilla de la empresa prestataria: fotocopia autenticada del Certificado de Discapacidad emitido por autoridad competente y fotocopia del Documento Nacional de Identidad, los cuales serán documentos validos para acceder al derecho de gratuidad para viajar.

Que el Artículo 6° destaca que: "...las Empresas de transporte terrestre colectivo y ferroviario prestatarias de servicio de larga, corta y media distancia, no tendrán limitaciones en los cupos a otorgar, por lo tanto están obligadas a garantizar el derecho de transporte gratuito de personas con discapacidad amparadas por la Ley Provincial N° 2055 y Ley Nacional N° 25.635 con su Decreto Reglamentario N° 38/04, no pudiendo interponer reglamentación interna que lesione el derecho reconocido por la Ley que este Decreto Reglamenta" y deberán poner en conocimiento de los usuarios la publicación de las frecuencias de sus servicios, en lugar accesible, conjuntamente con su traducción al sistema Braille (Art. 8°).

Que el Artículo 9° establece las sanciones al incumplimiento y el Artículo 10° conmina, en caso que los transportistas constaten presuntamente la circulación de un Carné o algún tipo de documentación falsificada, a denunciar a al Dirección General de Transporte de la Provincia y al Consejo Provincial del Discapacitado.

Que el Artículo 11° además, obliga a las Empresas de transporte a garantizar el cumplimiento de condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida y adaptar las unidades para los servicios de corta media y larga distancia, para el efectivo traslado de las personas con discapacidad beneficiarias del uso gratuito del servicio de transporte terrestre.

III

Que el Artículo 27° de la Ley N° 2.756, expresa: "...el Defensor del Pueblo podrá formular con motivo de sus investigaciones, advertencias, recomendaciones, recordatorias, de sus deberes legales y funcionales, y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos los responsables estarán obligados a responder por escrito en el término máximo de treinta días".

Que resulta necesario aspirar a la plena integración en la vida social de las personas con discapacidad y para ello es menester adoptar medidas concretas y eficaces para la obtención del resultado esperado.

Que esta institución observa con preocupación las distintas circunstancias que reducen las posibilidades que las personas con discapacidad se integren plenamente a la vida social, y puntualmente, con relación al derecho de acceso a la gratuidad del transporte, se requieren compromisos sociales, institucionales y empresariales a efectos, no sólo de dar cumplimiento a la legislación vigente, sino de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Que la legislación al respecto resulta clara y sencilla, sin embargo se siguen sucediendo situaciones que suponen desconocimiento e incumplimientos de la normativa vigente.

Por ello:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE RIO NEGRO
R E S U E L V E :

PRIMERO: EXHORTAR a las Empresas de transporte terrestre colectivo y ferroviario prestatarias de servicio de larga, corta y media distancia de la Provincia de Río Negro la observancia y acabado cumplimiento de la normativa vigente sobre el derecho de transporte gratuito de las personas con discapacidad e instruyan debidamente a su personal dependiente para hacer efectivos los mismos.

SEGUNDO: RECOMENDAR a la Dirección de Transporte Y Aeronáutica de la Provincia la habilitación de un acceso telefónico gratuito para que las personas con discapacidad puedan realizar denuncias ante el incumplimiento de la normativa vigente.

TERCERO: INSTAR al Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad a realizar una campaña masiva de difusión de la normativa vigente a fin de concientizar a los beneficiarios sobre sus derechos y las herramientas para su protección y asimismo advertir a los obligados a respetarlos los alcances de las normas que los consagran y las sanciones por su incumplimiento.

CUARTO: SUGERIR a la Dirección Provincial de Transporte y Aeronáutica que, en conjunto con las autoridades de la Delegación local de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en Río Negro y del Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad, se instruya a los Consejos Locales y/o Municipales de las Personas con Discapacidad sobre el procedimiento para formular denuncias por incumplimiento de las normas sobre Pase Gratuito.

QUINTO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

RESOLUCION N° 1.383/06 “D.P.R.N.”.-

VIEDMA, 27 de octubre de 2006

VISTO: Los expedientes N° 9145/06 DPRN, caratulado "... S/ Guarda de Hecho", y N° 9361/06 caratulado: "... S/ Guarda de Hecho, y

CONSIDERANDO:

I

Que a fs. 01 del Expte. N° 9145/06 hace su presentación el ciudadano ... de la ciudad de Viedma, quien manifiesta ser padre de seis hijos, a quienes crió sólo ya que se encuentra separado desde hace unos veinte años. Actualmente convive con tres de ellos y sus familias.

Que la condición económica del grupo familiar es muy precaria, y que se desempeña como trabajador de la construcción. Que una de sus hijas, aún menor de edad, es madre de un niño de dos años.

Que con el fin de acceder a los beneficios de Asignaciones Familiares y Obra Social inició ante el Juzgado de Familia el trámite de Guarda, ofreciendo la prueba correspondiente y fundando su derecho, para obtener en definitiva la sentencia que hizo lugar a la Información Sumaria Guarda de Hecho.

Que con posterioridad ANSES le informa que dicho organismo no reconoce el trámite realizado en sede judicial.

Que en el Expte. N° 9361/06 se plantea una situación similar, reclamando los presentantes, el pago de la Asignación Familiar, en virtud de haberse otorgado la guarda de una niña al Sr. ... por medio de sentencia del Juzgado de Familia N° XV de Cipolletti (obrante a fs. 02 y 03).

Que en dicha sentencia se sostiene "...se deja constancia que el guardador se encuentra facultado para recibir las asignaciones familiares ordinarias y extraordinarias que por la guarda del menor le corresponda, excepto que se registren otros beneficiarios que cobren tales emolumentos..."

Que no obstante lo ordenado por ese Juzgado, ANSeS se opone al pago de las Asignaciones Familiares, incurriendo así en desobediencia judicial.

II

Que el reclamo del ciudadano guarda idéntica relación con los iniciados por otros ciudadanos ante esta Defensoría, los que dieran lugar al dictado de la Resolución N° 1440/05 DPRN (Expedientes N° 5250/04; 8204/06; 8007/05; 7768/05; 8730/06; 8864/06, 8407/06; 5464/04).

Que las actuaciones de referencia tienen como protagonistas a niños que conviven con sus abuelos o parientes, de quienes reciben contención y asistencia económica.

En otros casos se trata de ciudadanos que desean iniciar el trámite de Guarda por hijos de su pareja, con quien a su vez tienen otros hijos en común y conviven.

Que a través de la citada Resolución N° 1440/05, esta Defensoría del Pueblo hizo un análisis de las diferentes posturas en torno a la temática de las Guardas de Hecho, solicitando a los organismos intervinientes se tuviera especialmente en cuenta la situación de los niños bajo Guarda.

Que en ella se sostiene “... La **guarda** es definida como el medio tutelar por el cual un tercero sin derecho de representación se convierte en cuidador de un menor para darle asistencia integral y proveer a la formación de su personalidad...”.

Que asimismo se sostuvo: “Que los efectos jurídicos que de la institución de la guarda se derivan, no son genéricos habida cuenta que la guarda admite diversas especies, cada una de ellas con connotaciones diferentes”.

Que también se hace la siguiente clasificación de las Guardas:

- a) a) según su finalidad:
 - guarda simple: como forma de proteger a menores en situación de peligro o abandono, que puede darse de hecho, cuando una persona acoge a un niño abandonado, o cuando el menor es entregado por sus padres, o judicialmente, cuando se busca proteger a la niñez abandonada. Puede derivar en guarda preadoptiva.
 - guarda con fines de adopción: tiene por finalidad obtener la filiación adoptiva.
- b) b) según su otorgamiento:
 - guarda originaria: se origina en la relación paterno- filial ya que es la que corresponde a los padres.
 - guarda administrativa: otorgada por el órgano administrativo que integra el patronato de menores.
 - guarda notarial: quien ejerce la patria potestad, los padres biológicos, deciden delegar la guarda de su hijo un tercero, instrumentando tal decisión a través de una escritura pública, que confiere certeza a dicha decisión.
(estas dos últimas están expresamente prohibidas por el art. 318 del C.Civil como guarda preadoptiva).
 - guarda judicial: es el juez quien delega la guarda de un menor.
 - guarda de hecho: su característica es que se constituye sin ningún tipo de formalidad ni intervención de autoridad alguna, y sucede cuando una persona sin ningún tipo de atribuciones ejerce sobre un menor las funciones propias de las instituciones tutelares o se hubiese encargado de su custodia y protección, o cuando los padres biológicos consienten extrajudicialmente que un tercero ejerza alguna o todas las funciones propias de la patria potestad.

Que el **Código Civil** recepta sólo la Guarda con fines de adopción (art 316 y ss. C.C.), siendo requisito para la percepción de la asignación familiar la sentencia judicial que la aprueba.

Que según el art. 234 del Código Procedimiento Civil y Comercial de la Nación (Guardas para Protección de Personas- Medida Cautelar):

“Podrá decretarse la Guarda: ... 2. De menores o incapaces que sean maltratados por sus padres, tutores, curadores o guardadores, o inducidos por ellos a actos ilícitos o deshonestos o expuestos a graves riesgos físicos o morales. 3. De los menores o incapaces abandonados o

sin representantes legales o cuando éstos estuvieran impedidos de ejercer sus funciones. 4.- De los incapaces que estén en pleito con sus representantes legales, en el que se controvierta la patria potestad, tutela o curatela o sus efectos”.

También consigna la parte pertinente de la citada Resolución: *“Que ante las divergencias surgidas entre las diferentes concepciones, la Gerencia de Asignaciones Familiares de ANSES remitió informe a las diferentes UDAI, entre ellas UDAI Viedma, en relación a los requisitos que deben reunir las Guardas Judiciales... rechazando entonces las Guardas otorgadas por los Juzgados de Familia, como “guarda gestionada y otorgada a través de proceso de “Información Sumaria”, guarda otorgadas a los fines previsionales, Guarda otorgada a los fines económicos, a los fines asistenciales, Reconocimiento de Guarda de Hecho, Guarda otorgada a los fines de percibir las asignaciones familiares, Guarda a los fines de cobertura de obra social, Guarda a los fines de obtener beneficios sociales, etc.”*

Que era necesario pues *“...Alentar a los organismos intervinientes en la búsqueda de mecanismos que permitan resolver la situación que involucra a los niños bajo Guarda...”*. Motivo por el cual se cursaron sendas comunicaciones al Director Ejecutivo de ANSES y al Juzgado de Familia y Sucesiones N° 5 de Viedma, dando cuenta de la situación planteada.

III

Que la resolución N° 14/2002 de la Secretaría de Seguridad Social, que contiene las normas complementarias, aclaratorias y de aplicación del régimen de asignaciones familiares instituido por la ley 24.714, Capítulo II punto 12, *“Las guardas que confieren derecho a percibir las asignaciones familiares, son aquellas diferidas por medio de sentencias dictadas por los jueces con competencia específica en la materia, en procesos en los que hayan quedado acreditadas las condiciones necesarias para su desempeño”*.

Que por su parte la Resolución N° 1289/2002 de ANSES, que aprueba el ANEXO que contiene las normas operativas y de aplicación del régimen de asignaciones familiares, en el capítulo B) punto 12, sostiene que: *“Las guardas que habilitan la percepción de asignaciones familiares son aquellas diferidas por autoridad judicial o administrativa con facultades suficientes atendiendo a las necesidades de un menor en situación de riesgo o desamparo y que confieren al guardador facultades y obligaciones referidas a su protección, cuidado, alimentación y educación, debiendo reflejar la culminación de un proceso judicial con las valoraciones del funcionario interviniente. No cumplen con estos requisitos las informaciones sumarias que simplemente reconocen situaciones de hecho, ni las guardas conferidas al solo efecto de percibir asignaciones familiares o con meros fines económicos o previsionales”*.

Que así, la Gerencia de Asuntos Jurídicos de ANSES, en fecha 16 de junio de este año, emite opinión respecto de lo planteado por esta Defensoría. El dictamen de dicho cuerpo luego de hacer un pormenorizado análisis de las situaciones en estudio, sostiene en su apartado IV: *“En el reseñado marco normativo, este servicio jurídico reiteradamente ha tenido oportunidad de emitir opinión respecto del tema que nos convoca (Dictámenes N° 28.412, N° 29.162, N° 30.102), habiendo interpretado que las guardas otorgadas a terceras personas, de menores respecto de los cuales uno o ambos progenitores mantienen el pleno ejercicio de la patria potestad, no cumplen los requisitos exigidos por la reglamentación vigente...”*

...Ello así, por cuanto para otorgarlas no se meritúa una situación de riesgo o abandono de menores, limitándose al reconocimiento de una situación de hecho como es el caso de las Interlocutorias de fs. 8, 11, 21 y 24” (remitidas por esta Defensoría a ese organismo... VI.- En consecuencia, en opinión de esta Gerencia, las guardas otorgadas por Interlocutorias de fs. 8; 11; 21 y 24 no generan derecho a la percepción de las asignaciones familiares (art. 12)”.

Que como bien se señala en el dictamen emitido, las sentencias interlocutorias dadas por el órgano jurisdiccional interviniente reconocen una situación de hecho. Esta consiste en verificar la convivencia de los niños con los peticionantes y la situación disvaliosa en la que se encuentran, recaudos éstos que son confirmados por medio de informe socio ambiental y testigos en el proceso judicial. Que también interviene en el trámite la Asesoría de Menores, a la que se le remiten las actuaciones para que se expida en relación al mismo. Así el tribunal competente finalmente resuelve otorgando o denegando el beneficio (la guarda).

Que en virtud de ello el Juez y el Asesor de Menores mediante informes técnicos evalúan la capacidad del pretense guardador; la capacidad tiene íntima relación con la aptitud de brindar al menor un ámbito familiar adecuado para el desarrollo del mismo.

Que es de destacar que en la mayoría de las situaciones traídas a conocimiento de esta Defensoría, los padres (biológicos) de los niños en trámite de Guarda, carecen de los medios o estos resultan insuficientes para la manutención adecuada de sus hijos. Que se trata de familias con escasos recursos económicos, en las que sus progenitores no se encuentran dentro del régimen laboral formal ya sea porque son beneficiarios de planes sociales o porque trabajan haciendo “changas”.

Pues bien, si estos niños no están en peligro de riesgo o abandono es porque tienen abuelos o parientes que han asumido el acompañamiento en la manutención de los mismos, acogiéndolos tanto a ellos como a sus padres en sus hogares. Parientes que tampoco cuentan con bienes de fortuna, ya que solo pueden costear los gastos de vivienda y alimentos para todo el núcleo familiar, y que por ello se vuelve imprescindible acceder al beneficio de las asignaciones familiares que otorga el Estado en casos de esta naturaleza.

IV

Que ante esta situación corresponde analizar si la negativa a otorgar el beneficio por parte de un organismo del Estado, no importa un trato diferencial hacia estos niños, en cuyo caso se estaría desvirtuando el instituto de las asignaciones familiares.

Que ello es así toda vez que el beneficio se otorga a las familias para coadyuvar en su subsistencia. A fin de que la familia pueda reproducir su vida en condiciones dignas con independencia del lugar que ocupe en el mercado de trabajo. Concebida la familia como la institución fundamental de la sociedad, a la que el Estado debe garantizar toda protección.

Que la población menor está siempre expuesta a mayor situación de vulnerabilidad. Que los niños merecen un trato adecuado y que corresponde asegurarles un nivel de vida que permita garantizar el ejercicio pleno de derechos fundamentales como la salud y la educación.

Que el Estado debe equiparar a todos los niños procurando el acceso a derechos esenciales para el desarrollo de sus capacidades físicas, psíquicas y culturales, incidiendo ello en la participación plena de su ciudadanía futura.

Que no se pretender avanzar sobre los alcances de la legislación vigente, sino más bien hacer de ella una correcta interpretación ajustada a derecho. En el mejor de los casos contribuir a una reglamentación adecuada que contemple la mayor cantidad de situaciones posibles.

V

Que conforme el artículo 17º de la Ley N° 2.756, “Presentada la denuncia, el Defensor del Pueblo resolverá sobre su avocación al caso, iniciando las investigaciones que correspondiere y haciendo lugar a los traslados que fuere menester...”, pudiendo también hacerlo de oficio.-

Que según el Art. 12 del Decreto 1245/96, reglamentario de la Ley 24.714: “*La Secretaría de Seguridad Social tendrá a su cargo el dictado de las normas complementarias y aclaratorias del régimen de Asignaciones Familiares...*”. Por su parte el Art. 13 delega: “*...en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) en el ámbito de su competencia, las atribuciones de determinación, contralor, verificación e intimación atinentes a los recaudos específicos, plazos y documentación requerida para la percepción de las prestaciones*”.

Que siendo así y con la convicción de que no existirán hombres del mañana si no aseguramos una adecuada asistencia a los niños del presente, corresponde **EXHORTAR** al **Señor Secretario de Políticas de la Seguridad Social** y al **Señor Secretario Ejecutivo de la ANSeS**, que cumpla con la Ley 24.714, a fin de evitar que se prive a estos niños en guarda del beneficio de la asignación familiar.

Que por parte se hace saber a los funcionarios mencionados que esta Defensoría del Pueblo iniciará denuncia penal, en el fuero federal, por incumplimiento de los deberes de funcionario público ante la inobservancia de la Ley 24.714, y desobediencia a las ordenes judiciales emanadas de los Juzgados de Familia de la Provincia de Río Negro.

Que también corresponde poner en conocimiento de la situación al **Sr. Defensor del Pueblo de Nación**, para su consideración y demás efectos que estime corresponder.

Por ello,

LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO R E S U E L V E :

ARTICULO 1º: Avocarse al conocimiento de la cuestión planteada, derivada de las presentaciones efectuadas en las actuaciones de referencia.

ARTICULO 2°: EXHORTAR al Señor *Secretario de Políticas de la Seguridad Social*, y al *Señor Secretario Ejecutivo de la ANSeS*, que cumpla con la Ley 24.714, a fin de evitar que se prive a estos niños en guarda del beneficio de la asignación familiar.

ARTICULO 3°: Asimismo poner en conocimiento de la situación planteada al *Sr. Defensor del Pueblo de Nación*, para su consideración y demás efectos que estime corresponder, remitiendo copia de la presente.

ARTICULO 4°: Remitir copia de la presente a la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la ANSeS.

ARTICULO 5°: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

RESOLUCIÓN N° 1387/06 DPRN.-

Viedma, 22 de noviembre de 2006

VISTO: El Expediente N° 9.449/06, caratulado “DEFENSORA DEL PUEBLO DE RIO NEGRO s/ FALTA DE CONTROLES SOBRE CONTINGENTES DE TURISMO ESTUDIANTIL”, y

CONSIDERANDO:

I.- Los Hechos:

Que un informe periodístico publicado en la edición del día 5 de noviembre pasado del Diario Río Negro, aborda la problemática, ya expuesta recurrentemente en los medios, **de la falta de controles sobre el turismo estudiantil en San Carlos de Bariloche**. La nota indica que más de 85.000 estudiantes visitaron -en viaje de egresados- esa localidad en lo que va del año, siendo el promedio de estadía de siete días, en los que se conjugan “libertad y descontrol” (sic).

Que los desmanes provocados por los contingentes de estudiantes van desde destrozos de mobiliarios de hoteles, riñas en locales bailables y la vía pública, consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, actos de vandalismo, etc.

Que este apartamiento a las pautas de convivencia social, se ve favorecido por el hecho de que **los estudiantes están a cargo de coordinadores contratados por las agencias de viajes que apenas los superan en edad y que no ejercen un control efectivo y responsable de la conducta de quienes están bajo su dependencia** (la ley 25.599, art.5°, inc d, sólo exige que el coordinador de grupo sea mayor de edad).

Que ejemplo de ello, es lo ocurrido en agosto pasado en un hotel de San Carlos de Bariloche, donde un grupo de menores encendieron una bengala en un cuarto, poniéndose en serio riesgo

la integridad física propia y de terceros. Agrava el hecho, la presunción de que en virtud de la **prohibición de venta de pirotecnia** que rige en la ciudad, ésta habría sido transportada. A mayor abundamiento, por esos días, en un procedimiento policial se encontraron 50 dosis de éxtasis en un microómnibus con estudiantes del norte del país (fuente: www.brcnews.com.ar 27/08/06))

Que a pesar de las **restricciones al expendio y consumo de bebidas alcohólicas** dispuestas por la ley provincial 3.770, las ordenanzas locales -pioneras en la materia- y la ley nacional 24.778, es sabido que no se ha logrado poner límites a la venta clandestina de alcohol a menores.

Que el abuso de alcohol daña la salud y aumenta la probabilidad de ser víctima o autor de hechos de violencia. La inobservancia a la prohibición legal sobre venta de alcohol a menores, reviste suma gravedad y contribuye a engrosar las estadísticas de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico - SEDRONAR-, que ilustran respecto de la reducida edad de inicio en el consumo de alcohol, así como sobre las altas tasas registradas.

Que los paquetes de viaje de egresados incluyen, además de excursiones, entradas a locales bailables para la mayoría de las noches de la estadía.

Que ratifica lo dicho, el antecedente del reclamo de la Asociación de Prestadores de Turismo Estudiantil de San Carlos de Bariloche – ATEBA- quienes oportunamente cuestionaron la “*supuesta imposición de algunos Prestadores del Producto Discotecas, que **obliga a los Operadores a comprar una modalidad única (5 discotecas) sin posibilidad de ofrecer otro producto alternativo***” (sic. párrafo 3º de la nota de la ATEBA dirigida a la Pta. De la Comisión de Turismo del Concejo Municipal Bche., citada en la Resolución N° 1.120/03-Expte. N° 3.147/03 del registro de esta Defensoría del Pueblo).

Que esta cuestión, que motivó desde otros sectores turísticos y comerciales con intereses en pugna la remisión del caso a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, expone, en lo que aquí nos interesa, que **la oferta de los paquetes de turismo estudiantil son tentadores, justamente, porque en ellos tienen preponderancia los servicios nocturnos y no los diurnos.**

Que ello así, un informe de Telenoche Investiga – Canal 13-, emitido recientemente, mostró imágenes y testimonios claros sobre el **incumplimiento a la prohibición de expendio de alcohol a menores en las discotecas de San Carlos de Bariloche**, donde se estila la venta del popular “balde”, que es un recipiente grande para hielo con una mezcla de jugo y bebidas blancas.

Que la titular del área de turismo de San Carlos de Bariloche declaró en un medio nacional que ante la proximidad de la llegada de contingentes estudiantiles, se realizarían controles rigurosos sobre los micros que ingresen a la ciudad y que se habían dispuesto mayores exigencias sobre el rol de los coordinadores y sus aptitudes (autorización, certificado de antecedentes). Agregó, que se llevarían también a cabo requisas en las habitaciones de los hoteles y controles a la prohibición de venta de alcohol (Diario Clarín, 03/06/2006)

II.- Marcos Normativos:

Que la **Ley 25.599 de Turismo Estudiantil**, sólo propende al establecimiento de distintos recaudos tendientes a introducir **garantías y seguridades relacionadas con el desenvolvimiento de los contratos turísticos** que tienen por objeto el llamado turismo estudiantil.

Que entre sus regulaciones dispone que las agencias de viajes turísticos debidamente habilitadas e inscriptas en el Registro de Agentes de Viajes de la Secretaría de Turismo de la Nación, deberán contar con un "**Certificado nacional de autorización para agencias de turismo estudiantil**" (art. 1º). Para ello las agencias deberán presentar una **declaración jurada** que, entre otros requisitos, contenga: las personas que estarán a cargo de la atención, coordinación y control del cumplimiento de los compromisos en los lugares de destino de los viajes; los programas ofrecidos y listado del personal que cumplirá la función de coordinador de grupo (art.5º).

Que asimismo, ordena que los **contratos de venta de servicios de turismo estudiantil** contendrán los datos completos de la empresa de viajes turísticos e indicarán obligatoriamente información detallada sobre el contenido del paquete (art.7º) y se obliga a las empresas a la contratación de **seguros de responsabilidad civil, de vida, de accidentes personales y de cobertura médica total**, para cada uno de todos los integrantes de cada contingente de estudiantes.

Que la **Ley N° 3.039 de Río Negro avanza sobre otros aspectos en la regulación del turismo estudiantil**, contemplando las verdaderas responsabilidades – omitidas en la norma nacional- que debe asumir el Coordinador de Turismo Estudiantil, haciendo hincapié en el conocimiento que el mismo debe tener sobre distintas normativas, e instando a su cumplimiento. Estas se vinculan a: la salud de los menores, la preservación del medio ambiente, las reglas de convivencia social, etc. Así dispone:

Artículo 4º.- Será obligación del coordinador:

a) Excluir del grupo a todo integrante del contingente que se constituyera en un riesgo para sí mismo, para el resto o para la prosecución normal del tour, sin que el excluido tenga derecho a reclamo alguno.

Los contratos que celebren las agencias de viajes con los grupos estudiantiles, contemplarán esta facultad de la agencia y/o el coordinador.

b) Hacer cumplir las restricciones o prohibiciones a los integrantes menores de edad del contingente estudiantil sobre la compra o consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias de las denominadas "peligrosas".

c) Impedir la entrega de bebidas alcohólicas y/o sustancias peligrosas a los menores de edad. En estos casos, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.

d) Denunciar ante la autoridad competente cualquier caso de ebriedad y consumo de sustancias de las denominadas peligrosas, por los mayores que participen o acompañen al grupo estudiantil.

e) No consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias de las denominadas "peligrosas", durante el tiempo que dure el viaje.

f) Impedir que los grupos estudiantiles alteren el medio ambiente y el ámbito urbano que visitan, instándolos a lograr una convivencia armónica entre población, ambiente y otras modalidades turísticas.

g) Informar al contingente sobre el medio ambiente que visita y la necesidad de su preservación.

Artículo 5º.- Son requisitos para ejercer la función de Coordinador de Turismo Estudiantil:

a) Tener como mínimo veintiún (21) años de edad.

b) Acreditar buena conducta mediante certificado expedido por la Policía provincial.

c) Aptitud psicofísica determinada por examen médico.

d) Habilitación otorgada por la Secretaría de Turismo de la provincia.

Artículo 6º.- La Secretaría de Turismo de la provincia tendrá a su cargo la capacitación y el otorgamiento de los carnet habilitantes. Para ello se exigirá obligatoriamente:

a) Participar de un curso no inferior a quince (15) días dictado por el órgano de aplicación en la ciudad receptiva a este segmento turístico, cuyo contenido será fijado por la reglamentación.

- b) Aprobar la **evaluación por medio de un examen teórico-práctico.**

Artículo 8°.- *El contenido de los cursos a dictar, deberá contemplar:*

a) *Toda la información necesaria en relación a los derechos y obligaciones que importen a las agencias, prestadores, coordinadores y contingentes, previo y durante la prestación del servicio.*

b) *Conocimiento básico sobre las reglamentaciones turísticas vigentes.*

c) *Conceptos básicos en relación a los distintos modos de obrar del coordinador y su grupo, en situaciones normales y en aquellas denominadas "de riesgo".*

d) *Capacitación e información teórico-práctica sobre primeros auxilios, botiquines básicos, traslados de emergencias, códigos para llamados de urgencia, etcétera.*

e) *Conceptos sobre conductas a seguir por el coordinador al frente del grupo: dentro de los circuitos y espacios naturales que se visiten o atraviesen; sobre riesgos y cuidados a adoptar frente a las distintas condiciones geográficas, meteorológicas, etcétera, que puedan ser propias de la zona a visitar; comportamiento del contingente en la vía pública; conocimiento acerca de penas y castigos según inconductas y/o desmanes de los grupos estudiantiles.*

f) *Nociones básicas a nivel teórico-práctico en todo lo referente a la oferta de excursiones que se lleven a cabo dentro de los circuitos provinciales y/o regionales, con el fin de experimentar las actividades que se desarrollan en los predios dedicados a tal fin, del grado de riesgo y seguridad que cada recreación pudiese presentar y del cuidado integral que cada área debe revestir.*

g) *Nociones básicas de psicología juvenil y conceptos generales sobre capacidad de conducción de grupos numerosos.*

III.- Conclusiones:

Que dados estos marcos normativos, además de la fiscalización por parte de la autoridad de aplicación de la ley nacional -Secretaría de Turismo de la Nación -, las autoridades locales -provinciales y municipales-, están facultadas, a su vez, a efectuar otros controles sobre los contingentes de estudiantes en sus jurisdicciones y sobre los involucrados en la prestación de servicios turísticos.

Que a pesar de ello, las reiteradas denuncias en los medios sobre el incumplimiento a las normas legales sobre protección de los menores en el consumo de alcohol, así como las graves

consecuencias que su inobservancia conlleva, nos demuestran que las acciones públicas hasta aquí encaradas no resultan suficientes para asegurar tal tutela.

Que no escapa a nuestro conocimiento que los padres y las autoridades educativas han quedado desplazados dentro del mecanismo de venta de servicios de turismo estudiantil, el que apunta al interés de los menores que rechazan la opción de ser acompañados por padres o profesores en los viajes. A ello sigue, que los adultos sólo financian el paquete contratado y no asumen responsabilidades, produciéndose así un desequilibrio en la colaboración que deben prestar los distintos involucrados, padres, docentes, autoridades públicas, agencias de turismo, comerciantes y otros sectores del “negocio turístico”, para generar conciencia en los jóvenes sobre la consecuencia de sus actos y los riesgos a los que están expuestos.

Que teniendo ello presente y **contando con herramientas legales suficientes, es imperioso enfatizar en acciones destinadas a proteger la salud e integridad física de los menores durante su estadía, garantizar la seguridad de los mismos y de la comunidad de San Carlos de Bariloche, así como el respeto por la propiedad pública y privada, el medio ambiente y las debidas reglas de convivencia social.**

Que en virtud del rol de magistratura de opinión que ejerce esta Defensoría del Pueblo, y en cumplimiento del cometido institucional de defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración o de los prestadores de servicios públicos, **instamos la presente intervención de oficio, con miras a formular oportunamente recomendaciones que contribuyan al efectivo goce de tales derechos y garantías por parte de los ciudadanos.**

IV. Pedidos de Informes.

Que en consecuencia, se solicitarán pedidos de informes a los siguientes organismos públicos:

1) Municipio de San Carlos de Bariloche, en razón de la responsabilidad y competencia directa que tiene sobre la problemática descrita, informe en carácter de colaboración con esta Defensoría del Pueblo (art.12 Ley 2.756), y a través de las dependencias correspondientes según la materia, lo siguiente:

- a) Qué controles realiza ese municipio en función de la ley nacional 25.599, la ley provincial 3.039 y normas locales en materia de turismo estudiantil. Tipos de incumplimientos que se han detectado.
- b) Cantidad de infracciones labradas con relación a la prohibición de expendio de alcohol a menores edad y otras normas locales sobre venta de bebidas energizantes.
- c) Qué medidas de protección y prevención se toman con relación a la seguridad de los menores que integran contingentes de turismo estudiantil.
- d) Datos estadísticos sobre: Cantidad de estudiantes que ingresan por año a la localidad; casos de denuncias por desmanes en la vía pública y/o la propiedad privada causados por integrantes de contingentes de estudiantes, confiscación de bebidas alcohólicas, etc.
- e) Acciones coordinadas entre organismos municipales y con otros públicos provinciales.

- f) Si se han cursado advertencias a las agencias de turismo de los lugares de origen de los contingentes, sobre la observancia de las normas legales que regulan el turismo estudiantil en la provincia y otras protectoras de la salud de los menores, el medio ambiente, las reglas de convivencia social, etc.
- g) Todo otro aporte que estime necesario agregar.

2) Jefatura de la Policía de Río Negro: Para que informe con relación a la localidad de San Carlos de Bariloche:

- a) Cantidad de denuncias por daño en los que se haya involucrado a estudiantes en viajes de estudios o egresados.
- b) Datos estadísticos, si los hubiere, de intervención preventiva sobre menores en estado de ebriedad, por disturbios en la vía pública, etc.
- c) Qué tipo de controles sobre los contingentes de estudiantes (personas y transporte) que llegan a la Provincia, están a cargo de esa fuerza.
- d) Qué acciones vinculadas al cumplimiento de la ley 3.770 se realizan en la citad localidad.
- e) Todo otro dato que estime oportuno agregar.

3) Ministerio de Turismo de la Provincia: Para que indique en su calidad de órgano de aplicación de las normas regulatorias del turismo provincial:

- a) Acciones encaradas en el marco de la ley 3.039, a saber: cantidad de coordinadores capacitados, evaluación sobre los resultados en la aplicación de la ley, etc.
- b) Acciones delegadas por la Secretaría de Turismo de la Nación en función de la ley 25.599.
- c) Opiniones y/o conclusiones de esa cartera sobre la temática que nos ocupa.

4) Ministerio de Salud de la Provincia: para que a través de la Zona Sanitaria correspondiente y/u otras áreas competentes, informe:

- a) Datos estadísticos sobre consumo de alcohol y sustancias peligrosas por parte de menores en la Provincia de Río Negro y en particular en S.C. de Bariloche.
- b) Datos estadísticos de atención a menores alcoholizados o bajo efecto de otras sustancias peligrosas en el Hospital de San Carlos de Bariloche y, si constara en los registros, cuántos de ellos son estudiantes en viaje de egresados (no residentes en la ciudad).
- c) Si además de la atención médica, reciben asistencia psicológica e información sobre los daños que causa el alcohol y otras sustancias nocivas.
- d) Si obran en esa cartera idénticos datos provenientes de centros privados de atención sanitaria de la nombrada ciudad.
- e) Qué acciones, campañas y programas de prevención para la salud de los jóvenes desarrolla ese Ministerio, y si existe alguno especialmente destinado al segmento de menores que visitan la ciudad de S.C. de Bariloche en viajes de estudiantes.
- f) Todo otro dato que se estime oportuno incorporar.

Por ello:

**LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE:**

PRIMERO: Iniciar las presentes actuaciones DE OFICIO, en protección de los derechos individuales y colectivos que resultan comprometidos ante la falta de controles suficiente sobre los contingentes de turismo estudiantil en la localidad de San Carlos de Bariloche (art. 9 de la ley 2.756).

SEGUNDO: Solicitar los informes formulados en el apartado IV de la presente Resolución a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, a la Jefatura de la Policía de Río Negro, al Ministerio de Turismo y al Ministerio de Salud de la Provincia.

TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Archívese

RESOLUCION N° 1461/06 DPRN

PROMUEVE MANDAMIENTO DE EJECUCION

SUMARIO:

ACTORA: DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

DEMANDADA: PROVINCIA DE RIO NEGRO – MINISTERIO DE GOBIERNO-
CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER

MATERIA: *AMPARO-MANDAMUS*

DOCUMENTACION ACOMPAÑADA: RESOLUCION 24/2006 LEGISLATURA DE RIO NEGRO - EXPEDIENTES ORIGINALES N° 6.874/05 y 7.472/05 DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.

Señor Presidente

Del Superior Tribunal de Justicia

De la Provincia de Río Negro

Dr. Luis Lutz

Dra. Ana Ida PICCININI, DNI Nro. 11.608.173 en mi carácter de Defensora del Pueblo de la Provincia, constituyendo domicilio procesal en la sede de este Organismo de Control sito en la calle 25 de Mayo N° 565 planta baja de la Ciudad de Viedma, a Vuestra Señoría me presento y respetuosamente digo:

I. CARACTER INVOCADO.

Acredito la calidad invocada con la copia de la Resolución nro. 24 de la Legislatura de Río Negro sancionada el día 5 de Septiembre del corriente año, en la cuál consta mi designación como Defensora del Pueblo de la Provincia, en el marco de lo establecido en el Artículo 168° de la Constitución Provincial, encontrándose a la fecha vigente mi mandato.

Para el hipotético caso de desconocer el carácter invocado, solicito se oficie a la Legislatura de la Provincia de Río Negro a fin de que así lo certifique.

II. OBJETO.

Por el presente, vengo en legal tiempo y forma a promover la presente ACCION DE AMPARO -MANDAMUS; consagrado en el Artículo 43° de la Constitución Nacional y 43° y 44° de su similar Provincial, a los fines de exigir al Poder Ejecutivo Provincial - Ministerio de Gobierno y al Consejo Provincial de la Mujer, intervengan en el marco de sus respectivas competencias y procedan a sancionar las normas reglamentarias de la Ley Provincial nro. 3475, sancionada el 14/12/00, promulgada el 28/12/00, Decreto n° 1866, Boletín Oficial n° 3848, modificada por la ley n° 4094, sancionada el 08/06/06, promulgada el 27/06/06, Decreto n° 616/06, Boletín Oficial n° 442, que permitan la inmediata implementación en la Provincia de Río Negro del Registro de Deudores Alimentarios

La manda judicial deberá dirigirse contra el Poder Ejecutivo Provincial – Ministerio de Gobierno – con domicilio en la calle Laprida Nro. 212 de la ciudad de Viedma y el Consejo Provincial de la Mujer, con domicilio en la calle Laprida Nro. 240 de la misma ciudad.

En el marco de lo establecido por el artículo 190° de nuestra Constitución Provincial, la Ley Provincial Nro. 88 y el Artículo 341° del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, solicito se efectúe formal traslado de la presente a la Fiscalía de Estado de la Provincia a los fines que tome debida intervención en materia de su competencia.

Atento la calidad que invisto como Defensora del Pueblo de la Provincia de Río Negro, la naturaleza de la acción intentada, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 41° inciso 4) de la Ley 2430 e interpretando analógicamente lo prescrito por el inciso 1° del artículo 200 del C.P.C.C., solicito en forma expresa se exima a mi parte de prestar contracautela y/o cualquier otro cargo fiscal.

Solicito asimismo se imprima el pertinente trámite habilitándose feria, día y hora para todos los actos procesales que sea menester, la sentencia incluida.

III. COMPETENCIA.

Detenta competencia, originaria y exclusiva, para entender en la presente ACCION DE AMPARO-MANDAMUS, Vuestro Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, según lo establece el artículo 41° inc. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nro. 2430.

Así lo ha establecido, Vuestro Tribunal en antecedentes varios. Vgr.

“Diferenciando en punto a la competencia de los órganos jurisdiccionales, tiene dicho este Superior Tribunal de Justicia, que el amparo recaerá en cualquier juez letrado, mientras que el mandamus será exclusivamente competencia de este tribunal”

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, VIEDMA, RIO NEGRO (ECHARREN-LEIVA-FLORES-IGLESIA HUNT) YERMANOS DE SCAIOLA, SANDRA c/CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION s/AMPARO. Mayo 1991.

IV. ANTECEDENTES y FUNDAMENTOS.

En el Expediente N° 999/02 del registro de esta Defensoría del Pueblo, tramito la denuncia incoado por un particular que reclamaba por el cumplimiento de la cuota alimentaria adeudada por el padre de sus hijos, éste Organismo de Control se avoca a su conocimiento y en el marco de su competencia sanciona la Resolución N° 923/03 de fecha 10/07/2003, por la que se procede a recomendar (es dable aclarar que ésta Defensoría carece poder de imperium) al Ministro de Coordinación para que intervenga a los fines que se dicte la reglamentación de la Ley 3475 y se implemente el Registro de Deudores Alimentarios.

En dicho resolutorio quedó expresado:

“...Que si bien somos conscientes que con la creación del Registro no se soluciona el problema del incumplimiento, ya que este tiene que ver con causas más profundas, creemos que constituye un paso importante.

Que la Directora General del Registro de Deudores Alimentarios de la ciudad de Buenos Aires, Dra. Beatriz Rattenbach, manifestó que “el Registro cumple la función de crear una conciencia social sobre este problema, al mismo tiempo disuadir a los deudores.

Que es innegable que la situación económica influyó en la morosidad alimentaria y que muchos progenitores están atravesando circunstancias laborales realmente difíciles pero esto no justifica que se sustraigan de sus obligaciones alimentarias. La obligación de hacerse cargo de los hijos va más allá de la situación económica y la misma corresponde a ambos padres.

Que el espíritu de la Ley suponía constituir un instrumento útil a los progenitores con hijos a cargo que luchan por los derechos de sus hijos, valiéndose de esa herramienta legal para obligar a los deudores al cumplimiento de la cuota alimentaria fijada en sentencia firme por autoridad judicial.

Que pasados dos años desde la promulgación de la ley citada y no habiendo aún el Poder Ejecutivo procedido a su reglamentación lleva a reflexionar acerca de la importancia dada al tratamiento de la temática.

Que la tardanza en la reglamentación, y por lo tanto en la implementación del mencionado Registro atenta contra los derechos mismos que el espíritu de la mencionada ley promueve.”(sic. Considerando VII y VIII de la Resolución N° 923/03).

Con fecha 7 de octubre de 2005 se inicia de Oficio el Expediente N° 6.874/05 caratulado “Defensoría del Pueblo de Río Negro s/ implementación del Registro de Deudores Alimentarios” en el que se dicta la Resolución N° 1287/05, que recomendó, esta vez, directamente al Gobierno de la Provincia de Río Negro que arbitre las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley N° 3.475 que crea, en el ámbito de la provincia el Registro de Deudores Alimentarios.

En las mismas actuaciones, se agrega una noticia publicada en el diario “Río Negro” del día 02/06/2005 por la que se informa que la Legislatura Provincial aprobó un Proyecto de Comunicación para que sea reglamentada -antes del 30/09/2005, la Ley N° 3.475 que creó el Registro de Deudores Alimentarios en el ámbito de la Provincia de Río Negro.

Asimismo, obra la presentación de dos ciudadanas de la localidad de Cipolletti, las que invocan la calidad de “Preventoras Comunitarias de la Violencia Familiar”, acompañando un petitorio suscripto por más de mil quinientas firmas, por las que solicitan en forma urgente la reglamentación de la Ley N° 3.475, formándose el Expediente N° 7.472/05, el que por razones de conexidad se acumula a las antes mencionadas actuaciones.

Después de cinco años de la sanción de la ley N° 3.475 y tres de la primera Recomendación de esta Institución, la Legislatura Provincial aprueba la Comunicación N° 59/05, dirigida al Poder Ejecutivo, que ordena que antes del 30/09/2005 se dicte la reglamentación del Registro de Deudores Alimentarios.

Se cursó por ello, un nuevo pedido de informes al Ministerio de la Familia (ordenado por Resolución N° 734/05), a fin de actualizar datos respecto al tema que nos ocupa.

En respuesta al mencionado requerimiento, el Ministerio informa que:

- El expediente de la Reglamentación de la Ley N° 3.475 fue remitido a la Secretaría Legal y Técnica y de Asuntos Legislativos con fecha 07/07/2005.
- Menciona la inconveniencia de que la Subsecretaría de Promoción Familiar sea la autoridad de aplicación en base a argumentos de tipo administrativos (creación de un área específica, contratación de personal, recepción de oficios, asientos, certificaciones, comunicación con el Poder Judicial) y de asumir funciones netamente notariales y registrables.
- Sugiere “...la posibilidad de abrir un marco de discusión sobre el tema, y eventualmente reformar el artículo de la ley que consigna autoridad de aplicación” (sic.)

Es dable aclarar, que con fecha 8 de Junio de 2006 la Legislatura de la Provincia de Río Negro, sanciona la Ley 4049 (modifica la Ley 3475), estableciendo que el Registro de Deudores Alimentarios funcionará en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Secretaría de Gobierno, en coordinación con el Consejo Provincial de la Mujer de acuerdo lo establezca la reglamentación”.

Es oportuno recordar que la Ley N° 3.475 fue pionera a nivel nacional, conjuntamente la sanción de similares marcos normativos por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Santa Fe. Sin embargo, la intención del legislador ha caído en letra muerta desde que no se ha implementado el registro que la propia ley crea.

La obligación del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley tiene una previsión de plazo que ha sido holgadamente superado y por tanto, aquella fue incumplida pese a que esta Defensoría del Pueblo viene expidiéndose al respecto desde el año 2.003 tanto por la Resolución N° 923/03 y 1287/05 ya citadas, como a través de la especial inclusión del tema en los Informes Anuales de los años 2.003 y 2.004 y 2005 que esta Institución presentó ante la Legislatura Provincial.

En esta instancia, agotadas las gestiones pertinentes ante los órganos responsables de la reglamentación corresponde actuar a través de este excepcional remedio previsto en la constitución para asegurar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

V. INTERES JURIDICAMENTE PROTEGIDO: MENOR.

La inclusión de los morosos en el Registro de Deudores Alimentarios es una medida, - en cumplimiento de una obligación moral y legal, cuya procedencia ha sido reconocida judicialmente-, destinada a proteger a todos los afectados por deudas alimentarias en los términos de la Ley 3475, de manera especial a los menores e incapaces, a quienes, se les niega los alimentos necesarios para su desarrollo psico-físico.

El incumplimiento de los deberes del progenitor alimentante atenta directamente contra los derechos de los niños a alimentación, vestimenta, esparcimiento, educación, salud, vivienda.

El incumplimiento alimentario excede el tema meramente económico, sino que afecta al niño psíquicamente, ya que se trata del incumplimiento de los deberes de cuidado que debería ejercer su progenitor hacia su persona.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño con rango constitucional (Art. 75 inc. 22 C.N.) introduce un nuevo paradigma en torno a la infancia propiciando un cambio radical en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su consideración como sujetos plenos de derechos.

Nos importa aquí señalar las incumbencias del Estado y la familia en sus deberes para con los niños, niñas, y adolescentes, así el Art. 6 afirma “ Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo del niño”.

Por su parte el Art. 3º establece “En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán las medidas legislativas y administrativas adecuadas. ..”.

En lo atinente específicamente al derecho de los niños, niñas y adolescentes en relación a la cuota alimentaria, que la CIDN denomina pensión alimentaria, establece:

“Art. 27, 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimentaria por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero...”

La Ley 4109, de reciente vigencia en nuestra provincia, establece en su Art. 6º “Deberes de los padres o responsables. Es deber primario de los padres o de los responsables

de la niña, niño o el adolescente, proporcionales las condiciones de vida necesarias para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, en atención a sus singularidades físicas, intelectuales y afectivas.

Incumbe a los padres, la responsabilidad primordial de la crianza y desarrollo de sus hijos/as para su protección y formación integral. El estado Rionegrino respeta los derechos y deberes de los padres y les presta la ayuda necesaria para su ejercicio, con plenitud y responsabilidad.

Asimismo la ley entiende al Interés Superior del Niño como “al principio de interpretación y aplicación de la ley de obligatorio cumplimiento en todas las decisiones que los involucran”.

VI. PROCEDENCIA DE LA ACCION. REQUISITOS.

“En el mandamus no sólo debe consignarse con exactitud cual es el acto o actos cuya ejecución se procura efectivizar, a lo que está vinculado el deber concreto omitido, sino que también tiene que demostrarse la existencia de un fehaciente requerimiento previo y la manera en que un determinado funcionario público ha rehusado su ejecución”

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, VIEDMA, RIO NEGRO. Sala Civil (Echaren-Leiva-Balladini-Flores) Federación Provincial de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Río Negro s/ Mandamus. SENTENCIA del 25 de Abril de 1995.

“El mandamus resulta un amparo ante la inacción de una autoridad pública obligada a una conducta precisada por la constitución, ley, ordenanza, decreto o resolución. Para su procedencia se requiere la existencia de determinados requisitos, esto es: a) existencia de un deber concreto de un funcionario público, b) negativa a su cumplimiento por parte del funcionario responsable y c) afectación por tal negativa de derechos de los recurrentes”

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, VIEDMA, RIO NEGRO. Sala Civil (Garcia Osella-Balladini-Flores) Osuna Jorge A. s/ Recurso de Amparo s/Mandamus Sentencia del 2 de mayo de 1994. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, VIEDMA, RIO NEGRO.(Leiva-Echarren-Iglesia Hunt- Flores- Garcia Osella) Arturo Juan A y otros s/ Mandamiento de Ejecución. Sentencia del 23 de septiembre de 1991.

“El artículo 44° de la Constitución Provincial al establecer el instituto del "mandamiento de ejecución" -mandamus-, lo autoriza para superar el rehusamiento de un funcionario o ente público administrativo a cumplir con un deber concreto establecido por la Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución, incumplimiento que afecta al derecho de una persona”

VII. INEXISTENCIA DE OTRO MEDIO JUDICIAL MAS IDONEO.

La acción de amparo en su diferentes modalidades debe interpretarse como vía alternativa y no solo subsidiaria.

En tal sentido, se ha dicho que “... *El requisito de que no exista otro medio judicial más idóneo, al no estar especificado en la Constitución, no puede remitirse a las viejas doctrinas sobre mayor necesidad de debate y prueba, pues con ello se contravendrían las normas supranacionales: más idóneo debe entenderse en el sentido de más “breve” o “sencillo”.* (GORDILLO, Agustín: “Seminario de Derecho Administrativo”, Bs.As. 1995, pág. 6).

Por su parte, SAGÜES se pronuncia en el sentido de que “... *el amparo debe reputarse subsidiario o supletorio no ya frente a la mera existencia de otras vías judiciales, sino ante la*

inexistencia de un remedio judicial mejor o más idóneo para tutelar el derecho en juego de acuerdo con las particularidades de la causa, de manera que si esa ruta mejor o más idónea concurre en el caso es menester seguirla en lugar del amparo, pero si aquella es igual o pero que éste, el afectado puede optar por una o por otra vía". (PALACIO, Lino: "La pretensión de amparo en la Reforma Constitucional de 1994", L.L. 7/9/95).

Finalmente y por todo lo expuesto, sostengo que en relación a la cuestión específica planteada como objeto de la presente demanda, la ACCION DE AMPARO-MANDAMUS constituye sin lugar a dudas el único remedio judicial para lograr el cese de la irregular situación

VIII. CUESTION DE PURO DERECHO

En el presente caso no se requiere mayor amplitud de debate y prueba para determinar la clara omisión reglamentaria por parte de las autoridades de aplicación de la ley 3475 (llámese Ministerio de Gobierno y/o Consejo Provincial de la Mujer), fácilmente apreciables y corroborable por parte del juzgador, por ende en estos autos no existen cuestiones fácticas controvertidas.

De lo expuesto precedentemente, se puede afirmar que se encuentran cumplimentados los extremos legales exigidos para la procedencia del presente mandamiento de ejecución, a saber: a) Señalamiento del deber impuesto e incumplido, consiguientemente rehusado. b) Acreditación de la reclamación administrativa previa c) inexistencia de otras vías aptas e idoneas.

IX. OMISION REGLAMENTARIA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO: ANTECEDENTES.

Lo que este excepcional remedio constitucional intenta, es la reparación en sede jurisdiccional, ante la inacción del Poder Ejecutivo de no reglamentar una ley, y con esa actitud omisa impedir llevar a la práctica lo decidido por el Poder Legislativo.

En un primer momento la Corte Suprema se negó a intervenir en los casos de omisión reglamentaria por parte del Poder Ejecutivo. Así en el caso Robredo Albarracín de 1954, llegó a sostener que una ley aún no reglamentada no estaba vigente. Poco después, en el caso Ruiz (fallos 256:386), el más alto Tribunal sostuvo que, si el Poder Ejecutivo no había reglamentado una ley, no le correspondía a los tribunales el obligarlo a hacerlo.

Más adelante en 1960, en el caso Vega la Corte reafirmó esa interpretación.

Sin embargo, pocos años después en el caso "Campomar" (fallo 262:468) el máximo tribunal señalaba que "la omisión o retardo en el ejercicio de la facultad reglamentaria no obsta a la aplicación de la ley cuya operatividad no ofrece duda".

Más recientemente la Corte Suprema ha señalado que el carácter programático de una ley "no es causa que por si sola justifique una inacción sine die del Estado en hacer efectiva sus disposiciones, pues de otro modo ...habría que admitir que fue dictada para satisfacer inquietudes puramente literarias, conclusión ésta que no puede aceptarse ... Lo que la ley tan enfáticamente establece, pudo tal vez, dilatarse en el tiempo, pero no quedar en letra muerta"

Esta última doctrina está en consonancia con el carácter operativo que la Corte Suprema ha dado a los derechos constitucionales a partir del caso Siri y, desde el caso Ekmekdjian, a los derechos consagrados en los Tratados Internacionales.

Así, ante la situación de falta de operatividad de un derecho por falta de debida reglamentación, el Poder Judicial podría optar bien, por intimar al Poder Ejecutivo a dictar el reglamento ejecutivo de la ley dentro de un determinado plazo (Cfr. Lo decidido por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el caso Fernández 23-XII-03,LL) y Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (19-III-03)) o admitiendo la operatividad propia de todo derecho reconocido legalmente u ordenar directamente lo que corresponda para llevar a cabo la decisión legislativa (Ej. Nuestro Excmo. Tribunal en el caso Trentacoste (30-XII-02) dictó un “mandamus” ordenando al Poder Ejecutivo Provincial a dar cumplimiento a la Ley 2198 que creaba el Ente de Desarrollo de la Zona Norte de la Provincia de Río Negro y que aún no había comenzado a funcionar).

X. PROCEDENCIA DEL AMPARO COLECTIVO – MANDAMUS.

El artículo 43 de la Constitución Nacional dispone que “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidas por ésta constitución, un tratado o una ley.

En similares términos el artículo 43 de la Constitución Provincial expresa “Todos los derechos y libertades humanas, reconocidos expresa o implícitamente por esta Constitución, están protegidos por la acción de amparo..., a fin de que... se le acuerde la garantía negada o el ejercicio de sus derechos individuales o colectivos. El juez del amparo ejerce su potestad jurisdiccional sobre todo otro poder o autoridad pública y la acción puede instaurarse sin formalidad procesal alguna. Tanto la acción de amparo como el habeas corpus, se resuelven por el juez previo informe requerido a la autoridad o particular que suprimió, restringió o amenazó libertades..., Dispone asimismo, las medidas correspondientes para quien expidió la orden o ejecutó el acto...”.

Como modalidad de amparo el artículo 44 de la misma carta magna provincial especifica cuando “*Para el caso de que esta Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución imponga a un funcionario o ente público administrativo un deber concreto, toda persona cuyo derecho resultare afectado por su incumplimiento, puede demandar ante la justicia competente la ejecución inmediata de los actos que el funcionario o ente público administrativo hubiere rehusado cumplir. El juez, previa comprobación sumaria de los hechos denunciados, libra un mandamiento y exige el cumplimiento inmediato del deber omitido*”.

XI. CARÁCTER COLECTIVO DEL AMPARO.

“No puedo dejar de citar en el tratamiento de esta cuestión procesal al doctor Agustín Gordillo, quién considera que ...”la nueva Constitución introduce en el artículo 43° los derechos de incidencia colectiva, categoría más extensa de tutela y derecho de fondo que parece destinada a palidecer la importancia de la previa distinción entre derecho subjetivo e interés legítimo, e incluso interés difuso... Resulta de todo ello que el tema del derecho subjetivo strictu sensu esté destinado a perder progresivamente importancia a medida que se extiende la tutela a otras situaciones, el derecho de incidencia colectiva es una noción

superadora tanto del derecho subjetivo como del interés legítimo...” “... Detrás de la categoría de derechos ...de incidencia colectiva subyace una gama variada de intereses difusos, cuya violación afecta a la ciudadanía en su conjunto o por lo menos a una importante porción de ella, sin desconocer la posibilidad de que existan afectados particulares de resultados de haber sufrido un daño directo en sus personas o en sus patrimonios.

El derecho constitucional va dando respuestas desde su óptica a una altísima gama de intereses generales, públicos, fraccionados, pero ciertos y con jerarquía que requieren de una protección de marcado carácter preventivo. En este tipo de relaciones se tiene parte en un interés colectivo y supraindividual, ello constituye la faz subjetiva de la cuestión. Es decir que si bien no se puede demostrar un perjuicio personal o actual, de todos modos quién participa de esta suerte de relación consorcial, compuesta por todos los damnificados actuales o potenciales, puede invocar una suerte de “cuota parte” que en tanto partícipe en la cuestión le da derecho a recurrir a la justicia.

...la posición mayoritaria y amplia, piensa que una interpretación conjunta de los términos “afectado” y “derechos de incidencia colectiva” permite suponer una consagración de la legitimación para actuar a cualquier afectado en reclamo de derechos colectivos” (entre otro, sostienen esta postura Walsh, JR, Bidart Campos, Morillo, Gozáini.

Se debe acreditar un mínimo interés razonable y suficiente, de conformidad con figuras similares del derecho anglosajón, para constituirse en defensor de derechos de incidencia general o supraindividuales”.

DICTAMEN Nro. 116/06 PROCURACION GENERAL DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO de fecha 16 de Junio de 2006. Autos “Cabral Armando Orlando s/ Mandamus” Expediente Nro. 2116/06.

De los argumentos ut supra mencionados, resulta procedente enmarcar la presente acción dentro de las contempladas en el la ley 2.779 art. 2 inciso d) *“El amparo previsto procederá cuando se entable en relación con la protección y defensa de... d) Cualquier otro bien y/o valor social que responda a necesidades de grupos humanos, con el fin de salvaguardar la calidad de vida”.*

XII. LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO.

Invoco la legitimación procesal establecida por el Artículos 44° y 167° de la Constitución Provincial, Artículo 9 inciso b) de la Ley 2756 y Artículo 43° de la Constitución Nacional; acudiendo ante VS para solicitar a través del presente Mandamiento de Ejecución, conforme se expresa en el capítulo “Objeto” de la presente, y tutelar el interés colectivo de todos los progenitores con menores a su cargo que luchan por los derechos de sus hijos, valiéndose de esa herramienta legal (léase Registro de Deudores Alimentarios) para obligar a los morosos al cumplimiento de la cuota alimentaria fijada en sentencia firme por autoridad judicial.

Tenemos entonces que en nuestra Carta Magna Provincial al crear la figura del Defensor del Pueblo en su Artículo 167° expresa “Corresponde al Defensor del Pueblo la defensa de los derechos individuales, y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial.”

En consonancia con ello la ley reglamentaria de las funciones le reconoce en su artículo Art. 9 inc. c) de la ley 2756 “La supervisión del funcionamiento de la administración pública provincial,otorgando especial atención a la eficacia con que se alcanzan los resultados propuestos en cada caso y analizando las fallas, dificultades y obstáculos que impidan o entorpezcan la cabal satisfacción de los derechos e intereses de los usuarios y administrados”

XIII. BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

Ley Provincial 2.756 expresamente dispone en su artículo 9º “El Defensor del Pueblo tendrá las siguientes funciones que ejercerá a pedido de parte o de oficio: b) La defensa en juicio de los derechos difusos o derechos de instancia colectiva gozando para ello del beneficio de litigar sin gastos”

XIV. AUTORIZA.

Que autorizo al letrado de esta institución Dr. Julián Horacio Fernández Eguía, inscripto al Tomo IX, Folio 1704 del C.A.V. y al Dr. Hernán Linares inscripto al Tomo VII Folio 1492 del CAV, a realizar todos los actos necesarios en el tramite de este proceso.

XV. OFRECE PRUEBA.

DOCUMENTAL.

a) Se acompaña la documental original de los Expedientes Nros. 6.874/05 y 7.472/05 del registro de esta Defensoría del Pueblo en el cual se acreditan documentalmente las argumentaciones fácticas esgrimidas en el apartado IV) ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS de la presente demanda.

b) Copia Simple de los Proyectos de Comunicación Nro. 59/05, 64/05 y 776/06 sancionados por la Legislatura de la Provincia de Río Negro, con la finalidad de manifestar al Poder Ejecutivo la necesidad de la urgente reglamentación de la normativa legal en cuestión..

INFORMATIVA.

a) Se libre oficio a la Legislatura de la Provincia de Río Negro a los fines de informar sobre los Proyectos de Comunicación mencionados ut supra (fecha de sanción, contenido de los mismos, etc).

b) En caso de desconocimiento de la autenticidad de la Resolución nro. 24 de la Legislatura de Río Negro sancionada el día 5 de Septiembre del corriente año, en la cuál consta mi designación como Defensora del Pueblo de la Provincia, se oficie a dicho Poder a los efectos que informe sobre su autenticidad.

XVI. PETITORIO.-

1) Se me tenga por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido.

2) Se agregue la documental que se acompaña, y se tenga por ofrecida la informativa a la Legislatura Provincial.

3) En atención a la calidad que invisto, pido se exima a mi parte de prestar caución y autorice el beneficio de litigar sin gastos.

4) Por autorizado a los profesionales mencionados en el punto XIV).

5) Haga lugar a la presente acción de amparo - mandamiento de ejecución incoado por mi parte de la manera y con el alcance expresado en el punto II “OBJETO” de esta presentación, disponiendo su notificación en los términos peticionados.

**AUDIENCIA INSTALACIÓN DE RADIO BASE DE TELEFONÍA CELULAR-
CATRIEL**

En mi calidad de Defensora de Pueblo de la Provincia, y en cumplimiento de la competencia otorgada a nuestra Institución en la defensa de los derechos colectivos ambientales, tanto por la Constitución Provincial, como en la Ley reglamentaria de nuestras funciones.-

Comenzaré reconociendo al mecanismo de la **Audiencias Publicas**, como un instrumento de participación de los regímenes democráticos modernos. Un lugar donde la sociedad se expresa natural y espontáneamente, en definitiva donde podemos manifestar con absoluta libertad nuestras perspectivas como así también soluciones y / o alternativas.

Así la importancia de participar en el proceso de toma de decisiones, para que se reflejen las distintas opiniones en forma simultanea, en pie de igualdad y en contacto directo con los interesados, un lugar para aprender a construir consensos, favoreciendo la tolerancia y el respeto de la diversidad.-

Destaco la ausencia en el régimen legal, de una especialista en la problemática que haga las veces del “Defensor del Ambiente”, para la efectiva protección de los derechos, considero limita sobremanera la riqueza de las audiencias, toda vez que él es quien cargaría con el estudio, evaluación y conclusión sobre la propuesta presentada por la empresa. Su ausencia menoscaba sensiblemente a los vecinos y/o ONGs locales, que ajenos a estructuras de poder e información, quedan a merced de los especialistas contratados por las grandes empresas. Recomendamos en tal sentido su revisión.-

Nos encontramos aquí a los efectos de ponderar los efectos de las radiaciones NO ionizantes, radiofrecuencias y micro ondas con frecuencias entre 100 Khz y 300 Ghz en el marco del estudio de impacto ambiental presentado por la empresa dentro del procedimiento legalmente previsto para la emisión de la resolución ambiental, el cual permitirá a las autoridades publicas adoptar decisiones caracterizadas por la máxima fundamentación y razonabilidad técnica, viabilidad económica y legitimidad social, tres cualidades esperadas por la sociedad respecto del buen gobierno.

Para su evaluación; destaco que en la Defensoría del Pueblo, existen desde el año 2000 antecedentes sobre la cuestión y pasados tres defensores continuamos con la tarea

acumulación sistemática de información, asesoramiento, y en definitiva constante aprendizaje para volcarlo donde sea oportuno.-

En dicho marco, se tomo efectivo conocimiento de la convocatoria a la presente audiencia y resolvimos avocarnos a la misma; poniendo de inmediato en conocimiento del **Consejo de Ecología y Medio Ambiente** a los efectos de que nos acerque copia del Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa (art. 7 de la ley 3266), lo cual fue remitido en tiempo y forma.

Corresponde comenzar manifestando que nuestra institución debe integrar las diferentes preocupaciones ambientales, sociales y económicas en la visión de un desarrollo sustentable provincial y la necesidad de tomar un rumbo o seleccionar un método de acción entre alternativas que servirán para definir decisiones presentes y futuras a nivel local y regional.

Por ello destaco la importancia de esta primera audiencia referida a la problemática, la cual será modelo para otras tantas donde nos encontraremos.

Aquí tenemos como particularidad la existencia de una legislación local (Ley municipal N° 563/05) que valoramos como muy positiva; donde especifica en forma detallada los requisitos a cumplir por la empresa en lo referido a la seguridad, estética y salud para el usuario, para cada uno de los tipos de antenas a instalar.-

Específicamente en lo que a la cuestión ambiental se refiere, exige **un análisis preliminar (art. 4 inc. 5 y 6) del suelo, del entorno, y de la radiación que emite en referencia a la Res. 202/95 del Ministerio de Salud y Acción social de la Nación; un estudio de impacto ambiental con sus efectos sanitarios, sonoros, visuales paisajísticos, y socioeconómicos (inc. 9); por cada una de las antenas a instalarse.-**

Asimismo le otorga carácter precautorio a toda autorización otorgada, la cual cede ante nuevas tecnologías y/o estudios que determinen la existencia de riesgos; su carácter progresista sienta las bases de un nuevo tipo de legislación ambiental que va unida a los cambios y avances tecnológicos.-

Atado a ello tenemos normativas que datan de once años; tales como la resolución 202/95 citada precedentemente, que generan en la población constantes dudas sobre su efectividad; así partimos en nuestro análisis que quizás su cumplimiento es insuficiente para mitigar posibles daños provocados por las radiaciones NO ionizantes en la salud.

TOMAMOS ESTA HIPÓTESIS DEL IMAGINARIO COLECTIVO

Para corregir dicha circunstancia debo traer a colación lo recientemente manifestado por el presidente de nuestro mas alto tribunal provincial; Dr. Luis Lutz con motivo del congreso recientemente desarrollado en S. C. de Bariloche; **“El estado debe prevenir la contaminación del Aire el agua y el suelo, manteniendo el equilibrio ecológico, conservar la flora la fauna y el valor paisajístico”**; así el factor preventivo o precautorio se destaca como un principio ambiental fundante, circunstancia expresamente reconocida en fallos dictados en consecuencia.-

Este principio fue introducido en la Primera Conferencia Internacional sobre Protección del Mar del Norte, y posteriormente se ha hecho lo propio en varias Convenciones y Acuerdos Internacionales, incluyendo el Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea. Sin embargo, una de las mayores expresiones en el ámbito internacional de Principio Precautorio es la Declaración de Río, firmada en 1992 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo. La declaración señala:

“Para proteger el medioambiente, los Estados, de acuerdo a sus capacidades, aplicaran en toda su extensión el enfoque precautorio”; nuestra Ley general del ambiente reproduce casi literalmente dicho enunciado, con lo cual podemos considerarlo derecho vigente.-

Partimos entonces para analizar la cuestión de fondo que nos convoca teniendo como guía el citado principio ambiental.-

En dicho marco anticipo la opinión de esta defensoría en relación a la existencia de dudas científicas suficientes, para afirmar, que la radiación indiscriminada de microondas que genera la red de telefonía móvil sobre la población, tiene efectos biológicos indeseables e introduce un riesgo para la salud pública.

Así su emisión muy cerca de nuestro cráneo, acelera nuestras ondas cerebrales al límite del estrés, y puede tener muchos otros efectos biológicos hoy no discutidos en amplios y reconocidos ámbitos científicos (**conf. anexo 3.a y b.**) que no viene al caso enunciar individualmente y que detallo en el anexo del presente.

Debe recordarse muy sintéticamente las tres variables dosimétricas que definen la influencia de las Radiaciones no ionizantes sobre los seres, así:

- 1) Densidad de la energía de radiofrecuencia.
- 2) Frecuencia de las ondas de dicha energía.

3) Tiempo de exposición.

Los efectos biológicos dependen en primera medida a la prolongada exposición (**conf. anexo I. 3.c.)** a las microondas; siendo algunos de los efectos destacados el incremento del estrés; alteración de ondas cerebrales y otros biorritmos; dolor de cabeza; insomnio; ruidos y zumbidos de oídos, mareos y vértigo; alteraciones del ritmo cardíaco; además de toda una serie de malestares difíciles de definir, calificadas como **el nuevo Síndrome de las Microondas**.

Todos somos sensibles a las microondas, pero el peligro potencial frente a los campos electromagnéticos es mayor para la “población de alto riesgo”, como embarazadas, bebés y niños.

1) Lo expuesto lo fundamento entre otras opiniones en lo sostenido por el investigador neozelandés Neil Cherry, que realizó un estudio por encargo del Parlamento Europeo (junio de 2000), donde expresa: “la radiación electromagnética de bajo nivel [como la de los móviles] es perjudicial para el cerebro, corazón, feto, hormonas y células [...] a través de resonancias con los cuerpos y las células, la radiación interfiere en la comunicación inter-células, su crecimiento y regulación, y está dañando la base genética de la vida”. Este investigador recomienda una exposición máxima en exteriores en el límite de las zonas habitadas de $0,1\mu\text{W}/\text{cm}^2$.

2) Lo expuesto es ratificado por el Consejo de la Unión Europea que emitió una Recomendación en el año 1999 cuyos Considerandos también hace suyos la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en las resoluciones que adjunto como respaldatoria de nuestro dichos. A saber: “Es absolutamente necesaria la protección de los ciudadanos de la Comunidad contra los efectos nocivos para la salud que se sabe puede resultar de la exposición a campos electromagnéticos; ... La presente Resolución tiene como objetivo proteger la salud de los ciudadanos que pasan un tiempo significativo en relación con los efectos cubiertos por la presente Recomendación.”

3) Apoya dicha tesitura los pronunciamientos realizados por el Organismo Alemán para Protección contra Radiaciones (conf. anexo I. 3.d.)

4) El físico Paolo Vecchia, investigador del Instituto Superior de Sanidad de Roma, presentó recientemente, el 03/12/2005 en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, los resultados preliminares del Proyecto Internacional sobre Campos

Electromagnéticos, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el propósito de establecer posibles riesgos del electromagnetismo para la salud humana.

5) Esto no es nuevo y ya ha sido incorporado como sustento científico por varios países desarrollados tales como Suiza e Italia, que ante las evidencias del riesgo sanitario para la población, **aplica de manera preventiva**, y mientras progresan las investigaciones, una normativa de electromagnetismo más restrictiva, que reduce por 100 los valores aceptados por el la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación No Ionizante.

6) En la Resolución de Salzburgo (Conferencia internacional sobre Emplazamiento de Emisoras de Telefonía Móvil, Ciencia y Salud Pública, junio de 2000) se da un paso más, recomendando un valor provisional máximo de $0,1\mu\text{W}/\text{cm}^2$ para las estaciones base GSM.

7) Prueba de ello es la exigencia realizada en EE UU donde es obligatorio el etiquetado de los teléfonos móviles, de manera similar al tabaco. Desde agosto de 2000, cada nuevo modelo debe indicar el nivel de radiación emitida, para informar del riesgo de cada teléfono móvil y eludir posibles reclamaciones multimillonarias como en el caso de la industria tabaquera.

Ante esta disparidad de criterios, y con la experiencia de múltiples sustancias o actividades pretendidamente inocuas, que luego se han mostrado malsanas lo único razonable es un enfoque que prime la salud de los ciudadanos antes que los intereses económicos en juego.

Ante lo expuesto, expertos independientes británicos dieron a conocer un informe para el Ministerio de Sanidad de Reino Unido en mayo de 2000 donde solicitan: **“se aplique el principio de prevención en el uso de las tecnologías de telefonía móvil hasta que se disponga de mayor y más fundamentada información científica sobre sus efectos sobre la salud”**.

Creo que lo visto hasta aquí nos demuestra que debe existir una nueva actitud sobre la problemática por parte de las empresas; comenzando por el **derecho a una información veraz, adecuada y completa** en los informes ambientales; no parcial circunscripta a la estructura monoposte como la que nos ocupa.-

Deberán entonces las empresas:

1) Aconsejar alejarse el aparato celular todo lo posible de la cabeza al hablar o mejor aún utilizar los accesorio de manos libres.-

- 2) El uso de mensajes escritos, por su breve emisión radioeléctrica y por la distancia de lectura.
- 3) Cuando no se use (stand by), mantener el teléfono alejado del cuerpo.-
- 4) No usarlo dentro de edificios, pues aumenta la potencia de radiación al tener que atravesar estructuras densas.-
- 5) Evitar el uso del teléfono en aquellos lugares donde la señal es más débil, pues el equipo se ve necesitado de aumentar la potencia que emite (ej. interiores de vehículos).
- 6) Informar sobre los equipos que tengan el menor nivel conocido de emisión.-
- 7) Tendrían que decir que atento a que la densidad de potencia disminuye con el cuadrado de la distancia a partir del punto emisor, la primera recomendación es procurar mantenerse lo más alejado posible de las fuentes de radiación, sean éstas fijas o móviles.
- 8) En el mismo sentido, deberían poner en conocimiento de la población en general que deben evitar permanecer cerca de las antenas, y en caso de residir cerca de una, deberán instalar pantallas de protección para las microondas.

Todas estas cuestiones deberían ya ser parte de los informes ambientales y que por el simple hecho de no reconocer responsabilidad sobre el sistema, trasunta en un perjuicio directo sobre la población, que no dejará de usar los aparatos celulares, pero si tendrá a su alcance las previsiones necesarias para poder disminuir los riesgos; circunstancias hasta aquí olvidadas.

El Estado, tampoco es ajeno a las responsabilidades del sistema, así:

- 1) Debería realizar un Mapa de Radiación, para planificar el crecimiento urbanístico en armonía con la red de telefonía, introduciendo criterios sanitarios, especialmente, evitar las antenas repetidoras cerca de guarderías, escuelas, hospitales y centros similares, donde se encuentra la población más sensible.
- 2) Es preciso establecer distancias de seguridad alrededor de las antenas dentro de los estándares internacionales mas pretenciosos, 200 metros (toronto canada), o 500 m como en Australia.
- 3) No tenemos conocimiento de que exista estudios sobre diferentes alternativas a la presente instalación; y una vez realizada, el seguimiento posterior, circunstancias estas que deberá ser tenidas en cuenta al merituar el informe por parte de la autoridad pública.

Si bien lo expuesto aún no tiene una fuente legal directa; es información pública respaldada por ONGs. y científicos respetados a nivel mundial, muchas veces citadas por diferentes instituciones de defensa del ambiente; entre ellas las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires.

La segunda Ha materializado en el dictado de sendas Resoluciones que adjunto acompaño, diversas recomendaciones a estamentos del Poder Ejecutivo local que alcanzan inclusive a sugerir el desmantelamiento de estructuras soporte y antenas, haciendo eco del ya mencionado principio precautorio

1) Abogamos por el dictado a nivel Nacional, Provincial y/o Local de LEGISLACIÓN PROTECTORA AL RESPECTO.- nuevas normativas, cambiando el vacío legal existente en REFERENCIA A LA PROBLEMÁTICA.-

2) No obstante ello y en un ejercicio responsable de la función administrativa del estado; solicitamos al ente encargado de evaluar la problemática; tenga presente el principio precautorio analizado, sin duda un principio jurídico ambiental fundante, que permite salvar las omisiones legislativas indicadas a los efectos de una sana y prudente decisión al respecto.-

3) Destacada nuestra posición quedamos a la expectativa de la resolución que se tome dentro del marco del procedimiento; solicitamos analice lo expuesto; y en su caso fundamente las razones que lo lleven aceptarlas o rechazarlas, toda vez que detrás de cada uno de los planteos realizados se encuentra la comunidad de Catriel, con alto grado de expectativa e incertidumbre respecto de los efectos nocivos de la actividad.

Recalco que no es intención de la Institución Defensoría del Pueblo, poner trabas en el avance del desarrollo tecnológico que enriquezcan a la Provincia y sus vecinos, tan solo consideramos prudente que se tomen los recaudos necesarios para evitar que repercuta negativamente en el futuro; ello solo es posible en un marco de estricta legalidad y en

cumplimiento de medidas que limiten a los máximos extremos posibles los daños en el ambiente, y a ello nos avocaremos.-

En estos diez minutos que se me han otorgado y luego de la exposición realizada quiero transmitir al público presente, que luego de resuelta la cuestión por el órgano con competencia específica para ello evaluaremos los pasos a seguir, y no dudaremos en los casos de que surjan eventuales defectos u omisiones, en hacer uso de las facultades conferidas por ley y la Constitución a los efectos de que ellos sean revertidos, impidiendo en forma total cualquier daño que pudiera provocarse en el ambiente.-

Saludos

Anexo del informe.

Información respaldatoria de los dichos vertidos en el presente informe

1) Resoluciones Defensoriales.

- a) Resolución N° 958/01 Defensoría del Pueblo de río Negro
- b) Resoluciones N° 3405/2001, N° 4460/2002 y 1790/06, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
- c) Informe sobre la influencia de las radiaciones no ionizantes en los centros de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación.-

2) Información respaldatoria

- a) Doctor Rodolfo Touzet (CNEA), “Percepción y Riesgos en RNI”, presentación en “IV Jornadas de Sistemas Irradiantes y RNI”, Escuela Superior Técnica del Ejército Argentino “Gral. Div. Manuel N. Savio” (mayo 2006).
- b) O.M.S. Nota Descriptiva n° 193 (Actualizada a junio de 2000)
- c) Los estudios del biofísico Neil Sherry (New Zealand), encuentran efectos biológicos, con alteración del electroencefalograma a partir de sólo 0,01µW/cm². Datos

confirmados por las investigaciones del Dr. V. Klitzing (Lübeck, Germany) que como especialista en Física Médica sitúa los umbrales de prevención entre 1 y 10 (0,001-0,01 μ W/cm²).

d) SSK "Organismo Alemán para Protección contra Radiaciones" considera posible que se produzcan efectos atérmicos en el ámbito de los campos débiles de alta frecuencia "cuando tiene lugar un comportamiento coherente de las estructuras supramoleculares y al mismo tiempo los pequeños cambios físicos son amplificados por cadenas biológicas de señales"

3) consulta paginas de internet.

- a) <http://www.tassie.net.au/emfacts/>
- b) <http://www.iegmp.org.uk/IEGMPtxt.htm>
- c) Informe completo del grupo independiente de expertos británicos. - <http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/>
- d) Página oficial de la Comisión Federal de Comunicación, el organismo estadounidense que se encarga de regular, entre otros, los asuntos relacionados con la telefonía móvil. <http://www.elpais.es/p/d/especial/antenas/>
- e) Informe del Área de Toxicología del Instituto de Salud Carlos III sobre Telefonía Móvil y Campos Electromagnéticos.

Anexo. 1. Resolución de Salzburgo sobre instalaciones emisoras de telefonía móvil. Conferencia internacional sobre Emplazamiento de Emisoras de Telefonía Móvil, Ciencia & Salud Pública. Salzburgo, 7 y 8 de Junio del 2000.-

4) Fallos del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

- a) "Codeci de la provincia de Río Negro S/ Acción de Amparo", sentencia del 16/08/2005.-

EXPOSICIÓN DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA

DRA. ANA IDA PICCININI (AUDIENCIA PUBLICA SIERRA GRANDE)

Objeto: Audiencia sobre el depósito, utilización y disposición final de los bifenilos policlorados (PCBs) en la empresa Minera Sierra Grande S.A. e HiparS.A.

Me encuentro aquí, en mi calidad de Defensora de Pueblo de la Provincia, en cumplimiento de la competencia otorgada a nuestra Institución para la defensa de los derechos colectivos ambientales, tanto por la Constitución Provincial, como por la Ley reglamentaria de nuestras funciones.

La importancia de esta Audiencia Pública es justamente la de contar con una oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones en cuestiones de interés público, para que se reflejen las distintas opiniones de los participantes, en condiciones de igualdad. Un lugar para aprender a construir consensos, favoreciendo la tolerancia y el respeto de la diversidad.-

Comenzaré reconociendo el mecanismo de la Audiencia Pública, como un instrumento de participación de los sistemas democráticos modernos. Un espacio donde la sociedad se expresa natural y espontáneamente, en definitiva, donde podemos manifestar con absoluta libertad nuestras perspectivas, como así también proponer soluciones y / o alternativas.

Nos encontramos aquí a fin de ponderar los INFORMES AMBIENTALES agregados por la empresa Hi.Pa.R.S.A. y Minera Sierra Grande S.A.; dentro del procedimiento legalmente previsto, para la emisión de la Resolución Ambiental referida a:

- Los dos depósitos de PCB's existentes en la localidad de Sierra Grande.
- El funcionamiento de los transformadores en uso en el complejo minero.
- El programa de retiro y disposición final de los mismos.

Esta Audiencia, permitirá a las autoridades públicas adoptar decisiones caracterizadas por la máxima fundamentación y razonabilidad técnica, viabilidad económica y legitimidad social, tres cualidades esperadas por la sociedad respecto del buen gobierno.

Haciendo una breve referencia a la problemática, podemos decir que oportunamente tomó estado público el peligro que la exposición a los PCB's supone para las personas.

Informes concluyentes incorporados a actuaciones internas de la Defensoría del Pueblo, emitidos por diferentes organismos internacionales, nacionales, e instituciones científicas dedicadas a su investigación, respaldan dicha afirmación y nuestra posición en la materia.

Efectivamente, uniformemente los expertos se expiden acerca de la extrema toxicidad de los PCB's y señalan que tales peligros, en general, están asociados a su exposición crónica, aún en concentraciones bajas.

Por ello los PCB's son ahora integrantes de la categoría denominada "compuestos tóxicos bioacumulables en el ambiente" y, cuando su nivel supera las 50 partes por millón, es considerado un riesgo para la salud, siendo por ello uno de los productos más regulados.

De ahí que la mayoría de los países desarrollados, en base a ello, determinaron la prohibición de su fabricación o utilización, a lo que se adecuó nuestra Provincia con la sanción de la ley 3.660.-

El acopio de profusa información y material con sustento científico nos permitió tomar una posición clara en el sentido de la OPOSICIÓN a la utilización de los PCB's en la Provincia. Creo a esta altura de los acontecimientos, y existiendo marco legal claro al respecto, que es ocioso abundar en mayores argumentos acerca de la peligrosidad del mencionado refrigerante. En las Resoluciones N° 775/02 y 722/06, desde nuestra Institución se requirió al Ministerio de Salud de la Provincia la realización de un censo estadístico en las zonas presuntamente afectadas por la cercanía a transformadores que contenían el líquido, a los efectos de verificar si existe en la población que las habita, variaciones con relación a la media oncológica provincial.-

Se consultó, entonces, a diferentes laboratorios locales, para que se pronuncien sobre la viabilidad de la determinación de residuos de la sustancia tóxica en grasas de personas con vida.

Conforme fuera citado por el Defensor del Pueblo de la Nación en reciente pronunciamiento, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de Francia, esta sustancia es considerada "probable cancerígeno". Y si bien es admisible un cierto nivel de PCB en sangre, por encima de los 3 microgramos en 100 mililitros de sangre, se torna sumamente riesgoso.

Por último señalo, que en las actuaciones formadas en la Defensoría del Pueblo (N° 8554/05), sobre presencia de PCBs en la Mina de Sierra Grande, por Resolución N° 452/06, advertimos en forma inmediata la eventual violación a la normativa vigente en nuestra Provincia, referida al tratamiento y disposición de PCBs, dado que en el yacimiento se encuentran en uso transformadores de energía que contienen ese líquido refrigerante.

En las mismas actuaciones consta copia del acta de Inspección e Infracción N° 124, realizada por la Secretaría de Estado de Trabajo, donde se constató la presencia de 54 transformadores con PCBs. Asimismo se verificaron varias infracciones a la legislación laboral vigente, tales como la ausencia de un programa de cambio y/o reemplazo de PCB's (cap. 14, Anexo I y VI,

dec. 351/79); falta de capacitación en el procedimiento para el uso, manipuleo y disposición segura de los mismos (Cap. 14, Anexo I y IV, Dec. 351/79); ausencia de un profesional responsable que certifique su estado; (art. 9 Inc. b Ley 19587); falta del Libro Rubricado confeccionado al efecto (Resolución de la Sec. de Estado de Trabajo de la Prov. 248/05), entre otras.

A partir de ello, solicitados los informes de rigor a la Empresa Minera Sierra Grande SA, ésta nos informó que había procedido al recambio en forma directa, depositando los transformadores en un lugar seguro para luego ordenar su exportación. Luego indicaron que se encontraban en gestiones para conseguir los transformadores sustitutos, lo que resultaba dificultoso porque, según dijeron textualmente, “no existe stock en el mercado” y, agregaron, “estos deben ser fabricados a medida”.

Finalmente expresaron que los contaminados fueron desactivados y que se había llegado a un acuerdo con el CoDEMA a los efectos de depositarlos en “Los Polvorines”, distante 7 Km. del pueblo y del lugar de trabajo, teniendo este sitio, según ellos, “las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes” (fs. 36/40 actuaciones 8554/06). AFIRMACIONES ESTAS, QUE REBATIRÉ A LO LARGO DE ESTE INFORME.

A partir de los sucesos que son de público conocimiento, solicité con fecha 2 de noviembre pasado, un nuevo informe de manera URGENTE al Co.DE.MA. atento el fracaso de las medidas tomadas sobre el particular.

Nos constituimos además, en la localidad de Sierra Grande el día 14 de noviembre, manteniendo reuniones con el Sr. Intendente y en las oficinas de la Empresa Minera Sierra Grande S.A., con personal dependiente de la misma que nos comunicó las medidas tomadas para la contingencia.

En dicho marco, convoqué urgentemente a los actores involucrados, a una reunión en la sede de la Defensoría del Pueblo, para el día 15 del mismo mes, en la que participaron el Intendente local, Sr. Nelson Iribarren; el Presidente del Co.DE.M.A., Sr. Oscar Echeverría; y representantes de la Secretaría de Estado de Trabajo y del Ministerio de Salud. En la misma, y a instancias de esta Defensora del Pueblo, se convino la realización de una auditoria externa en el complejo minero buscando para ello profesionales de excelencia en la materia.

Asimismo, y en forma conjunta entre todos los participantes de la reunión, se acordó tomar acciones ante esta problemática. Con ese objeto, se dispuso la realización de esta Audiencia Pública.

Debo destacar la predisposición demostrada por los organismos y funcionarios convocados, quienes en todo momento estuvieron dispuestos ante nuestros requerimientos.-

En cumplimiento de las funciones que me impone la Constitución como órgano de control, enfatice en la necesidad de extremar las medidas de prevención para asegurar la salud de la población; las adecuadas condiciones de trabajo en el complejo, la preservación del medio ambiente y su articulación con el desarrollo económico sustentable de la zona, adelantando mi intervención, particularmente respecto del tratamiento, remoción y disposición de los PCB's contenidos en los transformadores que permanecen en el complejo minero.

El marco legal aplicable a nivel provincial en la materia está integrado por la Ley 3.660 y sus modificatorias sobre tratamiento de PCBs; la Ley Ambiental (Nº 3.266) y la Ley de Tratamiento y Disposición de Residuos Peligrosos (Nº 3.250), sin perjuicio de las regulaciones a nivel nacional y de las normas internacionales a las que adherimos.

La Ley 3.660, sancionada en agosto del 2001, declaró la prohibición de la instalación y funcionamiento de equipos que contengan PCBs, así como su ingreso y tránsito por el territorio provincial, y ordenó que en un plazo de 24 meses debían ser erradicados de la Provincia. ADVIÉRTASE QUE ESTAMOS TRABAJANDO SOBRE PLAZOS HOLGADAMENTE VENCIDOS.

Por ello EXIGIMOS que se tomen decisiones URGENTES AL RESPECTO.-

En idénticos términos nos dirigimos al Superior Tribunal de Justicia Provincial: expresando que existe “riesgo presunto” o “daño temido” en el almacenamiento y disposición final de los transformadores, por lo cual y en aplicación plena el principio “Precautorio”, DEBEN EXTREMARSE MEDIDAS URGENTES PARA EVITAR QUE EL RIESGO Y EL DAÑO SE CONCRETEN.

Debo destacar que un hecho que limita sensiblemente nuestra evaluación, es la presentación extemporánea por parte de la empresa Minera Sierra Grande S.A del informe relativo al OBJETO de la presente audiencia, el que, al ser entregado escasos días antes de su celebración, repercute directamente en la posibilidad de una intervención más profunda.

Esto además, lesiona el derecho de todo ciudadano al acceso a la información de forma cierta, veraz y oportuna (artículo 42 de la C.N.), circunstancia que, entiendo, debe ser salvada abriendo un plazo posterior a la audiencia a los efectos de posibilitar aportar datos relevantes que surjan de un análisis minucioso del informe. Dejo entonces en manos del regulador la toma de medidas al respecto.

Sin perjuicio de ello; se pueden observar a primera vista, que existen en la empresa Minera Sierra Grande S.A. situaciones de hecho que no se condicen con la legislación vigente, ni con principios fundantes del derecho ambiental, lo cual justifica que la población tenga

razonables temores, y es éste un espacio que permite comenzar a despejar las dudas, a poner las cosas en su lugar, equilibrado la balanza entre la salud y el desarrollo en Sierra Grande.

NO EXISTÍAN, NI EXISTEN, de acuerdo a lo que surge de las actas realizadas recientemente en el lugar por funcionarios dependientes de la áreas de Medio Ambiente y Trabajo, cumplimiento de la legislación vigente relativas a las condiciones de funcionamiento de los 42 transformadores en la mina, circunstancias expresamente reconocidas por la empresa Minera Sierra Grande S.A. en su informe. Entre esas inobservancias señalo:

- Fallas en la protección mediante los correspondientes aislamientos, tomas a tierra y disyuntores.-
- Falta de distancias suficientes, obstáculos y ausencia de vallado perimetral.
- Deficiencias en los accesos al depósito, su señalización, desmalezamiento, etc..-
- Falta de identificación de alguno de los transformadores y de todos los capacitores.-
- Se constató también, la falta de cubas y/o recipientes de contención para los eventuales derrames y/o filtraciones.
- Falta el sistema de contención para el caso de derrame de fluidos.
- En casi la totalidad de los transformadores se evidenciaron medidas de seguridad pendientes de cumplimiento
- No describen medidas previas de mitigación de riesgos e impactos de cada transformador.
- Ausencia de un responsable legal idóneo en la materia.
- Falta de capacitación del personal que opera los transformadores con la sustancia

Ello además de otras cuestiones que no son menores, como la falta de recarga anual de los matafuegos; higiene de sanitarios, habilitación de lugares específicos como cocina y comedor para los trabajadores.

Un caso puntual que quiero resaltar, es el de los transformadores identificados con los Nros. 45 y 46, ubicados en la punta del espigón, en la zona del puerto, a ochocientos metros mar adentro.

Ellos, indica el propio informe; no poseen cercos perimetrales, cartelería, ni recintos de contención de derrames. De ocurrir un accidente, “se esparciría por el piso de la sala y siendo el mismo de chapa; de encontrarse erosionada, caería directamente al mar“.

Concluye entonces el informe que “los riesgos de incendio y/o derrame pueden impactar gravemente sobre el agua marina”. Esto lo cito a modo de ejemplo.

Ahora bien, no obstante la situación de peligrosidad descripta y admitida por la empresa, el informe no fija prioridades en el retiro de los transformadores, aun cuando hay algunos con mayor riesgo.-

Así, la empresa estima como período razonable para reemplazar los equipos contaminados, el que va desde enero del año 2007 a diciembre del año 2008, PLAZO QUE CALIFICO EXCESIVAMENTE PERMISIVO Y QUE ENTIENDO DEBE SER REVISADO POR LA AUTORIDAD DE CONTROL.-

No quiero cerrar el análisis del informe presentado por Minera Sierra Grande S.A., no obstante las observaciones formuladas, destacando que el mismo demuestra una posición seria de la empresa en el reconocimiento de la realidad y de los hechos que motivan esta Audiencia, asumiendo una actitud responsable que esperamos se traduzca en las acciones futuras.

El Informe presentado por la empresa HIPARSA es más breve en su desarrollo que el de Minera Sierra Grande S.A. y omite el tratamiento de algunos aspectos relevantes.

Recordemos que el depósito de HIPARSA se encuentra ubicado en la Subestación de Energía Eléctrica propiedad de EDERSA, en un predio al norte del yacimiento minero. Aledaño al mismo existe un cuerpo de agua superficial.

En dicho galpón se depositan - según planilla agregada al informe- 18 transformadores, 2 tambores con aceite y 5 cubas con residuos, además de reactores, capacitores, adoquines, aserrín y arena, todos contaminados.

Estos datos, así como los suministrados en el informe de Minera Sierra Grande, deberán ser confrontados por la Autoridad de Aplicación con los obrantes en el Registro creado por la Ley 3.660, y en su caso, habrán de ser actualizados.

No dudamos en afirmar, a pesar de la escueta información suministrada, que el espacio no es suficiente para contener todos esos equipos y material con PCBs y, por otra parte, está asentado en arena y sólo rodeado por una pared interna de 30 cms, sin pasillos debidamente aislados para circulación y monitoreo.

Sin embargo, la empresa HIPARSA sólo considera la reubicación y construcción de un nuevo depósito para el caso que “acciones externas modifiquen el escenario de almacenamiento” (sic.)

Nuestra opinión, en virtud del principio precautorio, es otra: SE DEBE CONSTRUIR UN NUEVO DEPÓSITO TRANSITORIO DE LOS EQUIPOS Y MATERIAL CONTAMINADOS y no sólo esperar que los accidentes posibles se produzcan, ello sin perjuicio del Plan de Contingencia ante derrames, que la empresa propone.

Lo expuesto no deja margen a la duda; sentenciando entonces que existe un riesgo cierto para la salud pública del personal dependiente de la empresa como primera medida y en definitiva para toda la población en su conjunto; debiéndose tomar medidas urgentes que den respuesta a las justas inquietudes de la población.

El derrame ocurrido por actos de vandalismo, es consecuencia de la existencia de transformadores con PCB's, y desnudó una realidad desatendida, cual es, la que también existen transformadores contaminados en uso dentro del yacimiento. Esto lesiona disposiciones legales de distinto rango normativo, (Leyes nacionales 25.675; 25.670, 19.587 y Provinciales 3.266; 3.660 y 3.250 y artículos 41 y 59 de la Carta magna Provincial y artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional)

Sea la responsabilidad de la empresa HIPASAM; HiPaRSA; Minera Sierra Grande S.A., sus sucesores, o bien los organismos de la Administración comprometidos en el control de la disposición de los PCBs, TODOS ELLOS DEBIERON SER MAS CUIDADOSOS, en función de la SOLIDARIDAD AMBIENTAL .

Por un lado, la utilización de los transformadores por la empresa me impide considerarlo un “pasivo ambiental”, dado que los está usufructuando, y ello no puede sustraerlos de la obligación de retirarlos.

Por su parte, el Estado no es ajeno a las responsabilidades dada la falta de resultados en los caminos intentados. Creo que la Comisión de Seguimiento creada por el Decreto 888/06, para el control del cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato, también tendría que estar aquí dando explicaciones.

Corresponde traer a colación lo manifestado por el presidente de nuestro más Alto Tribunal provincial; Dr. Luis Lutz en el IV Congreso Internacional sobre Responsabilidad Civil desarrollado recientemente en S. C. de Bariloche; “El estado debe prevenir la contaminación del aire el agua y el suelo, manteniendo el equilibrio ecológico”; así el factor preventivo o precautorio se destaca como un principio ambiental fundante, circunstancia expresamente reconocida en fallos dictados en consecuencia y la legislación vigente.

Coincidimos en que debe cambiarse el paradigma hasta ahora vigente, mediante una decisión firme respecto de las prioridades impuestas constitucionalmente sobre la Salud y el Medio

Ambiente, pero ello debe estar atado a la racionalidad en la toma de decisiones, cuestión a la que no estoy ajena y que debe regir el ejercicio responsable de la tarea que me fue asignada. Sumado a lo expuesto y a los efectos de una evaluación cierta de los daños provocados, es mi deber insistir en la necesidad de realizar una estadística seria y bajo parámetros científicos claros, que permita tener un conocimiento acabado, entre otras cuestiones, sobre la incidencia en la salud de quienes han estado expuestos por un período prolongado a los PCBs, particularmente en los empleados de la minera y en la población de Sierra Grande.

Es a mi criterio un imperativo para los funcionarios públicos dar respuesta a la población frente a los interrogantes que el tema genera. Se impone, entonces, actuar eficientemente en protección de sus derechos y brindar información clara que permita dar tranquilidad a los ciudadanos, tanto como definir, en su caso, las responsabilidades por los actos y/o omisiones respecto de la situación que nos ocupa.

Por último quisiera puntualizar que desde esta Defensoría del Pueblo estamos evaluando la oportunidad y procedencia de accionar colectivamente en demanda de una protección de los derechos colectivos de los ciudadanos de Sierra Grande, ejerciendo la legitimación activa que nos otorga la legislación vigente, aguardando para ello el resultado y las conclusiones de la audiencia pública citada.

Resumiendo entonces lo expuesto; destaco:

- La uniformidad de criterios en referencia a la afectación a la salud provocada por la exposición crónica a la sustancia.
- La prioridad absoluta otorgada por legislación de variado rango -incluso constitucional- (art. 59 C. Prov.) que establece el derecho a la salud de los ciudadanos y a un medio ambiente sano, mediante un desarrollo sustentable.
- El vencimiento de los plazos legales para erradicación del PCBs sin haber aún alcanzado la erradicación total de transformadores contaminados.
- El incumplimiento de la normativa referida a la seguridad e higiene en el trabajo; disposición de residuos peligrosos, e incluso de uso y manipulación de PCB's.
- La importancia para la economía local de un funcionamiento serio y responsable de la unidad económica cuestionada, que no desatienda los derechos colectivos afectados.

POR LO EXPUESTO:

SOLICITO, SE PROCEDA AL RETIRO INMEDIATO DE LOS TRANSFORMADORES EXISTENTES EN LA EMPRESA MINERA SIERRA GRANDE SA E HIPARSA.

Asimismo EXHORTO que Estado a través de sus diferentes órganos den respuesta a los fundados temores de la población, insistiendo entonces en la necesidad de realizar un censo estadístico sanitario, serio y bajo parámetros científicos, que brinde información clara y veraz a la población.

Tras la exposición realizada en estos breves minutos que se me han otorgado, quiero transmitir al público presente que, luego de resuelta la cuestión por el órgano con competencia específica para ello, evaluaremos DESDE LA Defensoría del Pueblo los pasos a seguir, y en caso de que surjan dudas respecto a la razonabilidad o justeza de esa decisión administrativa, haremos uso de las facultades que nos han sido conferidas por la Constitución y la ley con el fin de que la misma sea revisada con miras a impedir, impidiendo en forma total cualquier daño que pudiera provocarse en la salud y en el ambiente. Gracias por vuestra atención.

PROPUESTA DE TRABAJO (Resol. 1234/06 LRN)

1.- INTRODUCCIÓN:

Breves consideraciones.

La institución del "Ombudsman" (etimológicamente: aquel que está capacitado para actuar por otros) o Defensor del Pueblo responde a un sentir muy profundo arraigado en nuestro sistema republicano de gobierno.

Ha sido ideado como un sistema de control del accionar de la administración pública, tendiente a recomendar algún mecanismo corrector adecuado para la resolución de casos puntuales, ante la afectación de algún derecho.

Su campo de acción se circunscribe a las relaciones entre los particulares y la administración. Se posiciona como un tercero que se mantiene independiente de los intereses en conflicto.

Su intervención puede ser oficiosa o a requerimiento de un particular/es afectado/s. Su función radica en instruir una causa, proponer o recomendar soluciones y rendir cuenta de ello públicamente.

Vale decir que la misión del defensor del Pueblo apunta más a defender y sostener las instituciones democráticas - herramientas indispensables para el sostén de los derechos de los ciudadanos -, más que a la confrontación de los quejosos con los responsables del accionar deficiente.

Organos de control.

La exposición acerca de los mecanismos de control del accionar del estado sería muy extensa. Baste decir que como órgano de control externo de la Administración Pública (de igual forma que el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas), el Defensor del Pueblo desarrolla su accionar abstraído de toda cuestión político partidaria, con absoluta objetividad e independencia de criterio.

La Administración Pública y los administrados.

Básicamente y por mandato constitucional y legal, es el encargado de la defensa de los derechos individuales y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial, supervisando además la eficacia en la prestación de los servicios públicos.

Importancia del instituto.

Los derechos no han sido ni son una concesión graciosa de los poderosos. Muy por el contrario, las libertades y los derechos han sido ganados por la lucha continua y tenáz de los pueblos.

Hemos escuchado y dicho muchas veces que: "*Donde hay una necesidad, hay un derecho*". A partir de ello, donde hay un reclamo habrá pues un derecho vulnerado.

Cuando el derecho vulnerado proviene de algún acto u omisión por parte de la administración pública, surge entonces la necesidad de buscar algún mecanismo idóneo tendiente al cese de dicha situación.

En este sentido, el accionar del Defensor del Pueblo se convierte en una herramienta válida y eficaz de nuestro sistema democrático, ya sea su intervención oficiosa o surja de algún reclamo.

Marco Legal.

La reforma constitucional de 1994 a nivel nacional evidenció entre sus propósitos la necesidad de desconcentrar el poder presidencial, fortalecer el Congreso de la Nación y los mecanismos de control, garantizar la independencia del Poder Judicial, promover la participación ciudadana y reconocer nuevos derechos y garantías.

En esta tesitura, el artículo 86 de la Constitución Nacional, en su primera parte, consigna:

"El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas..."

Por su parte, nuestra Constitución Provincial, reformada en 1988, establece en su artículo 167:

"Corresponde al Defensor del Pueblo la defensa de los derechos individuales y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial. Supervisa la eficacia en la prestación de los servicios públicos..."

Por último, y de manera consecuente con estos lineamientos constitucionales, la ley provincial N° 2756 regula la organización, funciones, competencia, procedimientos y situación institucional del Defensor del Pueblo en la provincia de Río Negro.

Los derechos de incidencia colectiva.

Corresponde destacar la gran importancia que asume la reforma que la Ley 3.635 (modificatoria de la Ley 2.756) en cuanto se otorga al Defensor del Pueblo la defensa en juicio de los derechos difusos o colectivos, esto es la defensa y protección, entre otros, del Medio Ambiente y la investigación de hechos que lesionen la libertad de expresión e información (Art. 9 incisos b, d y e, de la Ley 2756). Esto debe ser considerado de un gran avance con una respuesta acertada a los cambios y evoluciones del Estado y del Derecho Público.

El Defensor del Pueblo debe avocarse y contribuir a la defensa de este tipo de derechos que no se pueden localizar en un individuo en particular - ni siquiera a veces están representados por grupos formales - sino que están como su nombre lo indica esparcidos en toda la sociedad. Se trata del interés colectivo concebido como la suma de los intereses individuales.

2.- EL ROL DE DEFENSOR DEL PUEBLO Y DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ADJUNTO:

Colaborador crítico. Organo independiente.

Si bien el Defensor del Pueblo aparece como el receptor de las quejas o reclamos de los administrados, pudiendo inclusive promover actuaciones de oficio ante hechos, acciones u omisiones atribuibles a la administración pública, ello no significa que deba convertirse en un "opositor" del gobierno de turno, sino más bien en un colaborador crítico de su gestión.

Se convierte así en el custodio y representante de los derechos constitucionales de los particulares frente a la administración.

Por sobre todas las cosas es un órgano independiente, instituido en la órbita del Poder Legislativo, como no puede ser de otra manera porque allí está la voluntad popular.

Se es independiente de la política y del gobierno pero también de otros intereses o sectores insertos en la sociedad. Vale decir que su accionar no admite presiones ni condicionamientos de ningún tipo.

Precisamente, su relación con el Poder Legislativo se visualiza como un elemento fundamental que determina el alcance y efectividad del control que ejerce.

Diferencia con la actividad jurisdiccional.

El Defensor del Pueblo desarrolla una actividad muy diferente a la de los jueces. Los jueces tienen la facultad de impartir justicia a través del dictado de un pronunciamiento justo (sentencia), derivado de la aplicación irrestricta del Derecho. Normalmente, una de las partes gana el juicio y otra lo pierde. El proceso es largo y de un estricto rigorismo formal, además de oneroso y riesgoso en cuanto al pago de las costas.

La misión del Defensor del Pueblo se ubica bastante lejos de la función de los jueces, sin perjuicio de que sus intervenciones puedan resultar finalmente "justas" y componedoras.

Obviamente la idea de justicia está siempre presente, aunque ajustada al mandato constitucional del artículo 167 (C. Prov.), según el cual la actuación del Defensor del Pueblo se funda en los principios de informalismo, gratuidad, impulsión de oficio, sumariedad y accesibilidad. Esto quiere decir que cualquier persona que considere afectados sus derechos por hechos, actos u omisiones de la administración pública, podrán requerir que se instruya un procedimiento que es gratuito, abreviado y rápido, que no requiere de formalidades especiales, y que las actuaciones prosiguen a instancia de la propia Defensoría hasta su finalización.

La intervención del Defensor del Pueblo garantiza a los particulares una gestión eficiente frente a la administración pública, tendiente a obtener el cese del perjuicio y el reestablecimiento de los derechos afectados. Los resultados de la gestión son satisfactorios en la generalidad de los casos.

Perfil del Defensor del Pueblo. Información. Convicción. Seriedad. Responsabilidad. Capacidad de gestión.

El Defensor del Pueblo es una persona dotada de una inquebrantable convicción y perseverancia. Desde el momento de decidir acerca de la admisibilidad del reclamo o el mérito de una actuación oficiosa, hasta el seguimiento que hará de la decisión adoptada. Obviamente lo hará con prudencia y moderación, respetando las personas y las instituciones.

Es un agente de la realidad, conoce sus propias limitaciones y es conciente de que él sólo no puede transformar la sociedad. Actúa con empatía a efectos de comprender el accionar supuestamente deficiente de la administración, así como la actitud del reclamante

Todo ello hace que su accionar sea serio y responsable. También sabe que el éxito para la obtención de resultados positivos, depende una

gestión acertada y oportuna. Actúa con sabiduría, juzga con prudencia y resuelve con imparcialidad.

Con razón se dice que sus advertencias y recomendaciones constituyen la voz de la opinión pública, y su actividad adopta el carácter de persuasiva y preventiva, casi pedagógica. Y los beneficiarios de ella serán los propios administrados pero también el órgano administrativo a quien vaya dirigido.

Es una especie de ejercicio de la persuasión. Obviamente no puede haber persuasión sin diálogo, y no habrá diálogo sin participación. Y la participación es de todos.

El Defensor del Pueblo Adjunto.

La Ley 2756, en su artículo 42, instituye al Defensor Adjunto el carácter de auxiliar del Defensor del Pueblo, en el que éste puede delegar funciones.

El Defensor Adjunto sustituye al titular del organismo en caso de ausencia, inhabilidad temporal o vacancia, aunque entiendo que resulta saludable que el Adjunto ejerza un rol protagónico más activo, desarrollando en conjunto con el Defensor del Pueblo un verdadero trabajo de equipo, en función de la diversidad y complejidad de las cuestiones en las que deban intervenir.

Obviamente dependerá ello del esquema de trabajo propuesto y del perfil de la persona que deba desarrollar el cargo. De cualquier forma coincido con quienes propician una mayor jerarquización de la función del Defensor Adjunto.

Búsqueda de soluciones inmediatas y mediatas. Gestión de medios y de resultados.

La tarea del Defensor del Pueblo no se agota con la recepción de las quejas ciudadanas. Verdaderamente estas quejas son un reflejo del sentir popular y por ello hay que estudiarlas como síntomas, avanzar en un diagnóstico y trabajar sobre las enfermedades funcionales que afectan al Estado.

A veces su accionar estará dirigido a la resolución de un caso particular de manera rápida y expeditiva. Otras veces habrá de incursionar en cuestiones complejas de difícil resolución.

Así como el número, categoría y periodicidad de los reclamos funcionan en la práctica como indicadores de insatisfacción social, las investigaciones encaradas por el Defensor del Pueblo en procura de satisfacer los intereses afectados, tengan o no resultado positivo, constituyen una fuente de datos muy valiosa para detectar los problemas

objetivos del funcionamiento de la administración pública, o para prevenirlos.

El Defensor del Pueblo debe brindar soluciones en tiempo oportuno.

Aún cuando sus resoluciones no puedan ordenar a la administración pública la adopción de una determinada conducta (sino tan solo proponerla, sugerirla), no ha de contentarse con el cumplimiento formal de sus deberes de medio, sino que propende todo el tiempo al logro del resultado esperado.

Justamente en la búsqueda de estas soluciones, el Defensor del Pueblo debe colaborar en la construcción de políticas públicas de promoción y protección de los derechos y garantías consagrados en la Constitución, así como colaborar en todo accionar oficial tendiente al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Ello lo hace a través de recomendaciones o sugerencias útiles, o haciendo uso de la importantísima iniciativa parlamentaria que posee.

Iniciativa parlamentaria.

El accionar del Defensor del Pueblo no sólo constituye una valiosa fuente de información parlamentaria. En base a sus informes (anuales o especiales), los legisladores tendrán idea sobre qué está fallando en la administración pública y tendrán la oportunidad de proponer las modificaciones pertinentes.

Constituye también una importante fuente de información para el cambio legislativo, que el Propio Defensor del Pueblo puede utilizar para proponer modificaciones a las leyes.

En este punto cabe destacar que esta iniciativa parlamentaria, lamentablemente ha sido poco utilizada en anteriores gestiones.

La importancia de la Mediación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos.

En algunas situaciones el Defensor del Pueblo deberá asumir el rol de un tercero imparcial, tratando de lograr un acercamiento entre las partes en conflicto, facilitando su comunicación, procurando el abandono de posturas inflexibles, evaluando opciones, procurando alcanzar en definitiva una solución consensuada que resulte beneficiosa para todos.

Esto es una “negociación en base a intereses”. Estamos hablando de la mediación como método alternativo para la resolución de conflictos, y digo alternativo ya que escapa a las formas tradicionales basadas en una compulsa entre las partes, donde una de ellas gana y otra pierde.

La utilización de métodos alternativos como la mediación, la conciliación o el arbitraje, por citar los más importantes, requiere necesariamente de

conocimientos especiales, capacitación y entrenamiento adecuados, sobrada experiencia y el manejo de herramientas y técnicas avanzadas de comunicación.

No debemos olvidar que un proceso de mediación exitoso evita la judicialización del conflicto, o al menos una innecesaria burocratización.

Técnicas y herramientas de comunicación.

La capacidad de abrir puertas y construir puentes que permitan canalizar los reclamos de los particulares frente a los órganos del estado cuyo accionar deficiente les resulte atribuible, constituye sin duda un valioso aporte en procura de mayor transparencia y moralidad en el ejercicio del poder.

3.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS:

Objetivos generales.

Como objetivos generales del modelo de gestión que se propone, podemos mencionar:

- Garantizar el óptimo funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, dotándola de los recursos materiales y humanos necesarios, a fin de efectivizar un adecuado "control" sobre la actividad de la administración pública y la prestación de los servicios públicos.
- Llegar a la gente de manera más directa, visitando periódicamente las distintas localidades y parajes del territorio provincial y poniendo a disposición toda su estructura.
- Promover campañas de difusión acerca de las misiones y funciones de la Defensoría del Pueblo.
- Contribuir a una concientización popular sobre la defensa de los derechos individuales y colectivos.
- Aumentar la cobertura de protección y tutela jurídica de los ciudadanos frente al accionar de la administración pública.
- Promover un trabajo coordinado con todos los órganos del Estado Provincial, fortaleciendo sus vínculos, de manera de agilizar los procedimientos y acciones a seguir.
- Fomentar el espíritu democrático y la educación cívica de los habitantes rionegrinos, contribuyendo al mejoramiento de la calidad institucional.

- Contribuir a la consolidación y fortalecimiento del sistema republicano, a través de su inserción en la órbita del Poder Legislativo provincial.
- Promover la celebración de convenios de cooperación con otros organismos públicos.
- Propiciar todas aquellas modificaciones útiles a la legislación provincial, necesarias para optimizar el accionar de la defensoría del Pueblo.

Objetivos específicos.

Dentro de los objetivos específicos, y como corolario de los mencionados como objetivos generales, destaco los siguientes, sin que la enumeración resulte taxativa. A saber:

- Dotar a la Defensoría del Pueblo de tecnología de avanzada que posibilite mayor acceso a la información y sistemas de comunicación.
- Optimizar el principio de "accesibilidad" de manera que cualquier habitante rionegrino cuente con las mismas posibilidades que los habitantes de la ciudad de Viedma.
- Gestionar la emisión de espacios televisivos y radiales, la difusión de folletería y una revista de información relativa al accionar del Defensor del Pueblo, con llegada a todo el territorio provincial.
- Estimular la participación de la gente en las acciones de la vida pública, impulsando acciones a favor del derecho a la información de los habitantes rionegrinos.
- Suscribir convenios interinstitucionales (con el Estado Nacional y otras provincias) tendientes a obtener cooperación, capacitación y/o asistencia financiera, para el mejor cumplimiento de las misiones y funciones de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Río Negro.
- Generar ámbitos para el accionar de ONGs, particularmente dedicadas a la defensa de derechos humanos, defensa del consumidor, protección del medio ambiente, entre otras, que puedan realizar aportes que contribuyan al fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo.
- Garantizar procedimientos rápidos y eficaces.
- Brindar soluciones en tiempo oportuno.

- Sin perjuicio de las soluciones inmediatas propuestas en un caso concreto, gestionar ante las áreas de gobierno competentes para una contención más adecuada de la problemática planteada.
- Colaborar en la ejecución de políticas públicas de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes rionegrinos.
- Propender a una legislación más justa, haciendo uso de iniciativas parlamentarias.
- Adaptar el organigrama de manera que responda a los lineamientos del art. 43 de la ley 2756.

4.- ACCIONES PRIORITARIAS A DESARROLLAR:

Las acciones que a continuación se detallan tienden a la optimización y jerarquización del accionar del Defensor del Pueblo en la provincia de Río Negro, persiguiendo el mejoramiento de la calidad institucional y una defensa más efectiva de los derechos de los habitantes.

- 1) Acercar la Defensoría del Pueblo a la gente.-
- 2) Dotar a la Defensoría del Pueblo de los recursos materiales y humanos requeridos para el mejor cumplimiento de sus funciones.
- 3) Impulsar campañas publicitarias acerca de las misiones y funciones del Defensor del Pueblo (difusión de información exacta).
- 4) Fomentar la participación de los habitantes en los asuntos públicos.
- 5) Encauzar los reclamos y llevar los procedimientos con celeridad y eficacia, evitando demoras en su tramitación (accionar ágil, rápido, expeditivo).
- 6) Brindar soluciones en tiempo oportuno.
- 7) Incursionar en los problemas de fondo que requieren de una atención pormenorizada más allá de la solución inmediata.
- 8) Derivar a las áreas de gobierno competentes, aquellas cuestiones que requieran contención y una atención más pormenorizada de la problemática planteada, sin perjuicio de la resolución adoptada por la Defensoría del Pueblo.
- 9) Efectuar un seguimiento del accionar de la administración pública a partir de las recomendaciones efectuadas.
- 10) Colaborar en la ejecución de políticas públicas destinadas a la defensa de los derechos y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
- 11) Promover campañas de prevención de problemáticas sociales, coordinadas en lo posible entre los tres poderes del Estado Provincial.

- 12) Impulsar iniciativas parlamentarias que contribuyan a una mejor calidad institucional, previa investigación y diagnóstico de la temática a abordar.

5.- RESOLUCIÓN DE UNA PROBLEMÁTICA:

- Descripción del caso.

Si bien se trata de un caso hipotético, la problemática de fondo constituye un dato de la realidad.

Las actuaciones se inician a instancias del reclamo de un trabajador no registrado ("en negro"), supuesto socio de una cooperativa de trabajo, que solicita de su empleador condiciones de trabajo dignas, pago de salario según convenio colectivo, recibo de haberes, aportes patronales, previsionales, seguro de vida y de riesgo de trabajo. Denuncia un accionar deficiente o irregular por parte de organismos de la Administración Pública Provincial, particularmente de la Secretaría de Trabajo y de la Dirección Provincial de Cooperativas.

- Intervención del Defensor del Pueblo.

Admitido el reclamo, se corre traslado a dichos Organismos involucrados, a efectos de que informen si tuvieron conocimiento de la situación denunciada y si actuaron en consecuencia.

Llegan sendas respuestas a los requerimientos formulados, manifestando que oportunamente (con relación al caso planteado) se habrían instruido las actuaciones de rigor, agotándose las vías administrativas.

Como resultado de las investigaciones, y tal como surge de la documentación agregada al expediente, surge que efectivamente se sustanciaron en su oportunidad los procedimientos administrativos de rigor, contemplados en la normativa legal de aplicación al caso.

Concretamente la Secretaría de Trabajo realizó inspecciones en el establecimiento denunciado, comprobando el funcionamiento irregular de una cooperativa de trabajo. Declaró en consecuencia la Comisión de fraude laboral, infraccionando con multa en forma solidaria a la Cooperativa de Trabajo y a la Empresa a favor de la cual se prestaba el servicio.

Por su parte la Dirección de Cooperativas habría procedido a solicitar la cancelación de la matrícula ante las autoridades nacionales. El trámite administrativo de cancelación de la matrícula, a la fecha del reclamo se

encontraba pendiente de resolución, según respuesta hecha llegar por la autoridad de aplicación nacional en la materia (INAES).

Se realizaron distintas reuniones en la sede de la Defensoría con los funcionarios de las áreas competentes y demás operadores involucrados en la temática, tratando de abordar el tema en su integralidad en procura de prevenir situaciones como la denunciada por el trabajador, sin que haya resultado posible avanzar en una solución de fondo, aunque con el compromiso de seguir avanzando en la búsqueda de soluciones por parte de los organismos denunciados.

No se advierte en principio que dichos organismos hayan incumplido los mandatos legales, ni se puede atribuir accionar irregular de los funcionarios que tuvieron participación en las actuaciones administrativas.

Tampoco se vislumbra una solución respecto de los derechos vulnerados al trabajador, pudiendo atribuirse tal circunstancia a la existencia de un vacío legal, no encontrándose legislada la prevención de este tipo de situaciones.

Agotadas las gestiones y procedimientos de rigor por parte de la Defensoría del Pueblo, las actuaciones se encuentran en estado de resolución.

Cabe destacar que el trabajador continúa trabajando “en negro”, prestando sus servicios como socio cooperativo en el mismo establecimiento, para la misma cooperativa de trabajo (con los mismos directivos), aunque dicha Cooperativa ahora se encuentra habilitada bajo otra denominación y con todos sus papeles en regla.

- Resolución del caso.

Sin perjuicio de lo expuesto, resulta procedente y así se resuelve, 1.- Recomendar a los organismos involucrados (Secretaría de Trabajo y Dirección de Cooperativas) el desarrollo de un accionar conjunto y coordinado tendiente a prevenir situaciones de injusticia como la denunciada.

2.- Particularmente recomendar que se concrete un programa de fiscalización más efectivo y severo que contribuya a desalentar el accionar fraudulento de las pseudo cooperativas de trabajo.

3.- Recomendar asimismo la clausura de los establecimientos en los que se detecten situaciones flagrantes de fraude laboral y cooperativo.

4.- Por último, haciendo uso de su iniciativa parlamentaria, se dispone cursar nota al Presidente de la Legislatura de Río Negro, a efectos de

que se imprima trámite parlamentario de rigor al proyecto de ley confeccionado al efecto.

El proyecto de ley en cuestión apunta básicamente a una determinación más precisa de las misiones y funciones de la Dirección Provincial de Cooperativas), dotándola de amplias facultades, efectivizando sus tareas de control en materia de cooperativas de trabajo, a la vez que imponiendo el cumplimiento de determinados requisitos previo a la habilitación y otorgamiento de matrículas. Se establece además un sistema de información compartida entre la Dirección de Cooperativas y la Secretaría de Trabajo, apuntando a optimizar las tareas conjuntas de fiscalización y prevención.

Cabe destacar que la materia se encuentra regulada por un

CONVENIO celebrado entre el Instituto Nacional de Acción

Cooperativa (INAC) y el Gobierno de la Provincia de Río Negro

en el año 1976.

6.- RESULTADOS ESPERADOS:

Del modelo de gestión propuesto se visualizan los siguientes resultados: En primer lugar contribuir a una mejor calidad institucional, tanto en cuanto al óptimo funcionamiento de la propia Defensoría del Pueblo de la provincia de Río Negro, como con relación a los distintos organismos de la Administración Pública Provincial.

Por otra parte se espera, merced a las campañas de difusión referenciadas y al accionar ágil y eficiente de la estructura, poder concretar el anhelo del constituyente en cuanto al efectivo cumplimiento del rol del Defensor del Pueblo como órgano de control.

INFORME ANUAL PERIODO 2005-2006 CORRESPONDIENTE A LA GESTION ANTERIOR

De acuerdo al esquema propuesto, la segunda parte del presente informe comprende sintéticamente las acciones desarrolladas por la Defensoría del Pueblo durante el mandato de la Defensora del Pueblo saliente, Dña. Nilda Nervi de Belloso, supliendo de esta forma el deber incumplido de informar a la Honorable Legislatura de Río Negro de la gestión cumplida.

La exposición está hecha en base a la información suministrada por los asesores de las distintas áreas de trabajo, discriminada por temas o problemáticas específicas y con detalle de los expedientes tramitados.

*** SERVICIO PUBLICO de AGUA POTABLE Y DESAGUES CLOACALES:**

Sobre estas cuestiones, los principales reclamos se relacionan con:

- Inconvenientes para la conexión al servicio de agua potable en sus domicilios.
- Deficiencias en el servicio de agua potable.
- Problemas por derrame de aguas servidas.
- Cobro de cargo fijo en concepto de agua y cloacas, en lotes o viviendas, que no están conectados al servicio.
- Por pagos que reclama la Empresa, por deudas del ocupante anterior de la vivienda.
- Solicitudes de la tarifa social.
- Cobros de deudas por parte de Cooperativas de Agua.
- Cortes por deuda en servicios de riego.
- Cuestionamientos por cortes de servicio domiciliarios.
- Cobro a los PH, tarifa acumulada en un medidor
- Pretendida facturación de la Junta Vecinal Casa de Piedra en contra del criterio judicial sentado en autos "Defensoría del Pueblo C/ Junta Vecinal Casa de Piedra S/Amparo".

- Reclama por falta de agua y problemas edilicios en su vivienda, propiedad de la Empresa donde trabaja

Se trataron los siguientes expedientes: 7708/06, 7723/06, 7748/06, 7855/06, 7868/06, 7928/06, 7954/06, 7979/06, 7980/06, 8085/06, 8130/06, 8176/06, 8284/06, 8377/06, 8388/06, 8409/06, 8420/06, 8449/06, 8463/06, 8464/06, 8476/06, 8622/06, 8626/06, 8628/06, 8638/06, 8649/06, 8692/06, 8731/06, 8767/06, 8772/06, 8792/06, 9015/06, 9029/06, 9104/06, 9125/06, 9128/06, 9155/06, 9157/06, 9320/06, 9379/06, 9385/06, 9389/06.

Podemos destacar como principales pedidos de intervención los referidos a:

- Deficiente servicio de energía eléctrica.
- Excesiva facturación de electricidad.
- Daños en artefactos eléctricos por cortes de energía eléctrica.
- Cierre de oficinas de EdERSA en algunas localidades.
- Inconvenientes para el cambio de titularidad.
- Vecinos del Bº el Cóndor cuestionan por reiterados cortes de servicios.

En los expedientes que a continuación se detallan, se trataron los reclamos que efectuaron usuarios del servicio de electricidad:

7796/06, 7898/06, 7926/06, 8005/06, 8046/06, 8101/06, 8119/06, 8398/06, 8435/06, 8462/06, 8574/06, 8648/06, 8696/06, 8732/06, 8787/06, 8913/06, 8931/06, 8980/06, 8996/06, 9090/06, 9094/06, 9325/06, 9326/06, 9371/06, 9380/06

*** SALUD PUBLICA:**

Las principales temáticas son:

- Deficiente atención en Puestos Sanitarios.
- Solicitud cambio al Agrupamiento Administrativo.
- Solicitud para el ingreso a Planta Permanente.

- Solicitud para que se expidan los Títulos por cursos que han realizado, principalmente de Enfermería.
- Denuncia por falta de ética Profesional en Hospital Zatti.
- Solicitud para ocupar cargo vacante en Laboratorio Hospital Ing. Huergo.
- Reclamo por rescisión contrato laboral.
- Denuncia por presunta mala praxis.
- Solicitud cambio Repartición, trabaja como enfermera en Hospital.
- Personal del Hospital El Bolsón solicitan la incorporación de los tickets al sueldo.

En el curso del período abarcado por el presente informe, se han tramitado reclamos de ciudadanos y de personal que trabaja en distintos Hospitales de la Provincia en los expedientes: 7710/06, 7810/06, 7844/06, 7920/06, 7961/06, 8011/06, 8150/06, 8181/06, 8299/06, 8300/06, 8316/06, 8559/06, 8830/06, 8973/06, 9037/06, 9082/06, 9109/06, 9319, 9408/06

*** TRANSPORTE:**

En el curso del período abarcado por el presente informe, se han tramitado reclamos de ciudadanos en los expedientes Nº 7871/05, 7976/05, 8364/06, 8383/06, 8582/06, 9339/06 y los reclamos se vinculan a:

- Deficiente prestación del servicio de transporte de pasajeros
- Rotura de encomiendas
- Denuncia deficiente servicio del Tren Patagónico.

Los reclamos presentados, se derivan para la intervención del organismo competente, sea este el Municipio, la Comisión Nacional Reguladora del Transporte CNRT, o bien la Dirección Provincial de Transporte y Aeronáutica; tramitando en definitiva este último por ser el único de competencia exclusiva de la Institución.

En los casos que se dispone la derivación a organismo fuera de nuestra órbita de competencia (Municipio-CNRT), se pone también en conocimiento de la empresa y del reclamante a los efectos de su

seguimiento; de ser un tema de relevancia se consulta el estado del mismo periódicamente.

*** MEDIO AMBIENTE:**

En el curso del período abarcado por el presente informe, se han tramitado reclamos de ciudadanos en los Expedientes N°s 6806/2005, 8562/06, 8578/06, 8606/06, 9189/06 los cuales se vinculan a las siguientes temáticas:

- Seguimiento de la nueva traza de la línea de alta tensión a construirse en El Bolsón
- Traslado de la Planta de tratamiento de yeso de estación guerrico.
- Ciudadanos varios cuestionan la instalación de telefonía celular en radio urbano.
- Inquietud por instalación de antenas celulares en Viedma.

*** VARIOS:**

En el curso del período abarcado por el presente informe, se han tramitado reclamos de ciudadanos en los Expedientes N° 8074/06, 8170/06, 8193/06, 8248/06, 8298/06, 8896/06, 9245/06, 9251/06, 9299/06, 9384/06

Los mismos se vincularon a:

- Cuestiona rendición de viáticos no requerida con anterioridad.
- Choferes de la Administración Pública solicitan modificación Ley 1844.
- Solicitud de incorporación como empleado del IPPV, cobra Plan Jefes.
- Solicitud información sobre un lote al Registro de la Propiedad Inmueble.
- Solicitud de asesoramiento por inconvenientes con adquisición de un inmueble.
- Solicitud para tener vista de actuaciones como oferente en una licitación.

- Solicitud de asesoramiento por deuda contraída al adquirir una camioneta.
- Denuncia secuestro indebido de vehículo de su propiedad por parte de la policía caminera.

*** INTERVENCIONES DE OFICIO:**

En el curso del período abarcado por el presente informe, se han tramitado reclamos de ciudadanos en los Expedientes Nº 8147/06, 8150/06, 8322/06; los mismos se vincularon a:

- Sobre transporte de residuos peligrosos (material de la ex Indupa)
- Sobre falta de camas en el Hospital de Cipolletti.
- Sobre la pretendida tala de cinco ha. de cipreses para la instalación de una cantera en El Bolsón.

*** SISTEMA PREVISIONAL:**

Entendemos como Sistema Previsional, al conjunto de instituciones y normativas que tienen por objeto brindar coberturas ante contingencias que alteran o disminuyen la capacidad laborativa de los ciudadanos. La previsión social así comprendida, incluye al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) de la ley 24.241, con sus dos subsistemas: el de Reparto (ANSeS) y el de Capitalización (AFJP).

Además, al ser nuestra provincia uno de los Estados Provinciales que transfirió la Caja de Previsión Social al Estado Nacional, interviene en el control de las cláusulas del convenio de traspaso, un organismo específico: la Unidad de Control Previsional (UCP).

El motivo constante de reclamos ante esta Defensoría del Pueblo, se debe a las demoras en los trámites de beneficios previsionales, pago de bonificaciones por asignaciones familiares, zona austral, y reajustes en el haber por falta de aplicación de índices de movilidad o errores en el cálculo. Esta realidad ya ha sido expuesta en anteriores informes elevados a la Legislatura.

En primer lugar se informa que se tramitaron 25 expedientes cuya cuestión principal se refería a temáticas de asesoramiento

laboral y de salud, vinculados en menor grado a asuntos previsionales. De ellos, 13 se encuentran solucionados.

Se trata de las actuaciones N°: 7842/05; 7851/05; 7854/05; 7857/05; 7992/05; 8045/06; 8051/06; 8079/06; 8091/06; 8154/06; 8200/06; 8292/06; 8328/06; 8375/06; 8386/06; 8395/06; 8451/06; 8517/06; 8572/06; 8577/06; 8981/06; 9004/06; 9058/06; 9253/06; 9343/06.

Con relación al organismo previsional nacional (ANSeS) y a las administradoras de fondos previsionales (AFJP) apelamos a la solicitud de informes en carácter de colaboración para obtener respuestas sobre las quejas en esta materia, dado que las instituciones involucradas se encuentran fuera de la competencia de esta Defensoría del Pueblo. Generalmente se reciben contestaciones de orden formal sin proporcionar acabada respuesta a los reclamos presentados por los ciudadanos; por ello es frecuente que deban reiterarse las solicitudes de información. A ello debe sumarse que el procedimiento previsional es complejo desde los aspectos temporal y procedimental, en atención al control del haber de cálculo, y cómputo de los años de servicios con aportes requeridos.

Se iniciaron en el período las siguientes actuaciones relacionadas a reclamos de índole provisional: 7707/05; 7728/05; 7731/05, 7763/05, 7773/05, 7775/05; 7783/05; 7803/05; 7811/05; 7821/05; 7825/05; 7830/05; 7836/05; 7838/05; 7850/05; 7862/05; 7878/05; 7912/05; 7918/05; 7943/05; 7950/05; 7967/05; 8048/06; 8057/06; 8068/06; 8069/06; 8071/06; 8097/06; 8114/06; 8123/06; 8153/06; 8158/06; 8161/06; 8175/06; 8188/06; 8195/06; 8198/06; 8223/06; 8228/06; 8235/06; 8240/06; 8273/06; 8276/06; 8294/06; 8296/06; 8307/06; 8353/06; 8378/06; 8400/06; 8413/06; 8416/06; 8445/06; 8455/06; 8467/06; 8469/06; 8470/06; 8482/06; 8484/06; 8488/06; 8492/06; 8498/06; 8504/06; 8521/06; 8523/06; 8525/06; 8526/06; 8528/06; 8531/06; 8537/06; 8541/06; 8542/06; 8544/06; 8598/06; 8611/06; 8618/06; 8635/06; 8652/06; 8653/06; 8656/06; 8664/06; 8667/06; 8677/06; 8694/06; 8697/06; 8699/06; 8717/06; 8733/06; 8735/06; 8736/06; 8738/06; 8749/06; 8755/06; 8803/06; 8821/06; 8822/06; 8827/06; 8831/06; 8837/06; 8840/06; 8861/06; 8865/06; 8867/06; 8879/06; 8883/06; 8886/06; 8903/06; 8923/06; 8938/06; 8942/06; 8946/06; 8993/06; 8994/06; 9013/06; 9014/06; 9019/06; 9020/06; 9025/06; 9026/06; 9028/06; 9063/06; 9066/06; 9092/06; 9095/06; 9098/06; 9130/06; 9131/06; 9149/06; 9150/06; 9162/06; 9169/06; 9173/06; 9177/06; 9196/06; 9207/06; 9219/06; 9222/06; 9230/06; 9233/06; 9243/06; 9249/06; 9260/06; 9270/06; 9274/06;

9286/06; 9300/06; 9304/06; 9332/06; 9333/06; 9344/06; 9366/06; 9367/06; 9372/06; 9388/06; 9393/06; 9416/06; 9428/06; 9431/06; 9438/06; 9442/06; 9445/06; 9452/06; 9458/06; 9473/06; 9474/06; 9477/06; 9485/06; 9497/06; 9504/06; 9513/06; 9518/06; 9533/06; 9536/06; 9543/06; 9544/06; 9547/06; 9549/06; 9550/06; 9561/06; 9564/06; 9572/06; 9574/06; 9592/06; 9603/06; 9605/06; 9606/06; 9622/06; 9625/06.

Suman un total de 174 expedientes, de los cuales 64 se encuentran solucionados, y un porcentaje importante se encuentra próximo a concluirse por haberse asesorado a los ciudadanos sobre los medios legales para intervenir en sus propios trámites o por solución de los mismos.

Dentro de algunos de los expedientes citados, se presentaron varios reclamos referidos a las demoras en otorgarse los turnos a través del 0800 de ANSeS para iniciar trámites de jubilaciones o pensiones. Las actuaciones fueron resueltas apelando a la colaboración del Área de requerimientos del Defensor del Pueblo de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

*** "ANTICIPOS" PREVISIONALES:**

Por medio de la Resolución N° 1136/06 se efectuaron una serie de recomendaciones a la Unidad de Control Previsional y exhortación a la ANSeS para resolver definitivamente los beneficios previsionales de los ciudadanos rionegrinos que permanecen en carácter de "provisorios".

En el mismo resolutorio se recomendó:

- la no aplicación de prescripción en contra del beneficiario en el supuesto de sumas pagadas en menos al beneficiario, puesto que no debe imputársele la demora de la administración y consecuentemente trasladar la responsabilidad al beneficiario, que no conocía cual era su crédito (Conf. argumento fallo "Calvo");
- y la no repetición o recupero por parte de la ANSeS de las sumas pagadas de más al beneficiario, puesto que son sumas consumidas de buena fe y con carácter alimentario. (Conf. argumento fallo "Roselló")

*** PENSIONES GRACIABLES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA:**

A raíz del reclamo deducido por un ciudadano de San Carlos de Bariloche, que reclamaba el pago de su haber de pensión graciable vitalicia de bombero desde la fecha de solicitud del beneficio, y no desde la recepción de la misma en el organismo involucrado, se dictó la Resolución N° 1160/06.

En el citado resolutorio se analizó el beneficio instituido por la ley 168, y se recomendó al Ministerio de Gobierno provincial a proceder al pago de lo reclamado por el ciudadano y a establecer como criterio general para fijar la fecha de inicio del derecho de pensión, la de la solicitud de la misma ante la Asociación de Bomberos o la de adquisición del derecho, la que sea posterior.

El Ministerio de Gobierno contestó la recomendación formulada, acogiendo la misma en sus dos aspectos, el individual y el colectivo.

*** DEMANDAS ALIMENTARIAS:**

Se recepcionan reclamos porque no se llega a cubrir las necesidades alimentarias del grupo familiar con la asistencia brindada, discontinuidad en la entrega. Necesidad de asistencia alimentaria/ dietas especiales por prescripción médica que por su condición de indigencia no tiene posibilidades de acceder.

Beneficiaria de programa alimentario provincial nunca recibió la ayuda que se registraba en un listado presentado por una ONG.

Los expedientes tramitados fueron los N° 8125/06, 8254/06, 8263/06, 8746/06, 8933/06, 9188/06 y 9515/06.

Se trabajó con el Ministerio de la Familia concretamente con la Subsecretaría de Políticas Nutricionales, Dirección de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud y las Áreas Sociales de los Municipios.

*** SOLICITUDES DE ASISTENCIA ECONÓMICA:**

Se presentan demandas vinculadas a necesidad de asistencia económica (subsidios) derivadas por falta de empleo, problemas con programas de empleo provinciales y nacionales. Recuperos de beneficios. Cambios en la contraprestación. Búsqueda de trabajo o del primer empleo para los más jóvenes, necesidad de intermediación laboral.

Casos de discapacitados, adultos mayores y/o familiares a su cargo, en relación a demandas insatisfechas en cuestiones sociales (alimentarias, servicios luz, gas, agua potable, ayuda económica, empleo etc.) Programa Familias por la inclusión social (nacional)

Tratamiento:

Dada la descentralización operativa de los programas sociales provinciales en los municipios y ONG, organismos que se encuentran fuera de la competencia de la Defensoría del Pueblo, el tratamiento de las actuaciones es el siguiente:

- Se orienta y brinda información detallada de organismos, programas, referentes con quien comunicarse para resolver su situación , asimismo se pone en conocimiento de las autoridades responsables de dar una respuesta a la petición del ciudadano.
- En los casos que supone situaciones muy críticas se interviene en forma telefónica con el organismo responsable de dar una respuesta. Reclamos presentados por ciudadanos en situación de gran necesidad social que requieren de algún tipo de gestión especial para acceder a programas que brinda el Estado y/u ONGs para subsanar en parte esa dificultad.

Herramientas:

Referentes/contactos de organismos con quienes se trabaja expeditivamente.

Listado de ONG habilitadas para trabajar con programas sociales nacionales y provinciales, listado de Oficinas de Empleo, Normativa de programas provinciales y nacionales que brindan asistencia financiera, social y capacitación a rionegrinos que se encuentran desocupados o subocupados de asistencia en la emergencia o de promoción social para la puesta en marcha de emprendimientos socio-productivos o de capacitación para mejorar su empleabilidad.

Información sobre Desarrollo Local –Economía Social.

*** ASISTENCIA SOCIAL Y ECONÓMICA:**

En reclamos vinculados a solicitud de asistencia social y económica se intervino asesorando a los ciudadanos y derivando las presentaciones al Área Social Municipal respectiva.

Las presentaciones mas numerosas son aquellas en que los ciudadanos manifiestan situaciones de vulnerabilidad y solicitan protección social integral, otros solicitan ayuda para mejorar la vivienda, para cubrir las necesidades mas básicas, ciudadanos que no tienen ningún ingreso y que por problemas de salud no pueden trabajar o simplemente conocer el estado del trámite. También se

decepcionaron presentaciones en nombre de terceros Se procedió al traslado de los reclamos al Ministerio de la Familia en aquellos casos vinculados con problemas de salud con derivaciones médicas.

Los Expedientes fueron los N°s 7722/05, 7794/05, 7779/05, 7806/05, 7837/05, 7860/05, 7876/05, 7913/05, 8033/06, 8117/06, 8205/06, 8268/06, 8303/06, 8362/06, 8575/06, 8666/06, 8669/06, 8665/06, 8716/06, 8851/06, 8857/06, 8899/06, 8898/06, 8959/06, 9197/06, 9209/06 y 9306/06.

*** INCONVENIENTES CON PROGRAMAS DE EMPLEO:**

Los reclamos se vinculan a la falta de pago de ayudas económicas, denuncia de supuestos beneficiarios cuyos nombres figuraron en una publicación periodística, bajas del beneficio, solicitud del recupero, beneficiarios de programas de empleo que habiendo trabajado 6 años o mas en tareas propias del estado municipal solicitan incorporación a la planta de personal de la institución.

Los expedientes tramitados fueron los N°s 7727/05, 7901/05, 8012/05, 8226/06, 8591/06, 8596/06, 8672/06, 8680/06, 8685/06, 8686/06, 8701/06, 8711/06, 8720/06, 8728/06, 8753/06, 8876/06, 8897/06, 9079/06, 9084/06 y 9323/06.

*** INCONVENIENTES CON EL PLAN JEFES/AS:**

Solicitud del recupero del beneficio, consultas sobre el motivo de su baja, consultas sobre continuidad de cobro de la ayuda económica en caso de pase al programa Familias, cambios en la contraprestación

Los Expedientes tramitados son los N°s 7774/05, 8138/06, 8152/06, 8265/06, 8391/06, 8461/06, 8784/06, 8955/06 y 9301/06.

*** BUSQUEDA LABORAL:**

Respecto al tema de la búsqueda de un trabajo puede destacarse la preponderancia numérica de las solicitudes o presentaciones promovidos por personas que buscan su primer empleo o un trabajo que mejore sus ingresos, otros solicitan orientación o algún tipo de asistencia económica mediante el ingreso a programas que brinden ayudas económicas o que no tienen ingresos suficientes para cubrir

sus necesidades mas básicas y no están incluidos en programas de empleo.

En esta temática se iniciaron las siguientes actuaciones: 8155/06, 8234/06, 8253/06, 8262/06, 8434/06, 8428/06, 8483/06, 8507/06, 8540/06, 8548/06, 8570/06, 8553/06, 8569/06, 8666/06, 8723/06, 8724/06, 8743/06, 8825/06, 8854/06, 8857/06, 8869/06, 8945/06, 8966/06, 9005/06, 9024/06, 9031/06, 9032/06, 9039/06, 9197/06, 9205/06, 9226.06, 9261/06 y 9263/06.

*** PROGRAMA FAMILIAS u otro PLAN SOCIAL:**

Su acceso asegura un ingreso económico mensual

Los reclamos los iniciaban ciudadanos/as desocupados o subocupados con hijos menores a su cargo que habiéndose inscripto en el año 2003 en el Programa Nacional Familias por la inclusión social no resultaron beneficiarios y otros que pertenecen al grupo de ciudadanos que al momento de inscripción no tenían hijos o contaban con un trabajo que le permitía cubrir sus necesidades personales y familiares.

Los expedientes tramitados son los N°s: 7729/05, 7757/05, 7785/05, 7807/05, 7805/05, 7802/05, 7804/05, 7813/05, 7861/05, 7911/05, 7914/05, 7923/05, 8003/05, 8144/06, 8305/06, 8405/06, 8690/06, 8856/06, 9268/06 y 9478/06.

*** SERVICIOS DE GAS Y LUZ E IMPUESTOS:**

Ciudadanos indigentes reclaman acceso a los Servicios, prórroga en el pago, eximisión de impuestos municipales y provinciales.

Los expediente tramitados son: 7998/05, 8608/06, 9365/06 y 9401/06.

*** MIGRACIONES:**

En reclamos vinculados a trámites migratorios se intervino asesorando o derivando las presentaciones a la Dirección de Migraciones, Consulados, y oficinas de pastoral migratoria del Obispado de Viedma.

A saber, los Expedientes fueron los N°s: 7699/05, 7713/05, 7740/05, 7958/05, 8020/05, 9164/06, 9328/06.

*** ASISTENCIA A PRESOS:**

Las intervenciones se relacionaron con solicitudes de internos de ayudas económicas para la familia, pasajes para acercamiento familiar, materiales para realizar trabajos de artesanías y materiales para terminar la vivienda familiar. En todos los casos se trasladaron los pedidos al Instituto de Asistencia a presos y Liberados con respuestas satisfactorias.

Los expedientes tramitados fueron los N° 7751/05, 7798/05, 8107/06, 8072/06.

*** DISCRIMINACIÓN:**

Se recepcionaron las siguientes denuncias:

- Por discapacidad en la escuela, en el hospital, en lugares de trabajo, en los colectivos y en un correo por la falta de accesos para personas con discapacidad.
- Por ser empleadores en la Subsecretaria de Trabajo
- Por obesidad en las ayudas alimentarias
- Por ser mujeres en el agrupaciones gremiales de productores
- Por color de piel en un local bailable

En cada uno de los casos se han corrido los traslados pertinentes a los organismos. Las respuestas han sido suficientes. Cabe destacar el pedido, en muchos casos de intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el Racismo (INADI).

Los Expedientes tramitados fueron los N°s: 7828/05, 7881/05, 8018/05, 8229/06, 8564/06, 8800/06, 8808/06, 9101/06, 9427/06.

*** DISCAPACIDAD: ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICOS/ PASES LIBRES/ CERTIFICACIONES:**

Los expedientes vinculados a los derechos de las personas con discapacidad se relacionan con solicitudes de regulación de la actividad de los acompañantes terapéuticos, solicitudes de certificaciones de discapacidad, inconvenientes con centro de rehabilitación e instituciones dedicadas a las personas con discapacidad, solicitud de bastón para personas no videntes, problemas con la integración la sistema educativo, solicitudes de especialistas en los hospitales, asesoramiento para el acceso a la

compra de automóviles y reducción de impuesto al automotor e inmobiliario, solicitudes de personal en escuelas para la movilidad y cuidado de niños integrados y solicitudes de trabajo.

Expedientes N° 7848/05, 7846/05, 7934/05, 7989/05, 8042/06, 8089/06, 8113/06, 8169/06, 8244/06, 8310/06, 8515/06, 8516/06, 8584/06, 8587/06, 8592/06, 8594/06, 8645/06, 8708/06, 8709/06, 8747/06, 8870/06, 8953/06, 8998/06, 9016/06, 9023/06, 9093/06, 9100/06, 9144/06, 9152/06, 9316/06, 9341/06, 9623/06.

*** VIOLENCIA, ACOSO Y DISCRIMINACIÓN LABORAL:**

Las actuaciones fueron iniciadas a partir de reclamos por acoso sexual, maltrato laboral, discriminación o situaciones problemáticas en el ámbito laboral.

Los organismos a los que se dio intervención fueron el Instituto Provincial del Seguro de Salud, Registro Civil, Dirección Nacional de Migraciones, Crown Casino, Subsecretaría de Trabajo, Hospital de Viedma, Consejo Provincial de Educación, Casa de Río Negro en ciudad de Buenos Aires, Instituto de Formación Docente Continua en Educación Física. Muchos ya han sido solucionados y otros aún se encuentran en trámite a la espera de respuesta de los organismos.

Cabe mencionar especialmente la Resolución N° 257/06 en la que se insta a las partes a resolver el conflicto y se comunica a la Legislatura Provincial la necesidad de tratamiento del proyecto de ley N° 01/06 sobre violencia laboral.

Los Expedientes tramitados son los N°s 7859/05, 8143/06, 8249/06, 8333/06, 8524/06, 8580/06, 8590/06, 8662/06, 8693/06, 8729/06, 8794/06, 8927/06, 9156/06, 9314/06, 9395/06, 9411/06, 9454/06.

*** DE OFICIO:**

Se iniciaron de oficio los expedientes N° 7881/05, 8280/06, 8324/06, 8382/06, 8706/06, 8707/06, 8811/06, 9116/06, 9122/06, 9335/06, 9387/06, 9494/06.

Referidos a diversas cuestiones se destacan intervenciones por discriminación a personas con discapacidad, solicitudes de información por becas, intervención por cierre de la escuela de folklore, solicitud a distintos organismos para que conformes Consejo

provincial de las personas con Discapacidad previsto en la Ley nº 2.055, provisión de cajeros automáticos en casinos tramite, situación del transporte y la discapacidad (desarrollado en el capítulo de discapacidad), y reclamos varios en Rincón de las Perlas.

*** AREA MUJER:**

En el Expediente Nº 7895/05, se trabajó en base a sobre creación del registro de deudores alimentarios. La Defensora del Pueblo recientemente elevó un mandamus a la Justicia para lograr la reglamentación de la Ley Nº 3.475 interpretando esta tardanza como violatoria de los derechos alimentarios de los hijos.-

Además del tratamiento de expedientes propios del área, se realizó un aporte al tratamiento legislativo del proyecto de creación de las Comisarías de la Mujer.

Además, se participó del Curso Taller sobre Derechos Humanos de las Mujeres dictada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la facultad de Derecho de La Plata.

Se asistió al curso taller sobre "Estrategias de Comunicación para la Resolución de Conflictos en las Organizaciones", enmarcado en la oferta de capacitación de la Legislatura Provincial.

Finalmente, en el marco del Seminario de la Federación Iberoamericana de Ombusman, se participó de la reunión de la Red de Mujeres en las que se trató el tema de Trata de Blancas.

*** VIOLENCIA FAMILIAR:**

La problemática multicausal de la violencia familiar, requiere de asesoramiento adecuado a los ciudadanos que así lo soliciten. La víctima de violencia familiar tal vez sea la única vez que se anime a confiar su padecimiento

Desde este organismo se trabaja en red con organismos que trabajan la problemática.

Asimismo se participó de la Jornada por la No Violencia contra la Mujer, organizada por diferentes organismos y organizaciones de Viedma, en la que se expuso el marco legal vigente y la evolución histórica del tratamiento legal dado a la problemática. Los Exptes. en cuestión son los Nº 8133/06, 8385/06, 8681706, 8804/06, 8848/06 y 9110/06.

*** JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY:**

Se dio tratamiento a quejas que involucran a jóvenes en conflicto con la ley, las que fueron derivadas a las autoridades correspondientes del Ministerio de Familia solicitando su intervención para propiciar la inclusión de los jóvenes en Programas que permitan su contención. Se tramitaron los Exptes. N° 7930/05, 8414/06 y 8819/06.

*** ADULTOS MAYORES:**

Se recepcionó la presentación de una vecina que denunciaba el estado de vulnerabilidad en que se encontraba un anciano de su vecindad. Ante ello se corrió traslado de la presentación a la Dirección General de la Tercera Edad del Ministerio de Familia, la que en forma coordinada con Hospital local y con organización que asiste a Adultos Mayores, brindaron contención al ciudadano.

En otra de las situaciones traídas a conocimiento de esta Defensoría se solicitó del Programa Federal, Programa que tenía a su cargo el pago de la internación del anciano en un geriátrico, su informe acerca del retraso del pago de las cuotas al mismo como así también auditorías que se realizaban en los Hogares de ancianos a su cargo.

Es de destacar la necesidad de mayores controles por parte del Ministerio de Salud, organismo que tiene a su cargo el contralor de los geriátricos, para propiciar una mejor asistencia a nuestros ancianos.(Expedientes N° 8674/06 y 9167/06).

*** TEMAS DE FAMILIA: CUOTA ALIMENTARIA, TENENCIA, REGIMEN DE VISITAS, FILIACIÓN, CURATELA:**

Se reciben diariamente consultas en estas materias, las que requieren información en relación a situaciones familiares específicas como incumplimiento de cuotas alimentarias por parte de progenitores alimentantes, inicio de trámites de Tenencias, dificultades para mantener contacto con hijos menores, etc. Así, se asesora a los ciudadanos para que se dirijan a defensorías generales u otros organismo específicos según la situaciones traídas a conocimiento.

Asimismo se brindó asesoramiento en mediación familiar, como método alternativo de resolución de conflictos, herramienta de instancia obligatoria pre judicial.

Por otra parte, también se trabajó en forma coordinada con las Oficinas de Atención al Ciudadano dependientes del Poder Judicial, para propiciar una mejor acompañamiento de los ciudadanos en trámites a realizar en ese organismo como así también para recepcionar quejas que involucran a personal de ese Poder.

En materia de adopción se derivó la solicitud de varias familias que manifestaron inconvenientes con el Registro de Adoptantes de su Circunscripción al Superior Tribunal de Justicia. Es de mencionar que el Poder Judicial tiene a su cargo el funcionamiento de dicho Registro.

Por otra parte, se recepcionaron numerosos reclamos de ciudadanos que expresaban dificultades en la percepción de la cuota alimentaria no obstante estar efectivamente realizado el descuento en los haberes del progenitor obligado al pago. Así se solicitó en carácter de colaboración al Banco Patagonia Sudameris, ente financiero interviniente y a ANSeS que remitieran sus consideraciones. Ambos organismos respondieron que los inconvenientes se originaron a partir de cambio de códigos en el sistema informático. Al cierre de este informe dichas dificultades se habrían solucionado.

Expedientes sobre Cuota Alimentaria: 7715/05, 7891.05, 8148/06, 8173/06, 8231/06, 8283/06, 8380/06, 8568/06, 8571/06, 8668/06, 8810/06, 8847/06, 9080/06, 9184/06, 9206/06 y 9223/06.

Expedientes sobre Tenencia: 8429/06 y 8480/06.

Expediente sobre Filiación: 8393/06.

Expediente sobre Curatela: 8207/06.

Expedientes sobre otras situaciones familiares: 7762/05, 7833/05, 8029/06, 8277/06, 8289/06, 8313/06, 8327/06, 8329/06, 8412/06, 8529/96, 8789/06, 8796/06, 8813/06, 8911/06, 9168/06, 9330/06 y 8494/06.

Expedientes sobre Adopción: 7899/05 y 7921.05.

Expedientes sobre Oficina de Atención Al Ciudadano: 9006/06, 868706, 8499/06, 8342/06 y 8224/06.

*** ASIGNACIONES FAMILIARES:**

En esta temática se recepcionaron presentaciones que manifestaban inconvenientes en la percepción del beneficio por

parte de ANSeS. Así se derivaron a ese organismo las quejas propiciando la superación de los inconvenientes.

Por otra parte, en lo atinente al régimen provincial y ante la presentación que efectuaran varios ciudadanos que solicitaron la asimilación en los topes del Régimen de Asignaciones Familiares de Nación.

Los Expediente tramitados fueron los N°s: 7833/05, 7849/05, 7908/05, 8049/06, 8049/06, 8384/06, 8502/06, 8687/06, 8740/06, 8741/06, 8902/06, 9262/06 y 9331/06.

*** CONFLICTO ENTRE VECINOS:**

Se recibieron quejas de ciudadanos en lo atinente a relaciones de vecindad conflictivas. Así se asesoró a lo mismos en los beneficios de la mediación comunitaria para propiciar la superación de estas situaciones y favorecer relaciones basadas en la tolerancia mutua que tiendan a la pacificación. Se derivaron las presentaciones a la Dirección General de Participación Ciudadana, organismo a cargo de los centros de medición comunitaria en la provincia. Exptes. 8246706, 8355/06 y 8967/06.

*** SITUACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD:**

Se recibieron presentaciones de personas privadas de libertad y de familiares de los mismos, que solicitaron la intervención de este organismo para propiciar traslados a unidades penitenciarias más cercanas con su núcleo familiar. De las mismas se corrió traslado a la Procuración Penitenciaria Provincial.

Otras presentaciones requirieron la derivación de las presentaciones a los Defensores Generales de los ciudadanos o a los magistrados que entienden en los expedientes judiciales en trámite.

Es de mencionar una situación de denuncia de maltrato institucional de un ciudadano rionegrino alojado en instituto penal de Neuquén, la que se puso en conocimiento de la Procuraduría Penitenciaria Federal. Actualmente el ciudadano fue trasladado a Instituto de Rawson.

Los Expedientes son los N°s: 7717/05, 7883/05, 8092/06, 8210/06, 8221/06, 8290/06, 8331/06, 8356/06, 8418/06, 8527/06, 8543/06, 8567/06, 8621/06, 8625/06, 8835/06, 8849/06, 8916/06, 8962/06, 8982/06, 8990/06, 9059/06, 9071/06, 9163/06, 9185/06, 9190/06,

9200/06, 9238/06, 9298/06, 9313/06, 9329/06, 9352/06, 9375/06, 9377/06 y 9402/06.

*** PAMI:**

En las intervenciones realizadas ante el PAMI existe un buen nivel de respuestas a las presentaciones que efectuara esta Defensoría del Pueblo, en el ejercicio que se informa, especialmente de la Unidad de Gestión Local con asiento en General Roca y de la Unidad de Enlace de PAMI con las Defensorías del Pueblo,

Los reclamos se basan en solicitudes de agilización del pago de reintegros; agilización de turnos para cirugía de cataratas; provisión de audífonos, lo enunciado hasta aquí, con demora de dos, tres y hasta cuatro años; medicamentos y material descartable, especialmente para pacientes oncológicos; prótesis, entre otros.

Los Expedientes tramitados fueron los N°s: 7718/05, 7724/05, 7726/05, 7743/05, 7746/05, 7754/05, 7815/05, 7816/05, 7817/05, 7830/05, 7886/05, 7906/05, 7935/05, 8002/05, 8070/06, 8098/06, 8166/06, 8266/06, 8288/06, 8339/06, 8340/06, 8442/06, 8500/06, 8547/06, 8586/06, 8615/06, 8683/06, 8691/06, 8777/06, 8785/06, 8805/06, 8838/06, 8892/06, 8944/06, 8956/06, 8985/06, 9044/06, 9054/06, 9137/06, 9154/06, 9225/06, 9308/06, 9321/06, 9351/06, 9353/06 y 9527/06.

Los reclamos recibidos por cuestiones referidas a la Dirección del Registro Civil, estuvieron dados básicamente en: Agilización de trámites para la entrega de DNI; eximición de pago de aranceles por certificados de nacimiento y obtención de DNI, ya sea en original o duplicado. Es de resaltar la demora que existe en la entrega de la documentación.

Expedientes tramitados: 7982/05, 8278/06, 8336/06, 8459/06, 8602/06, 8700/06, 8974/06, 8984/06, 9072/06, 9221/06, 9239/06, 9272/06, 9396/06, 9404/06, 9407/06, 9476/06, 9567/06, 9160/06, 9593/06.

*** PENSIONES:**

Las presentaciones recibidas dieron lugar a intervenciones ante la Comisión Nacional de Pensiones, sita en Capital Federal, debido a la demora existente en los trámites de Pensiones Asistenciales, ya sea por Vejez, Madre de 7 Hijos, Discapacidad y Veteranos de Guerra.

Además, se trabajó en estrecha relación con los CAP, Centros de Atención Personalizada, que existen en la provincia, cuyas Delegaciones se encuentran en Viedma, General Roca y San Carlos de Bariloche, como así también con las Áreas Sociales de los Municipios.

Expedientes tramitados: 7706/05, 7721/05, 7735/05, 7818/05, 7823/05, 7827/05, 7835/05, 7852/05, 7856/05, 7870/05, 7873/05, 7885/05, 7890/05, 7900/05, 7933/05, 7937/05, 7955/05, 7967/05, 7987/05, 8009/05, 8040/06, 8047/06, 8050/06, 8060/06, 8105/06, 8146/06, 8168/06, 8183/06, 8187/06, 8194/06, 8195/06, 8252/06, 8255/06, 8279/06, 8343/06, 8460/06, 8493/06, 8496/06, 8506/06, 8518/06, 8589/06, 8601/06, 8670/06, 8737/06, 8739/06, 8760/06, 8762/06, 8766/06, 8774/06, 8799/06, 8817/06, 8832/06, 8851/06, 8915/06, 8918/06, 8943/06, 8957/06, 8963/06, 8976/06, 9041/06, 9043/06, 9049/06, 9065/06, 9107/06, 9172/06, 9199/06, 9203/06, 9277/06, 9288/06, 9304/06, 9318/06, 9519/06, 9578/06, 9580/06, 9584/06.

*** PROFE – (PROGRAMA FEDERAL DE SALUD):**

Este Programa beneficia a las personas que han tenido acceso a una Pensión Asistencial y la cobertura que brinda es la atención en hospitales o centros Asistenciales con profesionales adheridos; medicamentos; prótesis, cirugías; audífonos; internaciones en geriátricos; material descartable, etc.

Las intervenciones se efectuaron como consecuencia de la demora en dar la cobertura requerida. Los expedientes son los N°s: 7800/05, 7845/05, 7874/05, 8056/06, 8139/06, 8156/06, 8315/06, 8481/06, 8511/06, 8599/06, 8688/06, 8689/06, 8748/06, 8935/06 y 9461/06.

Además, en el presente período se trataron temas relacionados con: ANSeS; Unidad de Control Previsional; AFJP. Los expedientes conformados en su mayoría fueron solucionados. A saber, Expedientes N°s: 7765/05, 7797/05, 7865/05, 8053/06, 8078/05, 8105/06, 8132/06, 8135/06, 8198/06, 8223/06, 8304/06, 8433/06, 8530/06, 8546/06, 8588/06, 8598/06, 8633/06, 8682/06, 8778/06,

8881/06, 8890/06, 8923/06, 8992/06, 9086/06, 9123/06, 9133/06, 9207/06, 9350/06 y 9456/06.

*** INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA:**

El acceso a una vivienda que reúne las condiciones de habitabilidad adecuadas es señalado por el conjunto de los ciudadanos rionegrinos como uno de los principales problemas que debe afrontar nuestra provincia.

El derecho a la vivienda, que forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales, es un componente esencial del derecho humanitario internacional.-

Si bien el derecho a una vivienda digna no obliga al Estado Provincial a construir vivienda para toda la población o a suministrarla gratuitamente, si los obliga a adoptar una serie de medidas políticas y legales que reconozcan cada uno de los aspectos constitutivos de estos derechos.-

Una estimación moderada en nuestra provincia podemos decir que miles de personas viven en un estado de carencia absoluta de hogar, o están obligados por la circunstancias a vivir en condiciones de "vivienda desesperadamente inadecuada", que amenazan su salud, su seguridad y su dignidad.-

La vivienda social continua siendo uno de los medios eficaces para garantizar a todas las personas el derecho a un lugar donde vivir con paz y seguridad, pero hasta ahora, los esfuerzos provinciales han resultado del todo insuficientes.-

En cuanto a la necesidad de los reclamantes de contar con una vivienda, la respuesta del Organismo se circunscribe a que *"...el reclamo ha sido derivado a la Delegación correspondiente para ser tenida en cuenta en el caso de contar con viviendas recuperadas..."; "... que dicho reclamo fue derivado a la Agencia Zonal, a los efectos de ser considerado como prioritario, para el caso de contar con alguna vivienda recuperada"; "...que la solicitud de vivienda se elevo a la Agencia de esa localidad para su incorporación en la demanda habitacional solicitando su correspondiente análisis ante la posibilidad de contar con viviendas recuperadas"* y así sucesivamente.

Sobre esta cuestión se trataron los siguientes expedientes: 7709/05, 7730/05, 7747/05, 7755/05, 7756/05, 7770/05, 7780/05, 7782/05, 7812/05, 7875/05, 7909/05, 7940/05, 7942/05, 7957/05,

7973/05, 7986/05, 8023/06, 8025/06, 8035/06, 8037/06, 8052/06, 8054/06, 8059/06, 8084/06, 8104/06, 8110/06, 8124/06, 8140/06, 8151/06, 8164/06, 8186/06, 8215/06, 8232/06, 8286/06, 8297/06, 8351/06, 8371/06, 8376/06, 8401/06, 8424/06, 8425/06, 8427/06, 8430/06, 8432/06, 8438/06, 8468/06, 8474/06, 8478/06, 8539/06, 8558/06, 8600/06, 8604/06, 8607/06, 8609/06, 8614/06, 8616/06, 8620/06, 8643/06, 8660/06, 8671/06, 8679/06, 8718/06, 8722/06, 8768/06, 8779/06, 8786/06, 8802/06, 8807/06, 8812/06, 8818/06, 8820/06, 8826/06, 8845/06, 8850/06, 8853/06, 8858/06, 8875/06, 8888/06, 8891/06, 8901/06, 8906/06, 8914/06, 8929/06, 8942/06, 8952/06, 8964/06, 8965/06, 9001/06, 9007/06, 9021/06, 9030/06, 9033/06, 9038/06, 9040/06, 9048/06, 9062/06, 9068/06, 9073/06, 9074/06, 9076/06, 9081/06, 9087/06, 9102/06, 9105/06, 9120/06, 9126/06, 9140/06, 9142/06, 9151/06, 9158/06, 9178/06, 9183/06, 9192/06, 9204/06, 9211/06, 9254/06, 9255/06, 9259/06, 9273/06, 9276/06, 9284/06, 9285/06, 9287/06, 9303/06, 9324/06, 9355/06, 9356/06, 9364/06, 9381/06 y 9400/06.

Ante la solicitud de viviendas y terrenos por parte de familias carenciadas que no pueden acceder por sus bajos ingresos a los planes de vivienda, construidas por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, se asesoro sobre la posibilidad de solicitar los materiales necesarios al Ministerio de la Familia, "Programa Habitar en Familia", cuestiones tratadas en los siguientes expedientes: 7801/05, 7819/05, 7826/05, 7877/05, 7894/05, 7974/05, 7975/05, 8038/06, 8126/06, 8182/06, 8214/06, 8241/06, 8319/06, 8456/06, 8457/06, 8877/06, 8934/06, 9124/06 y 9275/06.

En cuanto a los reclamantes que solicitaron materiales de construcción para refaccionar, ampliar, mejorar, techar, construir y terminar su vivienda, se indico que la asistencia en materiales de construcción a toda la población rionegrina vulnerable se realiza a través del Programa Habitar en Familia mediante la entrega de un vale social para compra de materiales de construcción o ordenes de provisión, a fin de mejorar la calidad habitacional del grupo familiar.

Sobre esta cuestión se trataron los siguientes expedientes: 7752/05, 7834/05, 7841/05, 7896/05, 7960/05, 7932/05, 8121/06, 8134/06, 8145/06, 8206/06, 8222/06, 8225/06, 8236/06, 8247/06, 8256/06, 8261/06, 8285/06, 8308/06, 8465/06, 8471/06, 8479/06,

8513/06, 8535/06, 8560/06, 8605/06, 8651/06, 8829/06, 8836/06, 8846/06, 8932/06, 8977/06, 8997/06, 9106/06, 9114/06, 9198/06, 9208/06, 9212/06, 9232/06, 9290/06, 9305/06, 9346/06 y 9363/06.

*** INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD - I.PRO.S.S. —:**

Es publico y notorio el problema que hoy tienen los afiliados a la Obra Social Provincial, que a muchos de ellos los ha obligado a recurrir a la Justicia por vía del amparo, agotadas todas las instancias administrativas, simplemente para solicitarle a los jueces que ordenen a los prestadores que cumplan con la prestación de servicios, atento que el afiliado demuestra que es aportante del sistema y ha pagado el coseguro correspondiente.

A raíz de la profundización del quebranto en el servicio de las prestaciones, comenzaron los cortes y/o suspensiones, reducción del vademécum, los cobros de plus y el abuso de la utilización del mecanismo de reintegro, donde el afiliado paga la prestación completa y el I.PRO.S.S. le reconoce el pago a valores que no se condicen con la realidad actual

La relación con el Colegio Médico de la Zona Atlántica sigue sin solución, ello en detrimento de los afiliados, ya que deben abonar a los profesionales de la salud \$ 30,00 por visita, de estas sumas el IPROSS reintegra solamente \$ 10,00 la diferencia corre por cuenta del afiliado, esto ha llevado a la saturación de los Hospitales Públicos.

Las quejas sobre el funcionamiento de la Obra Social Provincial relacionadas con: falta de pago de reintegros, provisión de prótesis, ortesis y medicamentos fueron tratadas en los siguientes expedientes: 7741/05, 7750/05, 7799/05, 7809/05, 7814/05, 7905/05, 7917/05, 7919/05, 7968/05, 7993/05, 8013/05, 8021/06, 8041/06, 8058/06, 8061/06, 8073/06, 8080/06, 8081/06, 8083/06, 8093/06, 8120/06, 8174/06, 8197/06, 8216/06, 8227/06, 8242/06, 8245/06, 8270/06, 8311/06, 8312/06, 8419/06, 8422/06, 8426/06, 8440/06, 8477/06, 8501/06, 8522/06, 8566/06, 8557/06, 8627/06, 8637/06, 8650/06, 8657/06, 8698/06, 8710/06, 8712/06, 8750/06, 8761/06, 8763/06, 8764/06, 8824/06, 8828/06, 8868/06, 8872/06, 8887/06, 8905/06, 8908/06, 8917/06, 8940/06, 8986/06, 9022/06, 9113/06, 9148/06, 9193/06, 9195/06, 9220/06, 9231/06, 9258/06, 9282/06 y 9358/06.-

Debemos destacar que a pesar de que la Obra Social Provincial no cuenta con los fondos suficientes para afrontar los gastos médicos sanatoriales, ha brindado solución a los requerimientos planteados por esta Defensoría del Pueblo en los expedientes mencionados precedentemente.

Expedientes aún en trámite: 8871/06, 9180/06, 9281/06, 9347/06, 9354/06, 9382/06 y 9397/06.

*** MINISTERIO DE SALUD – HOSPITALES DE RIO NEGRO:**

“La Salud es un derecho esencial y un bien social que hace a la dignidad humana. Los habitantes de la provincia tienen derecho a un completo bienestar psicofísico y espiritual debiendo cuidar su salud y asistir en caso de enfermedad. El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integradas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, incluye el control de riesgos biológicos y socioambientales de todas las personas desde su concepción, para prevenir la posibilidad de enfermedad o muerte por causas que se puede evitar”. (Art. 59 de la Constitución de la Provincia de Río Negro).-

El sistema de salud es una unidad indivisible, una sola pieza, si falla un engranaje el todo se resiente.-

La solución en la salud es la lucha por la resolución de los conflictos, no quedarse quietos y adaptarse.-

En el marco de la responsabilidad del Estado, el llamado “**acceso a la salud**” se constituye en “derecho social” y “bien social”, cuya obtención el Estado debe garantizar.

En términos económicos la salud y la educación son los pilares angulares del capital humano. La buena salud de la población es un factor esencial para la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y el desarrollo económico a largo plazo.-

El Hospital Público tiene en el sistema de Salud un papel preponderante, ya que casi el 70% de la población aproximadamente acude al mismo.-

Debemos destacar que el Ministerio de Salud siempre ha respondido y solucionado los requerimientos de esta Defensoría, tanto en los reclamos formulados en los expedientes o en trámites personales llevados adelante por el Área de Salud de la Defensoría, como asimismo conseguir soluciones telefónicamente.-

Esta Defensoria del Pueblo durante este periodo ha tratado reclamos sobre demoras en autorización de cirugías, pedidos de prótesis y ortesis, inconvenientes con derivaciones, pedido y falta de medicamentos específicos (Ej.: HIV, oncológicos, etc), seguridad en Hospitales, perdida de dosis de vacunas, falta de ambulancias, inconvenientes con situación edilicia y atención medica de los nosocomios los cuales fueron tratados en los siguientes expedientes: 7736/05, 7767/05, 7793/05, 7952/05, 7964/05, 8008/05, 8027/06, 8149/06, 8185/06, 8196/06, 8302/06, 8332/06, 8346/06, 8370/06, 8396/06, 8458/06, 8505/06, 8549/06, 8866/06, 8975/06, 9070/06, 9202/06, 9099/06, 9153/06, 9161/06, 9170/06, 9182/06, 9217/06, 9252/06, 9266/06, 9280/06, 9283/06, 9292/06, 9296/06, 9338/06, 9346/06 y 9376/06.

*** SEGURIDAD:**

La mayoría de los expedientes tratan sobre supuestos abusos de autoridad de miembros de la Institución, quienes por denuncias de particulares o por noticias periodísticas que motivaron las actuaciones de oficio de esta Defensoria, estarían involucrados en los hechos mencionados en detrimento del respeto de los derechos humanos. Todos fueron remitidos a la Jefatura de la Institución, quienes dieron pronto tramite a los mismos, sin embargo la gran mayoría se encuentran pendiente de resolución judicial.

Sobre esta temática, se tramitaron los exptes. N°: 7758/05, 8039/06, 8055/06, 8086/06, 8094/06, 8099/06, 8102/06, 8160/06, 8211/06, 8217/06, 8287/06, 8293/06, 8317/06, 8338/06, 8341/06, 8475/06, 8758/06, 8791/06, 8834/06, 8839/06, 8841/06, 8842/06, 8843/06, 8859/06, 8860/06, 8893/06, 8900/06, 8928/06, 8979.06, 9046/06 y 9176/06.

*** DEFENSA DEL CONSUMIDOR:**

Los reclamos de los consumidores y usuarios de servicios son derivadas a la Dirección General de Comercio Interior, con competencia para convocar a audiencias y aplicar sanciones, así como otras tareas de autoridad de aplicación de leyes nacionales y provinciales en la materia.

Entre las temáticas presentadas, podemos destacar los cuestionamientos vinculados a: empresas de televisión por cable, proveedores de Internet, usuarios de servicios bancarios, compañías

de seguros, garantía de electrodomésticos, intereses abusivos en tarjetas de crédito, compra de equipos celulares, agencias de turismo, planes de ahorro de automotores, publicidad engañosa.

Iniciamos DE OFICIO una actuación con relación a la mala calidad del servicio prestado por la empresa Transcable de Viedma, que ejerce una posición dominante en el mercado, al ser la única prestadora en su tipo. Nuestra intervención que permitió que dejaran de interrumpir la transmisión de la programación de Canal 13 (Expte N° 9294/06).

Los expedientes tramitados fueron los N°s: 7711/05, 7719/05, 7739/05, 7786/05, 7829/05, 8100/06, 8111/06, 8131/06, 8209/06, 8721/06, 8727/06, 8770/06, 8775/06, 8863/06, 8878/06, 8882/06, 9036/06, 9078/06, 9091/06, 9115/06, 9227/06, 9264/06 y 9291/06

**** SERVICIOS BANCARIOS:***

Las problemáticas de los usuarios de servicios bancarios en su mayoría se originan por la insuficiente información brindada por las entidades a sus clientes, sobre sus saldos deudores, tasa de interés y modo de aplicarla, acreditaciones en cuentas comitentes, débitos, etc.

Se reiteró, como en otros períodos, la solicitud de apertura de más Cajeros Automáticos del Banco Patagonia Sudameris, agente financiero del Estado Provincial, dada la falta de sucursales en pequeñas localidades. Esta cuestión fue puesta en conocimiento de la Legislatura Provincial en virtud del proceso licitatorio en curso, ante el vencimiento del contrato con dicha entidad.

Los Expedientes en cuestión fueron los N°s: 7853/05, 8260/06, 8191/06, 8275/06, 8372/06, 8408/06, 8437/06, 8454/06, 8634/06, 8773/06, 8937/06, 9069/06, 9097/06, 8321/06 y 9075/06

*** EDUCACIÓN:**

Los numerosos trámites que involucran la actuación del Ministerio de Educación pueden dividirse entre cuestiones originadas en reclamos laborales del sector docente (salariales, movilidad, régimen disciplinario, Junta de Clasificación, Manual de Títulos, asambleas para tomar cargos, concursos, traslados, licencias, etc) y actuaciones promovidas por padres o alumnos de las comunidades

educativas. Dada la gran cantidad de reclamos presentados por estos últimos, la que sigue es una síntesis de los mismos:

- Ingreso a Nivel Primario y Medio: insuficiente matrícula, permutas, etc. (derivados a las Supervisiones)
- Boleto estudiantil para alumnos de la Universidad del Comahue (derivado a DGR para reglamentación exenciones impositivas a empresas de transporte)
- Accidentes en el ámbito escolar (se informó sobre su cobertura)
- Conflictos con autoridades educativas (caso CEM N° 98 y CEM N° 29 de San Antonio Oeste, ambos con intervención de Junta de Disciplina)
- Solicitudes de desdoblamientos de secciones o en contra de la clausura de otras, cierre de escuelas, cambios de modalidad, etc (Escuela N° 251 Sierra Grande, Escuela para adultos N° 31 Comallo, CEM N° 18 Allen, Escuela de Folklore Cipolletti, todos solucionados)
- Problemas edilicios (falta de calefacción - Escuela N° 283 Cipolletti y CEM 32, ambos solucionados, pedido de nuevo edificio para la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 3 – en trámite ante Dirección de Arquitectura-)
- Solicitud de maestro domiciliario en Sierra Grande (superados)
- Reclamos por becas primarias, de Nivel Medio, universitarias, por discapacidad e indígenas (se brindó información para su gestión)

Los Expedientes tramitados fueron los N°s: 7716/05, 7720/05, 7738/05, 7759/05, 7769/05, 7776/05, 7778/05, 7784/05, 7791/05, 7820/05, 7824/05, 7839/05, 7847/05, 7858/05, 7887/05, 7889/05, 7939/05, 7941/05, 7951/05, 7953/05, 7996/05, 8015/05, 8016/05, 8017/05, 8022/05, 8024/06, 8043/06, 8063/06, 8087/06, 8162/06, 8171/06, 8184/06, 8203/06, 8220/06, 8243/06, 8250/06, 8251/06, 8258/06, 8259/06, 8269/06, 8301/06, 8309/06, 8318/06, 8334/06, 8344/06, 8354/06, 8359/06, 8360/06, 8363/06, 8365/06, 8367/06, 8374/06, 8381/06, 8394/06, 8406/06, 8417/06, 8532/06, 8545/06, 8576/06, 8610/06, 8655/06, 8673/06, 8684/06, 8702/06, 8714/06, 8719/06, 8726/06, 8734/06, 8816/06, 8823/06, 8873/06, 8874/06, 8930/06, 8969/06, 8978/06, 8991/06, 9000/06, 9008/06, 9017/06, 9034/06, 9042/06, 9088/06, 9089/06, 9141/06, 9165/06, 9210/06,

9213/06, 9228/06, 9237/06, 9248/06, 9256/06, 9269/06, 9297/06, 9315/06, 9327/06, 9345/06, 9534/06 y 9541/06.

**** SERVICIO DE GAS:***

En el presente año se agudizó el rechazo de los usuarios a la aplicación de la Resolución 624/06 de la Secretaría de Energía de la Nación, que estipula cargos adicionales por mayor consumo, en el marco del Programa de Uso Racional de la Energía – PURE-.

Los reclamos derivados al ENARGAS no encontraron respuesta favorable, aún cuando se plantearon situaciones de excepción como la del incremento de los metros cubiertos de las viviendas – y por tanto de la calorías-, cuestión ésta no considerada por la autoridad con facultades reglamentarias para redefinir los alcances de la normativa cuestionada .

Es inminente el dictado de la Resolución a través de la cual se pide intervención al Defensor del Pueblo de la Nación

Otra temática recurrente, es la planteada por vecinos de distintas localidades que solicitan subsidios para la extensión de la red domiciliaria de gas. En todos los casos se derivaron los casos a la Comisión Especial del Fondo para Obras de Gas- Ley 2.059-

Los Expedientes vinculados con la presente temática son los N°s: 7734/05, 7792/05, 7927/05, 7959/05, 7966/05, 7972/05, 8004/05, 8116/06, 8172/06, 8212/06, 8366/06, 8404/06, 8411/06, 8612/06, 8769/06, 8972/06, 8790/06, 8924/06, 9085/06, 9327/06, 9342/06, 9348/06, 9368/06, 9383/06, 9391/06, 9394/06 y 9399/06.

**** TELEFONIA:***

Todos los reclamos de usuarios de telefonía fija y móvil son derivados a la Delegación de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Las quejas se inscriben en cuestionamientos por desmesurados importes en facturaciones telefónicas, cortes de servicio, demoras en la instalación de líneas telefónicas, cambios de planes, servicios de cabinas telefónicas, etc.

También se presentó la problemática de los altos costos pretendidos por la empresa Telefónica de Argentina para extender la red y prestar el servicio en nuevos barrios ubicados fuera del Área de Tarifas Básicas Extendida – ATBE- (casos Viedma y Las Grutas). Derivamos los reclamos a la Gerencia de Control de la CNC e instamos la reformulación de los mapas georeferenciados, aprobados

oportunamente por el ente regulador, de modo que contemplen el crecimiento urbanístico.

Aquí se tramitaron los Expedientes N°s: 7764/05, 7831/05, 7872/05, 7963/05, 7970/05, 7997/05, 9129/06, 9143/06, 9171/06, 9278/06, 9289/06, 9302/06, 9309/06, 9373/06, 8028/06, 8034/06, 8077/06, 8095/06, 8106/06, 8136/06, 8137/06, 8179/06, 8201/06, 8202/06, 8264/06, 8410/06, 8444/06, 8473/06, 8486/06, 8551/06, 8576/06, 8904/06, 8919/06, 8936/06 y 9057/06.

*** CULTURA:**

Expte: 7985/05 s/ investigación del envío de restos fósiles a Italia– Resol 1662/05 y RECOMENDACIÓN N° 338/06. Remitido al Fiscal de Investigaciones Administrativas y con informes pendientes de respuesta.

Expte N° 8783/06 s/ demoras en el traslado del archivo histórico provincial. Resoluciones N° 665/06 y 1182/06 SUPERADO

Expte N° 8349/06: Solicitud de información por fondos del INCAA a proyectos audiovisuales en la Provincia. Se recibieron informes satisfactorios de Instituto y de la Agencia Cultura.

Expte. N° 9392/06. Reclamo de Bibliotecas Populares por financiamiento del fondo Ley 2.023 (En trámite)

Expte N° 8695/06 s/ clausura de emisora de radio. Resoluciones N° 715/06 y 1313/06 **SOLUCIONADO**

*** TRANSPORTE:**

Cuestionamiento al Decreto 678/06 del PEN:

La Defensoría de Pueblo exhortó a las autoridades provinciales y nacionales ante la discriminación sufrida por la Provincia de Río Negro, luego que el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 678/06, estableciera un Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) para atender los mayores gastos operativos que tienen las empresas de ómnibus de la zona metropolitana (Capital Federal y Gran Buenos Aires). Solicitamos entonces, **se distribuya con criterios federales de los fondos integrativos del citado Régimen.** (Resol. 872/06- Expte N° 8971/06)

Con posterioridad a ello, el Defensor del Pueblo de la Nación, recepcionando la inquietud de los Defensores del Pueblo de distintas provincias, se pronunció en idéntico sentido

*** TEMAS VARIOS:**

Otra gran variedad de temas planteados por los ciudadanos han motivado intervenciones de la Defensoría del Pueblo, muchas de las cuales se agotaron con el debido asesoramiento pues se trataban de cuestiones entre particulares.

En otros supuestos gestiones inmediatas permitieron evacuar consultas, brindar orientación sobre trámites a cargo de los propios interesados o solucionar temas urgentes.

Así podemos mencionar actuaciones vinculados a:

Asesoramientos legal a demandados en juicios o causas penales (víctimas o sus familiares), pago de siniestros con Compañía Aseguradora, trámites de sucesión, venta de propiedad, adición de apellido materno, conflictos entre vecinos, impugnaciones en concursos a ingreso Poder Judicial, conflictos laborales, temas municipales, reclamos por despacho de encomiendas, mala atención en el correo de Chimpay, solicitud de traslado al Hospital Argerich del paciente para recibir un trasplante de riñón, inclusión de datos en el registro de VERAZ, falta de entrega de boleto a pequeños productores, acceso a Área Natural protegida, cierre de camino vecinal, titularidad de terreno, etc.

Los Expedientes tramitados fueron los N°s: 7712/05, 7725/05, 7745/06, 7749/06, 7795/05, 7808/05, 7864/05, 7910/05, 7916/06, 7936/05, 7962/05, 8019/05, 8065/06, 8096/06, 8127/06, 8295/06, 8314/06, 8335/06, 8348/06, 8366/06, 8404/06, 8448/06, 8472/06, 8529/06, 8585/06, 8617/06, 8639/06, 8661/06, 8675/06, 8678/06, 8705/06, 8725/06, 8782/06, 8806/06, 8833/06, 8884/06, 8885/06, 8939/06, 8970/06, 9010/06, 9027/06, 9052/06, 9056/06, 9132/06, 9134/06, 9186/06, 9201/06, 9229/06, 9234/06, 9235/06, 9247/06, 9267/06, 9295/06, 9357/06, 9259/06, 9403/03 y 9510/06.

*** CUESTIONES FUERA DEL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO:**

Entre los muy variados reclamos la temática mas recurrente versó sobre problemas de escrituración de bienes inmuebles, conflictos entre particulares y distintas problemáticas entre particulares y Municipios. Así se declaró la falta de competencia en las actuaciones

que se detallan: Expedientes N°s 7737/05, 7742/05, 7770/05, 7772/05, 7822/05, 7863/05, 7866/05, 7867/05, 7879/05, 7884/05, 7892/05, 7915/05, 7929/05, 7945/05, 7948/05, 7956/05, 7965.05, 7969/05, 7971/05, 7977/05, 7991/05, 7995/05, 8030/06, 8036/06, 8066/06, 8109/06, 8122/06, 8142/06, 8157/06, 8167/06, 8178/06, 8180/06, 8192/06, 8199/06, 8208/06, 8213/06, 8326/06, 8337/06, 8350/06, 8368/06, 8379/06, 8387/06 8392/06, 8421/06, 8431/06, 8436/06, 8441/06, 8446/06 8450/06, 8452/06, 8487/06, 8489/06, 8491/06, 8495/06, 8508/06, 8509/06, 8514/06, 8519/06, 8536/06, 8550/06, 8563/06, 8593/06 8595/06, 8603/06, 8619/06, 8624/06, 8629/06, 8630/06, 8631/06, 8632/06, 8640/06, 8658/06, 8659/06, 8663/06, 8703/06, 8713/06, 8742/06 8745/06, 8751/06, 8756/06, 8776/06, 8781/06, 8788/06 8798/06, 8852/06, 8855/06, 8880/06, 8889/06, 8894/06, 8909/06, 8941/06, 8949/06, 8950/06, 8951/06, 8661/06, 8742/06, 8880/06, 8920/06, 8922/06, 8987/06, 8983/06, 8989/06, 8995/06, 8999/06, 9002/06, 9003/06, 9009/06, 9018/06, 9035/06, 9045/06, 9047/06, 9060/06, 9064/06, 9067/06, 9096/06, 9111/06, 9118/06, 9121/06, 9135/06, 9138/06, 9159/06, 9166/06, 9187/06, 9214/06, 9215/06, 9240/06, 9242/06, 9244/06, 9279/06, 9307/06, 9310/06, 9312/06, 9336/06, 9337/06, 9362/06, 9369/06, 9390/06, 9472/06, 9490/06 y 9511/06.

*** DIRECCION GENERAL DE RENTAS:**

Los casos promovidos en general se centraron en información sobre temas como la solicitud de exenciones impositivas, información de deuda y compensación, etc. Los Expedientes tramitados fueron los N°s: 7983/05, 8064/06, 8103/06, 8314/06, 8361/06, 8390/06, 8654/06, 8676/06, 8765/06, 8925/06, 9147/06 y 9545/06.

*** MUTUALES:**

En los pocos casos denunciados la gran mayoría de ellos se refiere a la búsqueda de asesoramiento sobre el denominado "Fondo Compensador", y de descuentos que practican las mutuales. Los expedientes fueron los N°s: 7732/05, 7840/05, 8062/06, 8118/06, 8443/06, 8510/06, 8555/06, 8815/06, 9053/06 y 9108/06.

*** TIERRAS FISCALES:**

En general las tramitaciones presentadas en esta Defensoría han versado sobre similares temáticas referidas todas a la pérdida de derechos de ocupación, cesiones de derecho irregulares, falta de intervención de la Dirección de Tierras en conflictos entre particulares ocupantes de tierras fiscales, etc. Se han evacuado numerosas consultas referidas a la tramitación de los expedientes y al procedimiento establecido por la ley 279, que no motivaron formación de expediente alguno.

Aquí se tramitaron los Expedientes N°s: 7208/05, 7771/05, 7897/05, 8006/05, 8044/06, 8159/06, 8177/06, 8274/06, 8641/06, 8642/06, 8644/06 8801/06, 8926/06, 8968/06, 9055/06, 9117/06, 9374/06,

*** SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO:**

Los expedientes tramitados refieren en general a la búsqueda de información sobre presentaciones realizadas ante la Secretaría de Trabajo, a saber, Expedientes N°s: 7880/05, 7882/05, 8075/05, 8230/06, 8423/06, 8447/06, 8497/06, 8556/06, 8453/06, 8793/06, 8814/06, 8884/06.

*** COMISIONES DE FOMENTO:**

En general se ha reclamado por falta de información, reclamos laborales por personas que prestaron servicios, etc. Los Expedientes tramitados fueron los N°s: 8129/06, 8358/06, 8947/06, 8358/06, 8958/06, 8960/06 y 8961/06.

ANEXO II

► Ejecución del presupuesto:

El presupuesto asignado para el presente ejercicio por un total de **\$ 1.157.500** el cual fue incrementado en \$ 243.851,12 resultando un presupuesto definitivo de **\$ 1.401.351,12** distribuido de la siguiente manera:

Personal	\$ 1.162.202,55
Bienes de Consumo	\$ 34.432,50
Servicios no personales	\$ 177.795,07
Bienes de uso	\$ 7.570,00

La ejecución presupuestaria al 26/12/2006 representa el **99,25%** del total del crédito previsto (**\$ 1.390.832,86**). Del total ejecutado el **83,05%** (**\$ 1.155.127,36**) corresponde a gastos en personal y el **16,95%** (**\$ 229.427,54**) a gastos de funcionamiento.

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 37 de la ley 2756, se adjuntan al final de este Anexo:

a) Planillas de Balances Mensuales Formulario 207 (solicitud de transferencia de fondos).

b) Planillas de Relación de Comprobantes de Egresos mensuales y balances.

c) Planilla de Ejecución Presupuestaria.

Todos ellos por el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2005 y el 30 de Noviembre de 2006.-

d) Copia de las Resoluciones de aprobación del Tribunal del Cuentas de las rendiciones del período comprendido entre 01/11/2005 al 31/10/2006.

Todos ellos por el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2005 y el 30 de Noviembre de 2006.-

ANEXO III

INFORME DEL AREA PRENSA Y DIFUSION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

De acuerdo a los números que han arrojado las estadísticas en el último año de actividades, estamos en condiciones de afirmar que no se han producido variantes sustanciales en cuanto a la cantidad, origen y temas de las presentaciones y que por el contrario, se confirma en ese sentido cierta regularidad en los últimos años. Al igual que lo puntualizábamos el año anterior, también en este último ejercicio se advierte que quienes recurren a la Defensoría del Pueblo disponen de mayor información respecto de las posibilidades de la Institución para el tratamiento de sus casos, como así también que algunas presentaciones provienen de personas que en otras oportunidades han acudido al organismo en búsqueda de solución a sus problemas.

En este último año además, se continuó con la política de realizar gestiones en forma personal o directa ante las distintas áreas involucradas en las denuncias, con el propósito de acelerar la posible solución al reclamo, que por su característica o urgencia no admitía la espera de los términos que la ley otorga para dar respuestas. Por esa razón, más de tres mil casos fueron gestionados sin llegar a la apertura del expediente, no obstante se han logrado resultados satisfactorios en gran número de los trámites realizados.

Reiteramos también en esta oportunidad, que a efectos de tornar más útil la información que surge de los cuadros estadísticos, es necesario efectuar algunos comentarios y cotejar las cifras obtenidas con las de informes anteriores.

PROCEDENCIA DE LAS QUEJAS:

Desde el comienzo de las actividades de la Defensoría, la mayor cantidad de quejas presentadas provienen de la ciudad de Viedma, seguramente, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, por encontrarse en esta ciudad Capital la sede del organismo. De este modo entonces,

mientras en el ejercicio anterior el 33 % de las denuncias o quejas tienen su origen en Viedma, este año provienen de esta ciudad el 32%. En forma coincidente también se ubican luego las ciudades de General Roca, Allen y Bariloche, las que el año anterior aportaron, Roca el 8% y Allen y Bariloche el 6% cada una, mientras que este año Roca y Allen fueron el origen del 8% cada una de las denuncias, mientras que Bariloche sumo el 7%.

La inclusión de Viedma en la zona del Valle Inferior hace que esta región también encabece la nómina con la mayor cantidad de quejas, que al igual que el año anterior, en el presente ejercicio suma el 35%. En segundo término se ubica la zona del Alto Valle Centro con el 15% de las quejas, desplazando a la Región Andina al tercer lugar con un 13%, en tanto que el cuarto lugar es ocupado ahora por el Alto Valle Oeste con el 11% y el quinto por el Alto Valle Este, descendiendo la Zona Atlántica, al sexto lugar con el 8 %, mientras que el año anterior estaba en tercer lugar con el 11%. Se destaca entonces que las regiones del Alto Valle en su conjunto han aportado este año mayor cantidad de denuncias que en el año anterior.

INTERES DE LAS QUEJAS

En lo que hace al interés de las denuncias que se recibieron, el particular de cada denunciante, al igual de lo que viene ocurriendo desde el inicio mismo de las actividades de esta Defensoría, ocupa con amplitud la primera colocación que este año asciende al 97%.

QUIENES DENUNCIAN

De las cifras obtenidas este año surge también que las mujeres siguen siendo quienes mas denuncias presentan o que en mayor medida acuden a la Defensoría, mostrando además una regularidad o paridad notables, ya que en el ciclo 2003/2004 el 57% de las quejas fueron presentadas por mujeres, en tanto que en los ejercicios 2004/2005 y 2005/2006, aportaron el 58 % de las mismas.

TEMAS MAS DENUNCIADOS

La regularidad que hemos marcado inicialmente en relación a las distintas especificaciones vinculadas con las denuncias de este año en relación a los anteriores, se observa también en lo que hace a la

temática de las quejas, y salvo pequeñas modificaciones en los porcentajes, que motivan asimismo cambios en el orden, los temas previsionales, habitacionales, servicios, laborales, obras sociales, salud y educacionales siguen siendo los mas denunciados.

Este año, el orden de las quejas que arrojaron las estadísticas determinó que las cuestiones Provisionales con el 13% esta al tope de las presentaciones, seguidas por problemas Habitacionales con el 12%, Servicios Públicos con el 10%, Obras Sociales con el 9%, Laborales y Educacionales con el 6% y Salud con el 5% son los principales temas que reclaman soluciones. Para tener una referencia mas concreta recordamos que en el ejercicio 2004/2005, los temas Habitacionales encabezaron las denuncias con el 13%, seguidos de cuestiones Previsionales con el 12%, Servicios y Laborales con el 8% y Salud, Judiciales y Educacionales con el 7% cada una.

15.985 EXPEDIENTES

Esta cantidad de problemas, traducidos en denuncias o quejas, han presentado los vecinos de la Provincia desde 1996, cuando se iniciaron las actividades en esta Defensoría del Pueblo. A ellos hay que sumarle la cantidad de personas que efectuaron también presentaciones, pero como lo indicamos mas arriba en razón de la premura que el tema requería se efectuaron gestiones en forma personal ante los distintos organismos involucrados.

Cabe destacar asimismo que solamente en este último ejercicio, mas de 3.000 personas han sido atendidas bajo esta modalidad, lo que indudablemente demuestra también como lo marcábamos anteriormente, que los ciudadanos de nuestra Provincia además de haber tomado mayor conocimiento respecto de las acciones que el organismo desarrolla, han depositado en el la confianza necesaria para que gestione o tramite la solución al problema que lo trajo hasta la Institución.

LA PRENSA

No por reiterativo deja de tener valor el reconocimiento a los medios de comunicación y periodistas que en los mismos se desempeñan, ya que desde el comienzo de las actividades de la Defensoría del Pueblo han acompañado las mismas. En este aspecto insistimos también en que no solamente ha sido valiosa la difusión de los actos de este organismo,

sino que nos han permitido tomar conocimiento de sucesos que requerían nuestras actuaciones, que de hecho hemos asumido.

Han sido además de utilidad las críticas o comentarios sobre nuestro accionar, ya que ellos posibilitaron la evaluación de acciones emprendidas y corregir rumbos si ello ha sido necesario.

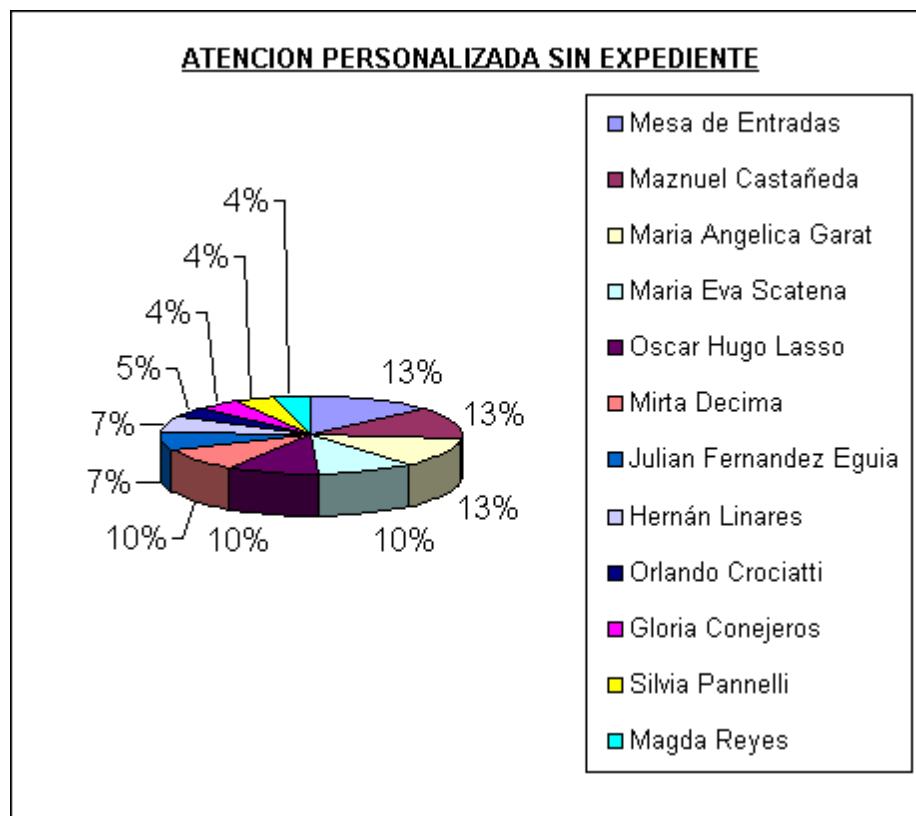
Como lo venimos haciendo desde 1996, muchas gracias por la colaboración prestada.

CUADROS ILUSTRATIVOS

Para mayor ilustración, se adjuntan los cuadros respectivos con los datos estadísticos referenciados.

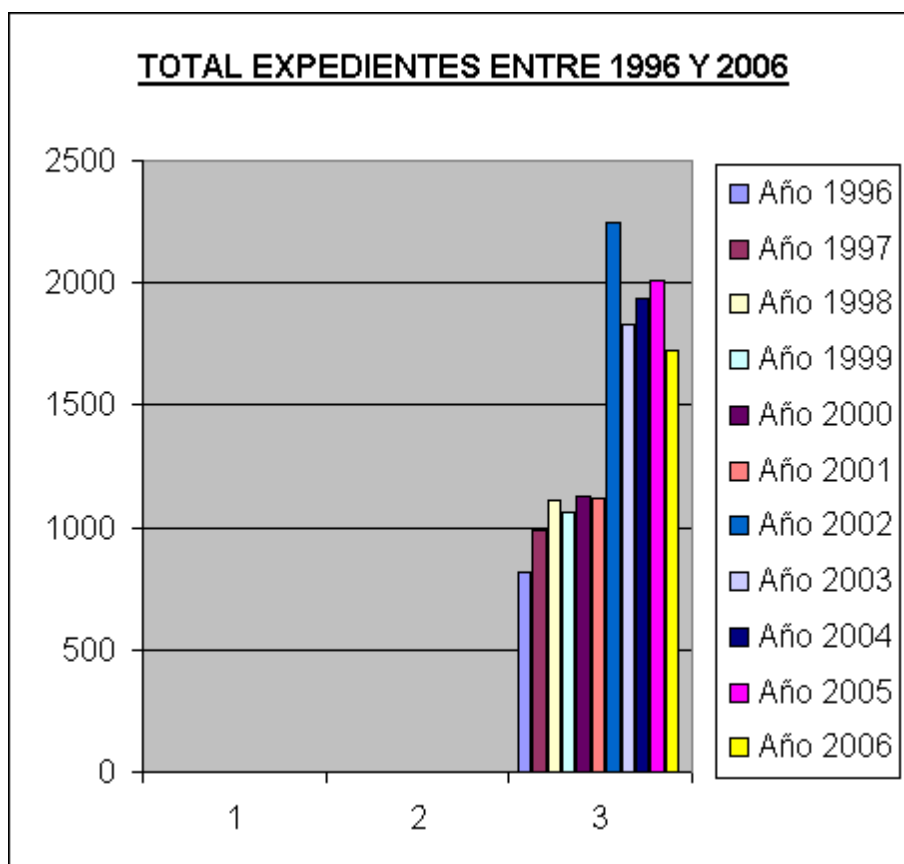
**ATENCION PESONALIZADA EN LA SEDE
DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO**

Mesa de Entradas	421
Maznuel Castañeda	393
Maria Angelica Garat	386
Maria Eva Scatena	322
Oscar Hugo Lasso	305
Mirta Decima	298
Julian Fernandez Eguia	219
Hernán Linares	208
Orlando Crociatti	140
Gloria Conejeros	138
Silvia Pannelli	132
Magda Reyes	126
TOTAL	3088



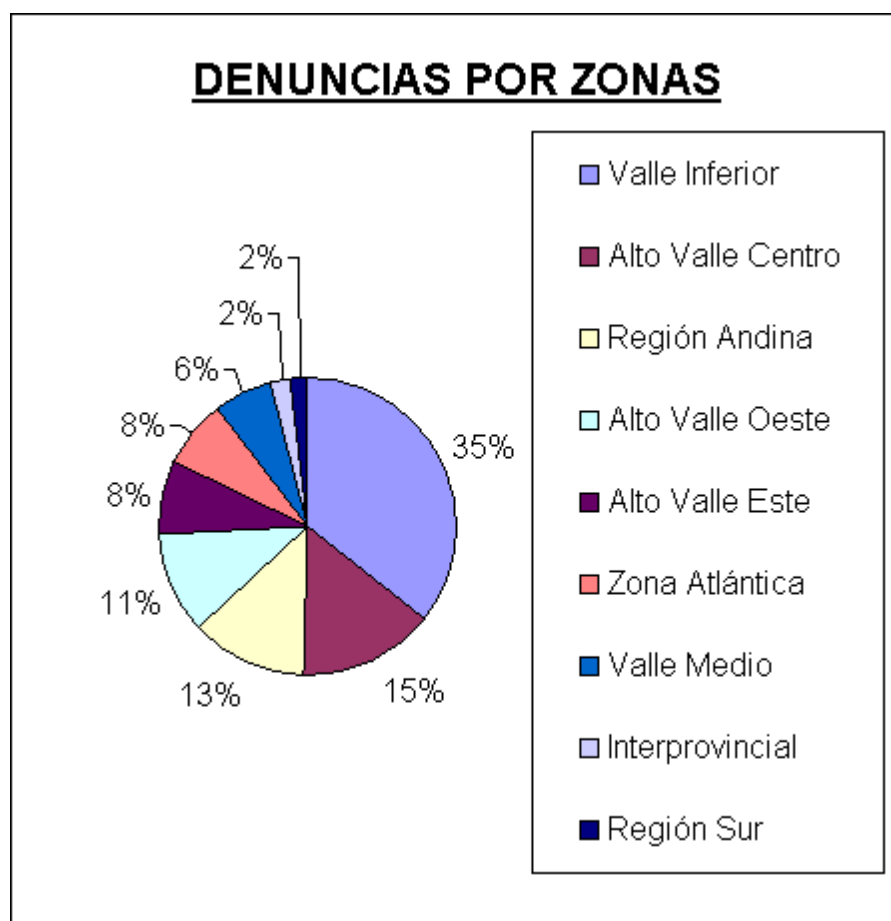
TOTAL EXPEDIENTES
REGISTRADOS
ENTRE LOS AÑOS 1996 Y 2006

Año 1996	821
Año 1997	988
Año 1998	1113
Año 1999	1066
Año 2000	1130
Año 2001	1121
Año 2002	2244
Año 2003	1833
Año 2004	1936
Año 2005	2008
Año 2006	1725
TOTAL	15985



PROCEDENCIA DE LAS DENUNCIAS POR ZONAS ENTRE EL
01 DE NOVIEMBRE DEL 2005 Y EL 31 DE OCTUBRE DEL 2006

Valle Inferior	614
Alto Valle Centro	254
Región Andina	216
Alto Valle Oeste	192
Alto Valle Este	141
Zona Atlántica	133
Valle Medio	108
Interprovincial	36
Región Sur	31
TOTAL	1725



FORMAS DE PRESENTAR DENUNCIAS ENTRE EL
01 DE NOVIEMBRE DEL 2005 Y EL 31 DE OCTUBRE DEL 2006

Formularios Juzgados de Paz	928
Por Correspondencia	381
Personalmente	208
Correo Electrónico	78
De oficio	69
Telefónicamente	61
TOTAL	1725

